



Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales

Licenciatura en Relaciones Internacionales

Tesina de grado

***La seguridad alimentaria en el Sur Global: el caso del
impacto de la Guerra en Ucrania en América Latina y el
Caribe, África y Medio Oriente entre 2022 y 2024***

Alumno: Francisco David Muratore (M-3066/1)

Directora: Emilse Calderón

Rosario, 18 agosto de 2025

Agradecimientos:

Eterna gratitud a mi familia, amigos, profesores, compañeros y a todos aquellos que me acompañaron a lo largo del camino y que hicieron esto posible. Pero por sobre todas las cosas gracias a la universidad pública por formarme y permitirme ser quien soy hoy.

Resumen:

Rusia y Ucrania tienen una historia común de larga data, comenzando por su origen común, la Rus de Kiev, el primer Estado eslavo de la historia surgido en la Edad Media, que abarcaba territorios de la actual Ucrania y Rusia con capital en Kiev. En el siglo XXI, ambos países representan el 30% del trigo comercializado internacionalmente, el 20% del maíz y el 70% del aceite de girasol, siendo sus principales clientes países en vías de desarrollo, por lo que la guerra iniciada en febrero de 2022 supuso la ruptura de cadenas globales de suministros y un aumento de la inflación a nivel mundial. En el marco del agravamiento de la inseguridad alimentaria en un Sur Global, esta tesina tiene como objetivo explicar de qué manera la Guerra en Ucrania afectó a la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente, como parte del Sur Global, entre 2022 y 2024. La misma se abordará desde el paradigma de las Relaciones Internacionales de la Economía Política Internacional de Robert Gilpin y se utilizará la metodología cualitativa.

Palabras claves: Guerra en Ucrania – Seguridad Alimentaria – Sur Global

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO 1.....	8
1.La problemática de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente en el siglo XXI.....	8
<i>1.1 Seguridad Alimentaria: una problemática del siglo XXI.....</i>	<i>8</i>
<i>1.2 América Latina y el Caribe: la erosión de los logros.....</i>	<i>10</i>
<i>1.3 África: contrastes regionales y crisis recurrentes de seguridad alimentaria.....</i>	<i>17</i>
<i>1.4 Medio Oriente: el progreso inhibido por la prolongación de los conflictos.....</i>	<i>23</i>
<i>1.5 El impacto de la pandemia de Covid-19 en la seguridad alimentaria.....</i>	<i>28</i>
CAPÍTULO 2.....	35
2. El rol de Rusia y Ucrania en el marco de la problemática de la seguridad alimentaria en el Sur Global durante el siglo XXI.....	35
<i>2.1 – Rusia: de la crisis a la consolidación, la transformación del sector agroalimentario y su papel estratégico en el suministro mundial de fertilizantes.....</i>	<i>36</i>
<i>2.2 Ucrania: la transformación del agro ucraniano y su rol estratégico en la seguridad alimentaria global.....</i>	<i>45</i>
CAPÍTULO 3.....	60
3. El impacto de la guerra en Ucrania sobre la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente (2022-2024).....	60
<i>3.1 Guerra en Ucrania: su impacto en la seguridad alimentaria.....</i>	<i>60</i>
<i>3.2 América Latina y el Caribe: efectos diferenciados y respuestas políticas disimiles.....</i>	<i>65</i>
<i>3.3 África: entre dependencias estructurales y choques globales.....</i>	<i>75</i>
<i>3.4 Medio Oriente: vulnerabilidades, crisis y respuestas internacionales.....</i>	<i>84</i>
CONCLUSIONES.....	90
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	92

Introducción

Desde el comienzo del Siglo XXI existe una gran preocupación por la seguridad alimentaria en la sociedad internacional. Esto se refleja en el primero de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” el cual plantea “erradicar la pobreza extrema y el hambre” (ONU, 2000a), y, posteriormente, en el segundo de los “Objetivos de desarrollo sostenible” que propone “crear un mundo libre de hambre para 2030” (ONU, 2015). En este sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas (NU) el 1 de abril de 2016 se expidió sobre el tema “expresando preocupación por el hecho de que casi 800 millones de personas siguen aquejadas de subnutrición crónica y 159 millones de niños menores de 5 años padecen retraso del crecimiento, aproximadamente 50 millones de niños menores de 5 años sufren de emaciación, más de 2.000 millones de personas experimentan carencias de micronutrientes...” (ONU, 2016, p2). Incluso, es sabido que la crisis alimentaria mundial, se agravó por los conflictos y la violencia organizada en países africanos como la República Democrática de Congo, Etiopía, Nigeria entre otros, y aquellos que acontecen en Medio Oriente, como en Yemen. A esto se le suman las perturbaciones climáticas derivadas de las temperaturas extremas y otros factores como el episodio 21/22 de La Niña que puso en riesgo la producción agropecuaria de algunos países en el Cuerno de África y Medio Oriente. Algunos de los países más afectados por las condiciones climáticas fueron, Afganistán, Siria y Somalia debido a la escasez de lluvias. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, es variable afectó la temporada productora de maíz en Haití (FAO, 2022a). Finalmente, otro factor que deterioró la seguridad alimentaria en el Sur Global fue la pandemia de COVID-19 con consecuencias como el colapso del comercio mundial, pérdida de empleos y el aumento de la pobreza.

Lo descrito hasta aquí hace que el advenimiento de la Guerra en Ucrania abra una coyuntura preocupante. Al respecto cabe recordar que el trigo que producen Rusia y Ucrania es una fuente de alimento esencial para muchos de los países pobres del mundo a precios comparativamente más económicos. De hecho, los 45 países menos desarrollados del mundo importan, al menos, un tercio de su trigo de Ucrania o Rusia y de estos, 18 países importan más del 50% (France 24, 2023).

De este modo, el conflicto bélico ha provocado rupturas en las cadenas de suministros, el aumento de los precios de los alimentos, el combustible y los fertilizantes. El número de personas en situación de inseguridad alimentaria de alto riesgo se ha disparado hasta alcanzar la cifra récord de 345 millones de personas en 2022 en 82 países con presencia

operativa del Programa Mundial de Alimentos (PMA) lo cual supone un aumento de casi 200 millones de personas en comparación con los niveles anteriores a la pandemia. Se calcula que 50 millones de personas de 45 países se encuentran en situación de emergencia o en niveles peores de inseguridad alimentaria aguda (fase 4+ de la IPC) (PMA, 2023a). El número de personas con desnutrición aguda también aumentó, alcanzando máximos históricos. A nivel mundial, 60 millones de niños la padecieron en 2022, frente a los 47 millones de 2019, antes del COVID-19. En el Sahel, 6.3 millones de niños atravesaron esta situación en 2022, la cifra más alta jamás registrada en la región. Mientras tanto, en el Cuerno de África, 7 millones de niños sufrieron esta condición debido a los efectos combinados de la sequía y los conflictos. En respuesta, el PMA está dando prioridad a las medidas de emergencia para evitar que millones de personas mueran de hambre y ayudar a construir y estabilizar los sistemas alimentarios nacionales y las cadenas de suministro conexas (PMA, 2023a, p2-3).

Por otro lado, los precios de los alimentos llevan subiendo desde mediados de 2020, el Índice de Precios de los Alimentos de la FAO alcanzó un nuevo máximo histórico en febrero de 2022. Durante este año, los precios nacionales subieron un 15% o más en 40 países, haciendo que las compras esenciales resulten inasequibles para muchos (ONU, 2023). Esto se debió a que los precios del maíz y del trigo aumentaron en un 30%, los del petróleo en más del 60% mientras que los del gas natural y de los fertilizantes se han duplicado. Estas distorsiones se trasladaron a los precios internos, afectando los costos de producción y de las canastas de consumo (CEPAL, 2022).

Dado este panorama, es importante destacar que Rusia, a principios de este siglo, era el principal importador neto de alimentos del mundo, las estimaciones varían entre el 30% y el 50% del consumo de su población, cifras que suponían una grave amenaza económica (Lukyanova, 2022). El gran potencial agrícola de Rusia no estaba lo suficientemente explotado por factores como la centralización de las tierras y el envejecimiento de la población rural. Para solventar esta situación, en el año 2010 el gobierno ruso introdujo la *Doctrina Rusa de Seguridad Alimentaria*, previendo un desarrollo global y acelerado del complejo. Esta doctrina de corte proteccionista buscaba reducir las importaciones y aumentar las exportaciones (Lukyanova, 2022). Esta política, sumada luego a los efectos de las sanciones que profundizaron el proteccionismo ruso, hicieron que actualmente el trigo y los cereales se encuentran dentro del top cinco de las exportaciones de Rusia. Incluso Rusia es el país que más trigo exporta, contabilizando un 17% de las exportaciones mundiales (Faqin, 2023, p1). A su vez, es el principal productor de fertilizantes a nivel mundial, insumos clave para la seguridad alimentaria en el Sur Global (DW, 2022).

Por otro lado, Ucrania, conocida como el granero de Europa, también tuvo un extenso recorrido hasta convertirse en uno de los principales abastecedores de alimentos. Entre 1991 y 1999 se adoptaron pocas reformas de mercado y se mantuvieron los elementos clave del sistema soviético de producción agrícola, ilustrando una política conservadora en el área. Esto sumado al plan de estabilización macroeconómica que redujo los subsidios a la agricultura y a los intentos de liberalización comercial poco efectivos, hizo que en 1999 la producción agrícola se viese reducida en un 50% de su nivel previo a la independencia (Kvasha, 2022, p3). Sin embargo, el abordaje de la política agrícola en Ucrania había comenzado a cambiar con la crisis financiera de 1998 cuando el gobierno inició un proceso de reformas sobre la propiedad de la tierra, a la vez que introdujo beneficios fiscales, generando optimismo en el sector. Esto atrajo capitales del exterior hacia el sector que hicieron crecer la producción y la industria de procesamiento de alimentos, y se logró duplicar las exportaciones de alimentos en cinco años (Kvasha, 2022).

En las últimas dos décadas, Ucrania ha estado abasteciendo cada vez más al mundo con sus exportaciones de productos alimentarios, que aumentaron más de 10 veces en términos nominales. Este país es el principal exportador de aceite de girasol a nivel mundial (Kvasha, 2022, p9), el tercero de maíz (FAOSTAT, 2025), además, contaba con el 12% de las exportaciones mundiales de trigo para 2023 (Faqin, 2023, p1) y una cuota considerable de mercado de cebada. Para 2022, el sector agroalimentario ucraniano desempeñaba un papel importante a la hora de garantizar la seguridad alimentaria a nivel global y, en cuanto a sus exportaciones de granos, su contribución equivale a alimentar a unos 332 millones de personas además de su propia población (Kvasha, 2022).

En función de lo hasta aquí planteado, esta tesina busca responder la siguiente **pregunta de investigación**: ¿Cómo afectó la Guerra en Ucrania a la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente como parte del Sur Global entre 2022 y 2024? A razón de ello el **objetivo general** radica en explicar de qué manera, la Guerra en Ucrania afectó a la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente, como parte del Sur Global entre 2022 y 2024.

En función de este objetivo, el recorte de casos a analizar se corresponde con las regiones de América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente, en tanto son parte del Sur Global y debido a que la FAO las señala como las mayormente afectadas por la problemática alimentaria. Por otro lado, el recorte temporal abarca desde el 2022, fecha de inicio del conflicto bélico, hasta 2024 pese a que el mismo no se encuentra cerrado al momento de escribir este trabajo. En este sentido cabe aclarar que la brevedad del periodo bajo examen se

compensa con el análisis integral de las tres regiones del Sur Global mayormente afectadas por la problemática.

En línea con esto, los **objetivos específicos** son:

- Describir la problemática de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente en el siglo XXI, especificando el impacto de la pandemia del COVID-19.
- Explicar el rol de Rusia y Ucrania en el marco de la problemática de la seguridad alimentaria en el Sur Global durante el siglo XXI.
- Analizar el impacto de la guerra en Ucrania en la problemática de seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente entre 2022 y 2024.

En función de la materialización de tales objetivos específicos, se espera sustentar la **hipótesis** de que: *la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente, como parte del Sur Global, fue afectada por la guerra en Ucrania entre 2022 y 2024 porque se interrumpieron las cadenas de suministros globales de productos agrícolas tanto ucranianos como rusos y de fertilizantes rusos, incrementándose los precios internacionales en ambos casos e impactando en el costo final de los mismos en los países de las tres regiones. Asimismo, en África y Medio Oriente también se atravesó una situación de desabastecimiento ligada a la dependencia de estas dos regiones con respecto a las importaciones de alimentos desde el Mar negro.*

En lo que respecta al **estado del arte** cabe mencionar algunas líneas de investigación de autores e instituciones intergubernamentales que estudian la **seguridad alimentaria**, entre los cuales encontramos a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2022), Raj Patel (2007), el Banco Mundial (2010), el PMA(2023), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2022), por último, cabe destacar los aportes de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (2023).

Una segunda línea de investigación es la que hace foco en los actores en conflicto, con respecto a **Rusia**, encontramos autores como Alexandra Lukyanovay Ayaz Zeynalov (2022), Natalia Shagaiday Dmitry Ternovsky (2023), y a Wadim Strielkowski, Oxana Mukhoryanova, Oxana Kuznetsovae Yury Syrov (2024). En el caso de **Ucrania**, se puede mencionar a Oleg Nivievskiy, Pavlo Martyshev, and Sergiy Kvasha (2022), Faqin Lin, Xuecao Li, Ningyuan Jia, Fan Feng, Hai Huang, Jianxi Huang, Shenggen Fan y Philippe Ciaisf, Xiao-Peng Song (2022), finalmente, a Oleg Nivievskiy, Pavlo Iavorskiy y a Oleksandr Donchenko (2020).

La pertenencia de la realización de esta tesina para la disciplina de las Relaciones Internacionales radica en la relevancia de la problemática de la seguridad alimentaria a nivel global y específicamente en el Sur Global en el siglo XXI dado el escenario expuesto y, además, en que el estudio se realiza desde un país que ha estado directamente afectado como lo es la República Argentina. Asimismo, es importante destacar la actualidad del tema propuesto dado que, al momento de escribir esta tesina, Rusia y Ucrania continúan en guerra y, por ende, siguen obstaculizadas sus capacidades productivas y retrasadas la normalización y el restablecimiento de las cadenas de suministros globales. En este contexto, la tesina busca realizar un aporte a nuestra casa de estudios dado que en nuestra facultad no se registran trabajos que aborden esta temática.

En lo concerniente al **marco teórico-conceptual** empleado, se parte de un enfoque de la **Economía Política Internacional (EPI)**, ya que desde esta escuela de pensamiento se interpreta que “el Estado territorial continúa siendo el actor principal en los asuntos económicos internacionales. Otros actores significativos incluyen el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la Comisión de la Unión Europea. Más allá de estos actores, se enfatiza que los gobiernos nacionales todavía toman las principales decisiones sobre los asuntos económicos, continúan haciendo las reglas a través de las cuales otros actores operan, y usan su poder para influenciar los resultados económicos” (Gilpin, 2001).

“La interpretación estadocéntrica de la EPI rechaza la premisa de que las fuerzas económicas y tecnológicas han eclipsado el Estado-Nación y crearon una economía global en la cual los límites políticos y los gobiernos nacionales ya no son importantes. Es cierto que las fuerzas económicas y tecnológicas están reconfigurando los asuntos internacionales e influenciando el comportamiento de los Estados. Sin embargo, en una altamente integrada economía global, los Estados continúan usando su poder para implementar políticas que canalicen las fuerzas económicas de formas favorables a sus intereses económicos” (Gilpin, 2001).

Este marco teórico nos aporta herramientas para encauzar nuestra investigación, dado que una decisión política de un gobierno nacional, la de Rusia de invadir militarmente Ucrania, afectó a las poblaciones de los países del Sur Global. Evidenciando que el Estado-Nación todavía tiene un gran peso a la hora de influir en la economía globalizada y que los límites políticos siguen siendo importantes.

Con respecto a la **seguridad alimentaria** como variable, hay un conjunto de conceptos que resulta necesario definir y diferenciar. En primer lugar, siguiendo a la FAO, “la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso

físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. La definición plantea cuatro dimensiones primordiales de la seguridad alimentaria: la disponibilidad física de los alimentos, el acceso económico y físico a los alimentos, la utilización de los alimentos y la estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones. Los analistas de la seguridad alimentaria han encontrado útil definir dos categorías generales de inseguridad alimentaria: inseguridad alimentaria crónica, de largo plazo e inseguridad alimentaria transitoria, de corto plazo (FAO, 2011).

También es necesario saber cuán intenso o severo es el impacto de dicho problema en la seguridad alimentaria en general y en el estado nutricional de las personas. Los analistas de seguridad alimentaria han desarrollado diversas “escalas” para clasificar la seguridad alimentaria. Para ello utilizan, entre otras opciones, el Marco integrado para la clasificación de la seguridad alimentaria y de la fase humanitaria (IPC). El IPC ofrece un sistema de clasificación para la seguridad alimentaria y las crisis humanitarias, que se basa en una serie de necesidades de subsistencia (FAO, 2011).

Gráfico 1:

Clasificación de fase	Indicadores
Seguridad Alimentaria General	- Tasa bruta de mortalidad - Prevalencia de malnutrición
Inseguridad alimentaria crónica	- Acceso/disponibilidad de alimentos
Crisis alimentaria y de subsistencia	- Diversidad de la dieta
Emergencia humanitaria	- Acceso/disponibilidad de agua
Hambruna / catástrofe humanitaria	- Estrategias para enfrentar problemas - Activos para la subsistencia

(Fuente: FAO, 2011).

Otro concepto central de este trabajo es la idea de **Sur Global**, retomando lo ya consignado, entendemos que es un concepto que “se utiliza para describir una agrupación de países según sus características socioeconómicas y políticas (...) es un término que se usa a menudo para identificar regiones dentro de América Latina y el Caribe, Asia, África y Oceanía. El mismo se compone principalmente de países en desarrollo, anteriormente llamados “Tercer Mundo”, (...) dependientes en gran medida de las exportaciones del sector primario y con instituciones gubernamentales jóvenes. Estos países suelen tener menores niveles de riqueza, desarrollo económico, mayor desigualdad en los ingresos, menor transparencia democrática, libertad política y económica que los países del Norte Global (Academia Lab, 2023).

En otro orden de cuestiones, la presente tesina se desarrolla desde una perspectiva **metodológica cualitativa**, “ya que la misma se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones. Postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto de sus propias realidades. De este modo, convergen varias realidades, por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que se produce en la interacción de todos los actores” (Hernández Sampieri et al., 2014). Asimismo, la investigación tendrá un carácter **analítico-descriptivo**, ya que “busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández Sampieri, et al, 2014, p98).

Para llevar a cabo esta investigación, nos proponemos trabajar con fuentes primarias (tales como documentos oficiales) como la FAO, ONU, CEPAL, OCDE y secundarias, para las cuales se emplearán libros, publicaciones de diversos centros de investigación, a saber: Barcelona Centre For International Affairs (CIDOB), Real Instituto Elcano, Center on Global Interests. La principal **técnica de recolección de información** será el relevamiento bibliográfico, entendiendo por esto la búsqueda, revisión y categorización de la bibliografía disponible sobre la materia. Una vez realizada la recopilación, y la lectura de la bibliografía y documentos oficiales, se recurrirá al análisis bibliográfico, que abarca tanto la bibliografía sobre el tema como los documentos oficiales. La utilización de diferentes técnicas permitirá así la triangulación de los datos analizados.

Finalmente, la tesina propone un esquema de tres capítulos. El primero tendrá por objetivo describir la problemática de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente en el siglo XXI, especificando el impacto de la pandemia del COVID-19. El segundo capítulo se direcciona a explicar el rol de Rusia y Ucrania como Estados proveedores de alimentos en el Sur Global durante el siglo XXI. El tercero y último, apuntará a analizar el impacto de la guerra en Ucrania en la problemática de seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente entre 2022 y 2024. De esta manera la sistematización de capítulos propuesta se corresponde con la concreción de los objetivos específicos ya mencionados.

La problemática de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente en el siglo XXI

A lo largo de este primer capítulo se abordará el primer objetivo específico que se corresponde con describir la problemática de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe y el Caribe, África y Medio Oriente en el siglo XXI, especificando el impacto de la pandemia del COVID-19. El mismo se desarrollará a partir de cinco apartados. En el primero trataremos la problemática de la seguridad alimentaria a nivel global durante el siglo XXI, mientras que en el segundo, tercero y cuarto presentaremos dicha problemática en profundidad para cada una de las regiones del Sur Global y, finalmente, en el quinto apartado describiremos el impacto de la pandemia sobre la seguridad alimentaria. Este recorrido lo llevaremos a cabo a través de información recabada de fuentes oficiales como el PMA y la FAO y artículos periodísticos, utilizando como guía los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

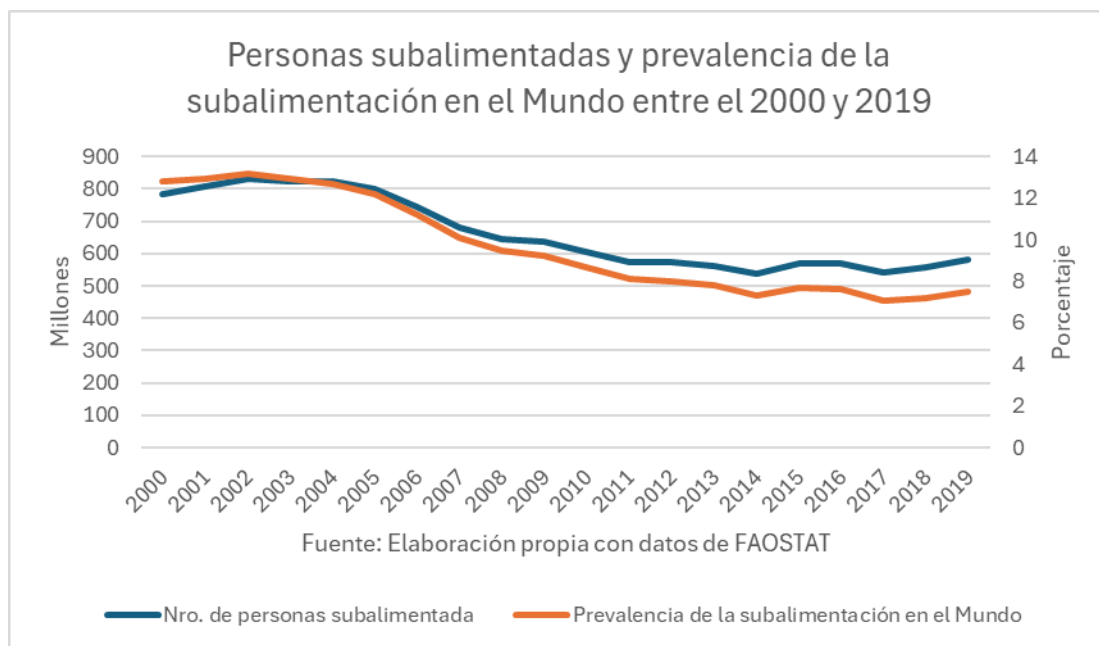
1.1-Seguridad alimentaria: una problemática del siglo XXI

Desde fines del siglo pasado que la problemática de la seguridad alimentaria adquiere una importancia vital por parte de la comunidad internacional. Esta se expresa en la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial de 1996 en la cual, Jefes de Estado y de Gobierno se comprometían a “realizar un esfuerzo constante para erradicar el hambre de todos los países, con el objetivo inmediato de reducir el número de personas desnutridas a la mitad de su nivel actual no más tarde del año 2015” (FAO, 1996). Este objetivo, a su vez coincide con el acordado para los Objetivos del Milenio a principios de siglo “ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre” cuya meta es “Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre” (ONU, 2000b), ilustrando la importancia capital que reviste a la problemática.

A nivel general, la subalimentación en el mundo se fue reduciendo desde principios de siglo hasta 2009, año en que los efectos del incremento de los precios internacionales de los alimentos que venían subiendo desde 2007 impactaron en las regiones más vulnerables. Si bien este suceso en lo que respecta a dinámicas mundiales no parece un incremento tan

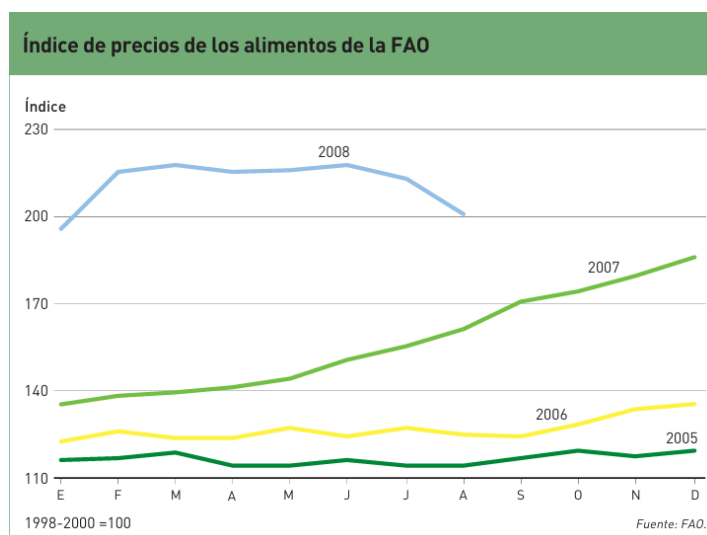
drástico, marca un comienzo de la ralentización de la tendencia decreciente de la subalimentación que acontecía desde principio de siglo.

Gráfico 2:



Este shock fue un punto de inflexión que reveló la fragilidad de los sistemas alimentarios mundiales, como las limitaciones de las respuestas estatales y multilaterales. A partir de esta crisis, la FAO se centró en paliar los efectos de los precios elevados de los alimentos, que afectaron de forma grave a las poblaciones más pobres del mundo. El aumento de los precios tuvo como consecuencia el incremento de los niveles de escasez alimentaria, al tiempo que supusieron una presión enorme en la consecución de los objetivos convenidos para el 2015. Luego de este pico, el número de personas subalimentadas fue descendiendo levemente y se estabilizó en alrededor de 800 millones.

Gráfico 3:



Frente a este panorama, y dado que los ODM y la Declaración de Roma Sobre la Seguridad Alimentaria Mundial de 1996 tenían como fecha límite el año 2015, en ese mismo año los líderes mundiales adoptaron un conjunto de nuevos objetivos globales conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que estarían vigentes hasta 2030, entre los cuales encontramos “crear un mundo libre de hambre para 2030”. La confección de los mismos coincide, entonces, con una relativa estabilización o estancamiento de la población subalimentada a nivel mundial de entre 7,5% y 8% (FAOSTAT, 2025). Sin embargo, la irrupción de la pandemia en 2020 tuvo graves repercusiones en el hambre a nivel global.

Llegando a este punto es preciso detenernos en un análisis más pormenorizado, atento a las particularidades que presentan las diferentes regiones propuestas para abordar en esta tesina. De este modo, en los siguientes apartados se introduce el estado de la situación de América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente con respecto a la problemática alimentaria y el impacto de la pandemia de Covid-19.

1.2-América Latina y el Caribe: la erosión de los logros

En el caso de América Latina y el Caribe, notamos que tuvo una mejora en sus índices de población que sufrían subalimentación entre la última década del siglo XX y principios del siglo XXI, pasando de aproximadamente un 11% de población subalimentada en 1996 a un 8.3% diez años después, lo que equivale a una disminución de 7.8 millones de personas (de 54,9 a 47,1) (FAO, 2000).

De acuerdo con estimaciones basadas en estudios nutricionales de las últimas dos décadas del siglo anterior, la mayoría de los países de la región mostraban un importante avance hacia el cumplimiento de la meta en materia de desnutrición. Hacia principios de siglo se había logrado, en promedio, un 55% de avance desde 1990 (FAO, 2005). Se estimaba, que la región alcanzaría la meta de reducir a la mitad la desnutrición para 2015.

Estas cifras regionales, sin embargo, no reflejaban la situación de todos los países. Mientras que en algunos ya se había alcanzado la meta, en otros se había avanzado muy poco o, incluso, se habían registrado retrocesos. En República Dominicana esta ya se había logrado; Bolivia, México, Perú y República Bolivariana de Venezuela mostraban un avance superior al 75%. Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Nicaragua y Uruguay presentaban avances equivalentes o algo superiores al mínimo esperado (en Colombia, Guyana, Haití y Uruguay, el progreso superaba el 65%. Por último, en Honduras, Jamaica, Panamá y Trinidad y Tobago se habían registrado avances menores. Argentina,

Costa Rica, Ecuador, Paraguay acusaron un retroceso, aunque en todos —con la excepción de Ecuador— se observaban bajos niveles de desnutrición a comienzos de los años noventa (FAO, 2005).

Según estimaciones de FAO, a principios de siglo la mayor cantidad de población sin acceso suficiente a los alimentos se concentraba en Brasil (15,6 millones de personas), Colombia (5,7 millones), México (5,2 millones), Venezuela (4,3 millones) y Haití (3,8 millones). Así, cinco países reunían cerca de dos tercios del total de subnutridos en la región (FAO, 2005). Como vemos, las cifras para el conjunto de la región encubrían notables diferencias entre los países.

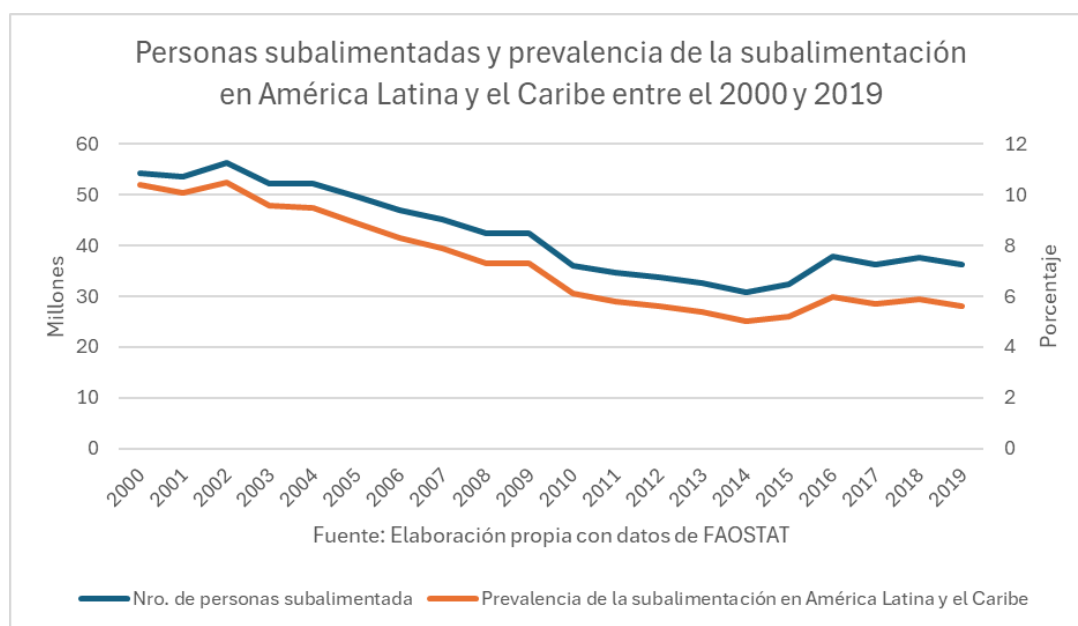
En América Latina y el Caribe se producían, en términos generales, alimentos suficientes para satisfacer los requerimientos nutricionales de una población del triple de la que presentaba. Por lo tanto, una de las causas principales de la inseguridad alimentaria y del hambre era el bajo ingreso de amplios sectores de la población y la consecuente falta de acceso al consumo de alimentos en cantidad y calidad adecuadas. Las dificultades de acceso se tornaban más complejas en la medida que la desigualdad entre los habitantes de un país se acrecienta en virtud factores étnicos, familiares, de género y dado su localización y aislamiento geográfico, ya que la zona de residencia influye en los patrones de producción de alimentos, las dificultades de acceso a estos, su preparación y consumo, y en la presencia de servicios básicos de agua y saneamiento, por lo que la incidencia de la desnutrición es diferente en zonas urbanas y rurales. En las zonas urbanas se concentra la mayor parte de la población desnutrida, no obstante, la incidencia de la desnutrición es más elevada en las zonas rurales.

En este marco, cabe destacar una propuesta de política de seguridad alimentaria e hito en la lucha contra la desnutrición, lanzada por el entonces candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva para Brasil en 2001 “Hambre Cero”. Esta partía de la base de que la alimentación es un derecho inalienable de todos los ciudadanos, y es deber del Estado crear las condiciones para que la población pueda disfrutar de este. El sector al que se apuntaba en este programa era de 44 millones de personas en situación de pobreza y el eje estructural del mismo era la conjunción de políticas estructurales destinadas a la redistribución de la renta, el crecimiento de la producción, la generación de empleo y la reforma agraria (Da Silva, et al, 2012). Esta iniciativa, efectivizada en el año 2003, fue clave para la disminución del hambre durante la década.

En América Latina y el Caribe si bien el impacto del incremento de los precios en los alimentos fue menor que en otras regiones, también ha experimentado un aumento de su

población hambrienta como resultado del aumento de los costos internos de los alimentos, esto significó un duro revés después de un decenio de progreso hacia la meta de 2015.

Gráfico 4:



Entre todas las subregiones, para 2008, América del Sur era la que había obtenido el mayor éxito en la reducción del hambre, con 10 países de 12 situados en una senda favorable para lograr la meta del ODM 1. Apoyados por niveles relativamente elevados de renta nacional, un crecimiento económico sólido y fuerte aumento de la actividad en sus sectores agrícolas, cinco países de América del Sur (Argentina, Chile, Guyana, Perú y Uruguay) habían alcanzado la meta de los ODM. En el caso de Brasil, cabe destacar que teniendo como referencia los datos de principios de siglo, para 2007 el número de personas subnutridas se había reducido en 4.2 millones representando un gran avance (FAO, 2008a), atribuible en gran medida al previamente mencionado programa “Hambre Cero”. Sin embargo, en otros países de la región el progreso no había sido tan uniforme. Costa Rica, Jamaica y México se han unido a Cuba en la lista de países que han alcanzado con éxito la meta de los ODM de reducción del hambre en 2003-2005. Por otro lado, El Salvador, Guatemala, Haití y Panamá continuaban experimentando dificultades en la reducción de la subalimentación.

La reducción del hambre en América Latina y el Caribe hasta 2008 se dio porque que la región parecía encontrar un sendero estable de crecimiento, ya que entre 2003 y 2008, el crecimiento del PIB per cápita era superior al 3% anual, llegando al 4,6% en 2004, logrando que el mismo se incrementara desde US\$ 3.960 en 2002 a US\$ 4.712 en 2007 (CEPAL, 2009). Este se dio gracias a un contexto externo favorable, con la expansión de la economía mundial y la liquidez disponible en los mercados internacionales, a ello se le suma la

demanda de alimentos de países en un acelerado proceso de industrialización como China que incrementaron la demanda de productos sudamericanos, el boom de los commodities período durante el cual los precios de las materias primas se encontraban muy altos, lo que benefició a países exportadores como Brasil, Argentina, Chile, Perú, etc... y la elevada inversión extranjera en la región.

Cabe destacar el caso de Haití, ya que, a pesar de enfrentarse a una constante inestabilidad política y económica, así como a elevada pobreza y hambre, había registrado una pequeña reducción de la subnutrición. No obstante, con el 58% de la población afectada con hambre crónica, el país padecía uno de los niveles de subnutrición más elevados del mundo (FAO, 2008a). Sin embargo, para el año 2008 una serie de eventos como el ya mencionado aumento de los precios internacionales de las materias primas, los huracanes Gustav, Hanna e Ike repercutieron de forma muy negativa en los avances en la reducción del hambre en el país. Haití importaba el 52% de sus alimentos, resultando muy sensible frente a shocks externos, además de que 7,6 millones de personas vivían con menos de dos dólares al día (Relief Web, 2008), ilustrando el severo grado de vulnerabilidad en el que vivía su población. Para este año, el país recibió ayuda internacional de parte de PMA que se encargó de la donación y distribución de alimentos.

La FAO tuvo un rol protagónico en la coordinación de políticas en América Latina y el Caribe en vistas a la reducción del hambre, a través de la “Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025”. Esta iniciativa supuso el compromiso político de los países de la región, este fue acordado en 2005 y tenía como meta la erradicación total del hambre y el alcance de la seguridad alimentaria y nutricional al año 2025. Esto representa un esfuerzo conjunto que tenía como principal objetivo apoyar a los países de la región en hacer del combate contra el hambre y la malnutrición, una prioridad nacional traducida en políticas de Estado de gran impacto. Esto se iba a dar a través de consensos que conduzcan a una efectiva implementación de las políticas públicas en seguridad alimentaria y nutricional en cada uno de los países.

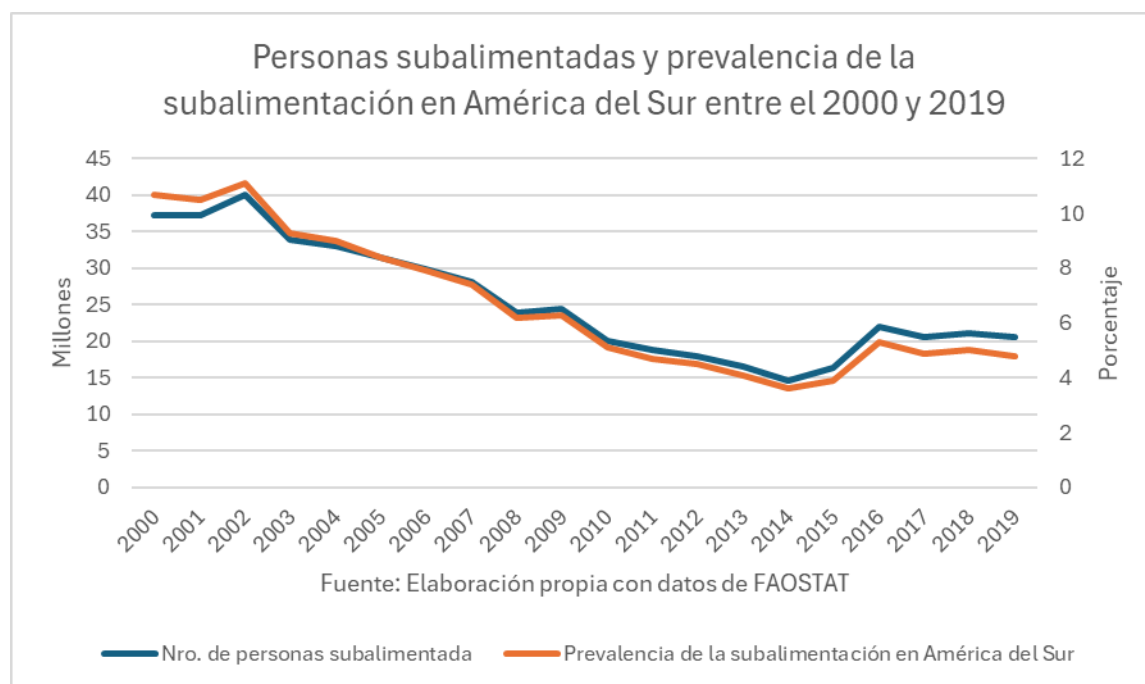
En resumen, a lo largo de la década en América Latina y el Caribe, los índices de seguridad alimentaria fueron evolucionando positivamente, salvo el repunte de 2009, que elevó los precios internos de los alimentos afectando a las poblaciones más vulnerables, sin embargo, con la normalización de los precios el patrón descendiente de personas subalimentadas continuó. Esto se ilustra en los datos, ya hacia los años 2001-2003 que en torno a 53,7 millones de personas (10,1%) no tenían acceso a los requerimientos calóricos mínimos, este número bajó hasta 36 millones en 2010 (6,1) (FAOSTAT, 2025), es decir

habían salido 17,7 millones de personas del hambre en la región. Entre los factores que explicarían este comportamiento, destaca un incremento de la oferta agregada y el impacto positivo de políticas sociales y económicas, en algunos países de Centro y Sudamérica. Sin embargo, no hay que dejar de destacar que pese a notables avances en materia alimentaria la desigualdad en los ingresos persistía y fue un factor que tuvo incidencia en la siguiente década en lo que respecta a la seguridad alimentaria.

Adentrándonos en la segunda década del siglo XXI vemos que la tendencia decreciente que ya mencionamos se detiene en el año 2014, año que se registró el menor número de personas subalimentadas en la región (30,8 millones) y la menor prevalencia (5%), a partir de aquí los números fueron en ascenso y nunca se recuperaron los números de ese año. Para 2019, la prevalencia de la subalimentación en América Latina y el Caribe se situaba en el 5,6% con unos 36,3 millones de personas aquejadas por la problemática, evidenciando un aumento de 5,5 millones de personas que pasaban hambre en la región.

Este incremento respecto de años anteriores se debe principalmente por la situación en América del Sur, donde la prevalencia de la subalimentación pasó del 3,6% de su población en 2014, al 4,8% en 2019, que en millones de personas representa un aumento de 5,9. De hecho, en América del Sur vivía la mayoría (68%) de las personas subalimentadas de América Latina y el Caribe (FAO, 2019).

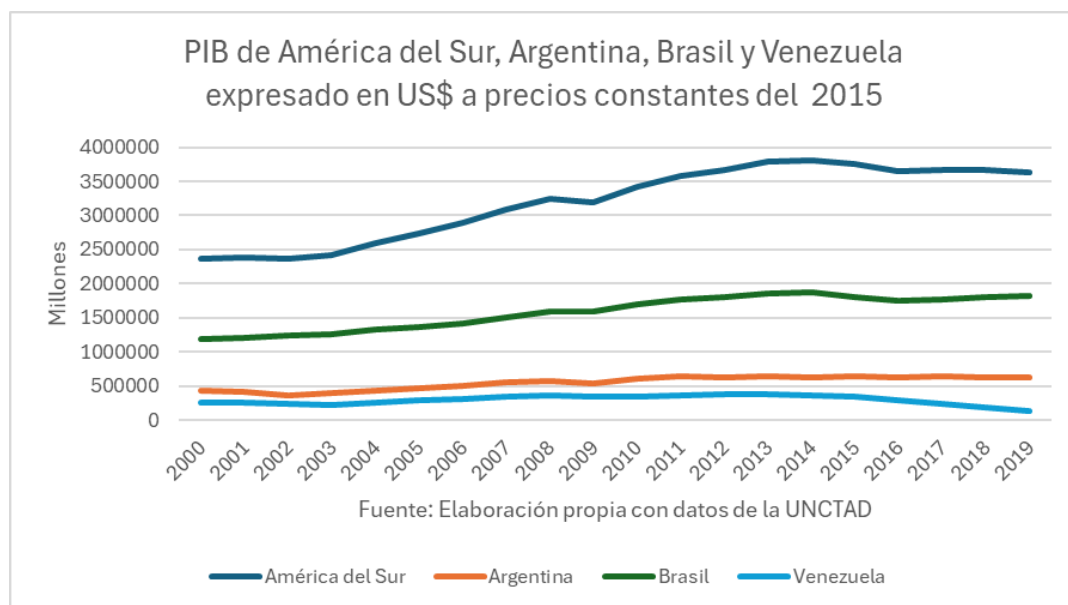
Gráfico 5:



El aumento de la subalimentación observado en los últimos años se debe a la desaceleración económica experimentada por varios países. Entre ellos encontramos a las dos

principales economías del subcontinente como Argentina y Brasil, que con la caída del precio de las materias primas y el fin del “boom” de la demanda china entraron en recesión, además de otros factores como la alta inflación en el primer país y los problemas políticos en el segundo. Venezuela es un caso para destacar, donde la prevalencia de esta casi se cuadruplicó, al pasar del 6,4% en 2012-14 al 21,2% en 2016-18. Durante el mismo período, su economía entró en recesión, se estimaba que la inflación en el país había alcanzado el 10.000.000% aproximadamente, y el crecimiento real del PIB se deterioró, al pasar del -3,9% en 2014 al -25% en 2018 (FAO, 2019).

Gráfico 6:



Cabe destacar que varios países de la región durante la década establecieron iniciativas gubernamentales para mejorar el estado de la seguridad alimentaria en sus respectivos países, entre los cuales podemos destacar el programa “Qali Warma” iniciado en 2012 en Perú que proporcionaba asistencia alimentaria a niños en edad escolar. Por su parte, Argentina, en 2013 se profundizó el “Plan Nacional de Seguridad Alimentaria” con una mayor articulación con las provincias. Finalmente, Brasil continuó con su programa “Hambre Cero”, el cual, sumado a otros factores como aumento de los ingresos de la población más pobre y una mayor oferta de alimentos, le permitió reducir en un 82% su población desnutrida para 2014 (Gobierno Brasileño, 2014).

Por el contrario, las tasas de la prevalencia de la subalimentación en América Central y el Caribe, a pesar de ser superiores a las de América del Sur, habían disminuido en los últimos años. El progreso realizado por esta subregión puede verse en los datos, constatando que la prevalencia de la subalimentación era de 7,2% de su población en 2010, 6,3% en 2015,

6,1% en 2016 que se mantuvo en los años 2017 y 2018. Esto se ajustaba a la tendencia de crecimiento económico observada en estas subregiones, donde el PIB real aumentó a un ritmo del 4% aproximadamente entre 2014 y 2018, con tasas moderadas de inflación siempre por debajo del 3% en el mismo período (FAO, 2019).

El descenso de las tasas de la prevalencia de la subalimentación en América Central es destacable dado que la subregión no estuvo exenta de desastres naturales. En el Corredor Seco Centroamericano, particularmente Guatemala, Honduras y El Salvador durante 2014 y 2015, el fenómeno de El Niño provocó una de las sequías más severas de los últimos 10 años, lo que tuvo como consecuencia que alrededor de 3.5 millones de personas requiriesen asistencia alimentaria. El fenómeno provocó pérdida de cosechas, induciendo a la población a volverse más dependiente del mercado para el abastecimiento de alimentos, que a su vez tuvo como consecuencia que los precios de estos suban (FAO, 2016).

En el marco regional, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) tuvo iniciativas importantes durante la década, en este marco encontramos el “Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025”, impulsada en 2014, que tenía como objetivo “contribuir a alcanzar resultados concretos que se traduzcan en mejoras significativas en la calidad de vida de nuestros pueblos, dirigidas a la erradicación de la pobreza, (...) que garanticen la seguridad alimentaria y la nutrición, con enfoque de género y respetando la diversidad de hábitos alimentarios, para afrontar desafíos de la seguridad alimentaria y la nutrición con vistas a la erradicación del hambre y al disfrute del Derecho a la Alimentación, en especial de todos los sectores en situación de vulnerabilidad” (CELAC, 2014, p2), este plan respaldaba la “Iniciativa América Latina sin Hambre” de la FAO en la región mencionada anteriormente.

Para 2018, en vistas a los efectos del cambio climático y de los desastres naturales que afectaban la seguridad alimentaria en la región, la CELAC fomentó la iniciativa “Estrategia Regional para la Gestión de Riesgo de Desastres Naturales en el Sector Agrícola y la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe (2018-2030)”, esta tenía como objetivo “prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes en el sector agrícola y la seguridad alimentaria y nutricional implementando medidas integradas e inclusivas de índole económica, financiera, estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política e institucional que refuercen la resiliencia” (CELAC, 2018, p21).

A modo de conclusión, a lo largo de las primeras dos décadas del siglo XXI, América Latina y el Caribe transito un proceso complejo, pero con avances significativos en materia

de seguridad alimentaria. Aunque la región logró una reducción sostenida de la subalimentación en los primeros años del siglo, impulsada por un contexto internacional favorable, políticas públicas activas y un crecimiento económico constante, la persistente desigualdad en los ingresos y las diferencias internas entre países actuaron como freno para alcanzar un desarrollo más homogéneo. A partir de 2014, la tendencia positiva se revierte, y la inseguridad alimentaria vuelve a aumentar como consecuencia de la desaceleración económica, las crisis políticas internas y la disminución de los precios de las materias primas, golpeando especialmente a América del Sur.

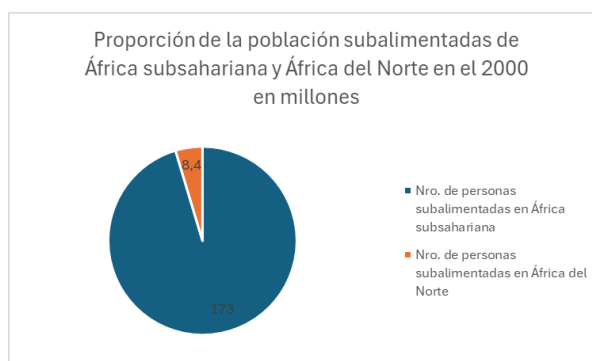
En este escenario, se evidenció la vulnerabilidad estructural de amplios sectores de la población ante las fluctuaciones económicas y los fenómenos naturales, a pesar de los esfuerzos regionales e internacionales por fortalecer políticas de seguridad alimentaria y nutricional. El crecimiento de la subalimentación hacia 2019 dejó en claro que los avances logrados no estaban plenamente consolidados, y que las bases de la seguridad alimentaria seguían dependiendo de múltiples factores externos e internos.

Sobre esta situación ya crítica, irrumpió en 2020 la pandemia de COVID-19, abriendo un nuevo y desafiante escenario para la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe.

1.3- África: contrastes regionales y crisis recurrentes de seguridad alimentaria

En un principio, cabe mencionar respecto al continente africano que las subregiones de África Septentrional y África subsahariana presentan dinámicas muy distintas respecto de la problemática de la seguridad alimentaria. Para ilustrar esto, en el siguiente gráfico (7) vemos la proporción ínfima que representaba la población subalimentada de África Septentrional para el total del continente. Esta dinámica se va a mantener por las siguientes dos décadas.

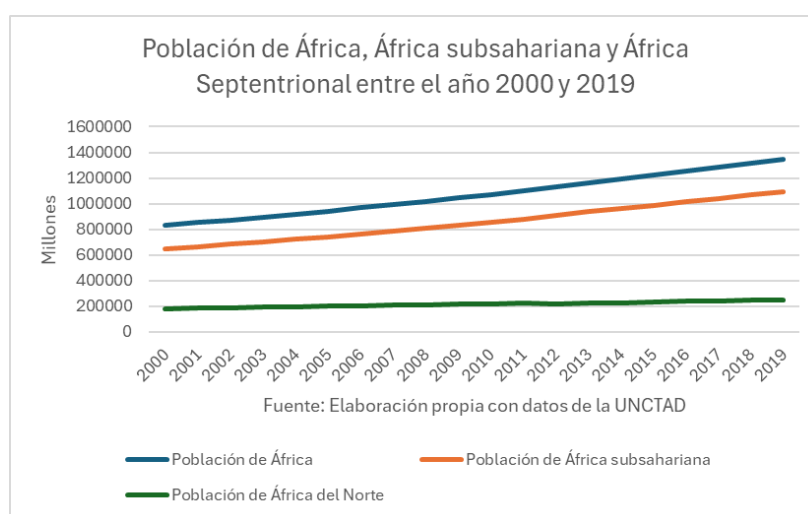
Gráfico 7:



Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT.

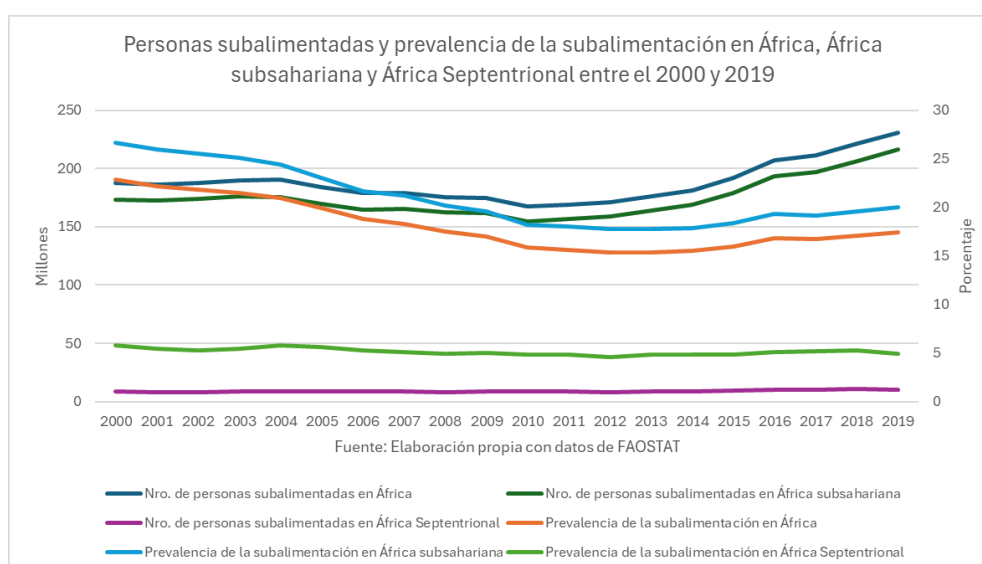
Como podemos ver, el principal problema de inseguridad alimentaria se da en África subsahariana a principios de siglo. Cabe destacar, como veremos a continuación en el siguiente gráfico (8) es que, a diferencia de América Latina y el Caribe, en África subsahariana la población estaba en constante aumento, pasando de los 648.981 millones en el año 2000 a los 1.096.034 millones en 2019, es decir que hubo un aumento de 447.053 millones de personas a lo largo de las dos décadas. Mientras que la natalidad en África Septentrional, si bien crecía, lo hacía a un ritmo muy lento. Por lo que el aumento de población del continente africano en su totalidad está representado casi exclusivamente por el aumento en África subsahariana (UNCTAD, 2025).

Gráfico 8:



Este crecimiento poblacional nos va a presentar una dinámica a lo largo de las dos décadas de que, si bien el número de personas subalimentadas en el continente africano iba a crecer, la prevalencia de la subalimentación iba a disminuir.

Gráfico 9:



Como se puede apreciar en la línea azul, el número de personas subalimentadas en el continente africano iba a crecer a lo largo de las dos décadas, comenzando en 187 millones para principios de siglo y finalizando en 231 millones en 2019. Sin embargo, la prevalencia de la subalimentación representada en la línea naranja iba a disminuir en este transcurso de tiempo, pasando de un 22.9% a principios de siglo a un 17.4% para 2019. Por lo que en un transcurso de tiempo que la población aumentó en 447.053 millones la población subalimentada aumentó en 43.400 millones.

Sin embargo, estas dinámicas que parecen positivas no quitan que la situación del continente africano no sea crítica ya que fue el continente con mayor porcentaje de población subalimentada a lo largo de las dos décadas.

El continente africano a lo largo de estas dos décadas ha sido afectado por diferentes crisis, eventos climáticos y conflictos armados, que han repercutido negativamente en la seguridad alimentaria. Una combinación de factores, entre los cuales hallábamos sequías, políticas económicas fallidas, contiendas civiles y un gran brote de VIH/SIDA para 2002-2003 empujaron una situación crítica de inseguridad alimentaria a más de 14 millones de personas en África meridional (FAO, 2003). El VIH/SIDA producía inseguridad alimentaria y la agravaba de muchas formas, ya que la mayoría de sus víctimas eran adultos jóvenes que caen enfermos y mueren durante lo que debería ser el apogeo de su vida productiva. Dejando atrás una población excesivamente cargada de ancianos y de menores, muchos de ellos huérfanos.

Entre los países del mundo que se habían enfrentado con emergencias alimentarias para 2003, su gran mayoría se encontraban en África, con situaciones que requerían de asistencia internacional. Las causas principales de estas variaban entre las causadas por el hombre como los conflictos y las naturales, principalmente sequías. En África meridional, la producción alimentaria se redujo en un 50% para 2001/2002 dadas las graves sequías en la región. El agua y la seguridad alimentaria están estrechamente relacionadas, ya que la agricultura es, con gran diferencia, el sector con el mayor consumo de agua, y representa alrededor del 69% de todas las extracciones en el mundo entero y más del 80% en los países en desarrollo. Si el agua es un elemento esencial de la seguridad alimentaria, su carencia puede ser una causa principal de hambrunas y subnutrición. África, es a la vez el continente más seco y la región donde el hambre es más frecuente. Dentro de África, la subnutrición y las hambrunas habían afectado a zonas semiáridas y vulnerables a la sequía, destacando Eritrea y partes de Etiopía, donde los cultivos se marchitaron por falta de agua dejando a millones de personas en una situación alimentaria crítica (FAO, 2003).

Por otro lado, África, en particular África subsahariana, había sido una de las regiones más afectadas por el incremento de los precios internacionales de las materias primas de 2007-2008, empujando al hambre a 24 millones de personas. En esta región se encontraban 15 de los 16 países en los que la prevalencia del hambre superaba el 35%. Estos eran especialmente vulnerables al alza del precio de los alimentos, dado que las importaciones representaban más de la mitad del suministro de cereales en 11 de ellos (Angola, Cabo Verde, Eritrea, Gambia, Lesotho, Liberia, Mauritania, el Senegal, Somalia, Swazilandia y Zimbabwe) en 2005-06. En otros siete países (Benin, el Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Guinea-Bissau, Mozambique y la República Democrática del Congo), la proporción variaba entre el 30 y el 50 %. (FAO, 2009). Cabe destacar que África del Norte también ha experimentado un aumento de la población hambrienta durante el período, pero no fue tan afectada como el África subsahariana.

El África subsahariana continuaba siendo el lugar donde la proporción de personas que padecían hambre respecto a la población total era más elevada. Así, en esta región una de cada tres personas padecía hambre crónica. El número de personas subnutridas había aumentado en 25 países de la subregión desde 1990 hasta 2008, lo planteaba a la región un desafío importante para avanzar más rápidamente hacia la meta de los ODM de reducción del hambre (FAO, 2008a).

Cabe destacar que el mayor incremento en el número de personas hambrientas en el África subsahariana se produjo en un único país, la República Democrática del Congo, alimentado por un conflicto extendido y duradero, el número de habitantes en situación de hambre crónica en este país se disparó de 11 a 43 millones, y la proporción de personas subnutridas aumentó del 29 % al 76 % entre 1990 y 2005 (FAO, 2008a).

Dentro del África subsahariana, el Cuerno de África era una de las zonas más afectadas, con una población urbana con aproximadamente 14,6 millones de personas en situación de subnutrición necesitadas de asistencia humanitaria, debido a la escasez de lluvias, los ya mencionados elevados precios de los alimentos, los conflictos, la inflación y la pobreza. Etiopía, Eritrea, Somalia y Kenia se encontraban para 2008 en la lista de países que se encontraban atravesando una crisis alimentaria que mayor riesgo tenían de deteriorar su situación frente al pico de los precios en 2008 (FAO, 2008a).

Uno de los casos más preocupantes era el de Somalia, país que fue afectado por diversos tipos de crisis y no lograba salir del estado de emergencia desde hacía 30 años. Luego de una larga guerra civil, el gobierno central perdió el control del territorio en 1991 y no había vuelto a recuperarlo sobre una gran parte del país, esto llevó a una situación de

hambruna grave en 1992 y desde el año 2000 se habían registrado crisis relativas a la seguridad alimentaria localizadas en varias partes del país. Para 2009 unos 3,2 millones de somalíes requirieron asistencia alimentaria inmediata y más de la mitad de estos ciudadanos eran desplazados internos afectados por el conflicto, por la sequía y la crisis de medios de subsistencia. Para el año 2010, a pesar de la buena cosecha del año anterior, la situación alimentaria de una gran parte de la población se deterioraba cada vez más, y las condiciones de seguridad habían obligado a casi todos los organismos internacionales a retirarse del territorio, agravando la situación (FAO, 2009).

Frente al panorama adverso al cual se enfrentaban muchos países africanos, la Unión Africana (UA), mancomunando esfuerzos impulsó la implementación del Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP). El cual tenía como objetivo mejorar la seguridad alimentaria, la nutrición y los ingresos en las economías mayoritariamente agrarias del continente, a través de un aumento de la inversión de los presupuestos anuales de agricultura que impactarían en la productividad agrícola de los países.

Otra iniciativa para hacer frente al incremento exacerbado de los precios internacionales de los alimentos provino de la administración Obama en los Estados Unidos “Feed for the Future Initiative”. Esta fue un programa de desarrollo lanzado en 2010 que invirtió en actividades de desarrollo agrícola que tuviesen un impacto positivo en la seguridad alimentaria, buscando reducir el hambre, la desnutrición y la pobreza. Del total de 19 países que se beneficiaron de esta iniciativa 12 eran africanos, entre los que encontramos a Etiopía, Ghana, Kenia, Liberia, Malawi, Mali, Mozambique, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia.

Al mismo tiempo, otros países en la región de África subsahariana habían conseguido importantes reducciones en el porcentaje de población. Entre ellos figuran Ghana, el Congo, Nigeria, Mozambique y Malawi. Ghana era el único país que ha alcanzado la meta de los ODM. La clave del éxito de Ghana ha sido un crecimiento fuerte, tanto en la economía en general como en el sector agrícola en particular.

En los 14 países africanos que se encontraban en buen camino para alcanzar la meta de los ODM de reducir la prevalencia del hambre a la mitad para 2015, el sector agrícola ha alcanzado un crecimiento constante y relativamente rápido, caracterizado por las ganancias en valor añadido agrícola, producción de alimentos, producción de cereales y rendimientos de los cereales.

Esta situación contrastaba notablemente con los países africanos que, o bien habían fracasado en la reducción de la prevalencia de la subnutrición, o bien habían experimentado

un aumento de la prevalencia desde 1990. En estos países, la producción de alimentos había caído de forma acusada, mientras que el valor añadido agrícola había avanzado menos de una cuarta parte de la tasa alcanzada por el grupo de mayor éxito. Es importante destacar que entre los países que habían logrado éxitos hay varios que provenían de décadas de guerra civil y conflicto, lo cual ofrece una prueba contundente de la importancia de la paz y la estabilidad política para la reducción del hambre.

Durante la segunda década de este siglo, África atravesó múltiples crisis alimentarias, muchas de ellas exacerbadas por desastres naturales y conflictos. Comenzando la década, en 2011, el Cuerno de África sufrió la peor sequía en 60 años ligada al fenómeno de La Niña, la cual generó una grave crisis alimentaria en países como Kenia, Somalia, Yibuti, Etiopía, Kenia y Uganda. Esta situación impulsó el alza en los precios de los alimentos a nivel interno, afectando a muchos hogares pobres. Las Naciones Unidas califican a zonas del centro de Kenia y Somalia en la categoría de “emergencia”, es decir la cuarta más grave del IPC presentado en la introducción (Reuters, 2011).

Somalia fue sin duda el país más castigado por la sequía, con más de cuatro millones de personas afectadas directamente para 2011 (más de la mitad de la población total). La sequía, la subida del precio de los alimentos y el combustible, 20 años de guerra y un acceso de asistencia humanitaria limitada fueron los principales factores que se conjugaron para desencadenar la hambruna en seis zonas del centro y el sur del país (OXFAM, 2012).

En Etiopía fallaron dos temporadas consecutivas de lluvia, lo que afectó a varias provincias, especialmente en las regiones de Oromio y Somalí. Para cuando llegó julio de 2011, el Gobierno etíope estimó que el número de personas afectadas por la grave crisis alimentaria alcanzaba ya los 4,5 millones (OXFAM, 2012).

Para el año 2015 en el Sudeste de África se padecieron severas inundaciones en países como Malawi, Mozambique y Madagascar, estas destruyeron cultivos y exacerbaron la inseguridad alimentaria en la región. Las fuertes lluvias en enero provocaron inundaciones en varios países de la parte oriental de la subregión. Se estimaba que unas 87.000, 64.000 y 87.000 hectáreas de tierras de cultivo se inundaron respectivamente en las zonas centrales de Mozambique, partes del sur de Malawi y en varias regiones de la zona oriental y occidental de Madagascar. El total de personas desplazadas se situaba alrededor de 234.000, en su mayoría ubicadas en Mozambique y Malawi. Los gobiernos y los organismos de la ONU habían respondido a las inundaciones, aportando de forma directa ayuda alimentaria y agrícola (FAO, 2015).

Pocos años después, para 2019 se registraron en esta misma región dos ciclones consecutivos, Idai y Kenneth que llegó seis semanas después, que afectaron principalmente a Mozambique, Zimbabue y Malawi, causando una crisis humanitaria a gran escala. El ciclón Idai destruyó alrededor de 700.000 hectáreas de cultivos, incluidos maíz, yuca, frijoles, arroz y maní. Cabe destacar que el país más afectado fue Mozambique, se estimaba que murieron más de 1000 personas a causa de los fuertes vientos e inundaciones, además de la pérdida de hogares e infraestructura crítica. Según el PMA, el 80 por ciento de la población de este país no podía permitirse los costos mínimos de una dieta adecuada dados los incrementos de los precios de los alimentos (CARE, 2019).

En síntesis, el continente africano durante las dos primeras décadas del siglo XXI atravesó profundas dificultades en materia de seguridad alimentaria, siendo el África subsahariana la región más afectada tanto en términos absolutos como relativos. A pesar de que algunos indicadores mostraron avances, como la disminución de la prevalencia de la subalimentación, el número total de personas afectadas siguió creciendo en un contexto de fuerte aumento demográfico, crisis climáticas recurrentes, conflictos armados prolongados, y choques económicos como el alza de los precios internacionales de los alimentos. Si bien se registraron esfuerzos y programas que apuntaron a revertir esta situación, como el CAADP y la Iniciativa Feed for the Future, la inestabilidad política, los desastres naturales y las limitaciones estructurales continuaron socavando los avances en muchas áreas.

1.4-Medio Oriente: el progreso inhibido por la prolongación de los conflictos

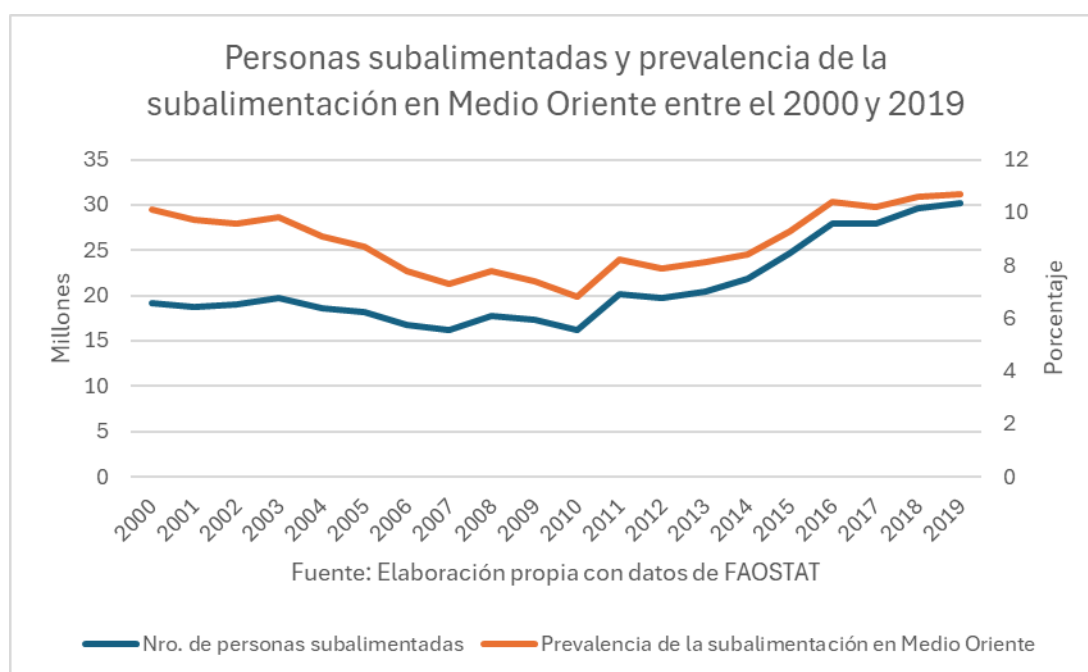
En lo que concierne a Medio Oriente, cabe mencionar que los países de esta región registraban niveles bajos de personas subalimentadas para lo que es el mundo en desarrollo para principios de siglo, cercanos a los 20 millones (FAOSTAT, 2025). En este contexto cabe destacar que esta región se caracteriza por una serie de condiciones estructurales como la alta dependencia de importaciones agrícolas, sobre todo de cereales, lo que la vuelve vulnerable frente a fluctuaciones en los precios internacionales, las limitaciones de su suelo, con un gran porcentaje de tierras áridas y semiáridas, y sus condiciones climáticas adversas por el avance del calentamiento global que provoca que las temperaturas aumenten al doble de la tasa del resto del mundo y disminuyan las precipitaciones, repercutiendo en las capacidades de la producción agrícola de sus suelos (OWP, 2024).

A su vez, esta zona es geopolíticamente compleja, ya que lo largo de los años hubo varios conflictos que agravaron la inseguridad alimentaria en la región. El estallido de la

Segunda Intifada en el año 2000 es un gran ejemplo de esto a comienzos de siglo, con restricciones de movimiento, bloqueos y enfrenamientos que tuvieron un gran impacto en Palestina¹.

En función de los datos obtenidos de FAOSTAT vemos que el factor crucial en las dinámicas de seguridad alimentaria en esta región son los conflictos armados. En el siguiente gráfico (10) podemos observar que hay una dinámica decreciente del número de personas subalimentadas y de la prevalencia de la subalimentación detenida en 2003 producto de las consecuencias de la invasión de la coalición internacional liderada por los Estados Unidos a Irak dada la presunta posesión de armas de destrucción masiva por parte del régimen de Sadam Huseín.

Gráfico 10:



Luego del conflicto armado mencionado previamente el hambre en la región sigue su dinámica decreciente hasta el próximo pico en 2008 producto del efecto del ya mencionado aumento de los precios de las materias primas en una región netamente importadora de productos agrícolas. Una vez superada esta crisis la dinámica decreciente continúa hasta el 2011, año en que se dispara la guerra civil en Siria, un conflicto prolongado en el cual ahondaremos más adelante en este apartado. A partir de aquí, durante la segunda década del presente siglo comienza una dinámica ascendente que se va a intensificar en 2016 producto

¹El 80% de la población de Gaza depende de la ayuda de emergencia de UNRWA, y el 59% está clasificada como población en situación de inseguridad alimentaria. Al menos el 58% vive por debajo del umbral de la pobreza, con menos de 1 dólar al día (UNRWA, 2014).

del conflicto armado que se desencadenó en Yemen y que va a continuar hasta 2019 fruto de la no resolución de los conflictos.

A nivel regional, existen fricciones entre países vecinos que tuvieron repercusiones en la seguridad alimentaria, como el conflicto por el uso del agua de los ríos Éufrates y Tigris entre Turquía, Siria e Irak, que si bien es una problemática que se extiende desde varias décadas hacia atrás. La misma continuó agravándose durante el presente siglo, dado que Turquía controla las cabeceras de ambos ríos, ha utilizado su posición estratégica para presionar a sus vecinos y para realizar proyectos de desarrollo, mermando el caudal de ambos ríos, que sumado a las condiciones climáticas de la región profundizan la desertificación en Irak y la inseguridad alimentaria en el país (OWP, 2024).

Siguiendo de cerca este último país, vemos que antes de la invasión a Irak por una coalición internacional liderada por los Estados Unidos en 2003, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), estimaba que 18 millones de personas de una población de 26 millones se encontraban en situación de inseguridad alimentaria. Esta situación se agravó con la invasión, empeorando la delicada situación económica agravada por la destrucción de infraestructura clave (Koc et al., 2008). Con la intención de ilustrar la problemática luego de la invasión, cabe citar un párrafo del informe de Jean Ziegler, Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación entre 2000 y 2008, “Más de una cuarta parte de los niños iraquíes sufren desnutrición crónica, y la desnutrición aguda entre los niños iraquíes menores de 5 años casi se ha duplicado, pasando del 4% al 7,7%” (Ziegler, 2005, p8).

Tras la grave sequía de la cosecha 2007/08 que redujo drásticamente los cultivos de trigo y cebada respecto del año anterior en la República Árabe de Siria un 53% y en Irak un 40%, la situación de la seguridad alimentaria en estos países se volvió motivo de preocupación. En respuesta a esto, en noviembre de 2008 la FAO y el PMA aprobaron conjuntamente una operación de emergencia para proporcionar asistencia alimentaria a unas 200.000 personas aproximadamente, por un valor de US\$ 5,2 millones (FAO, 2008b).

En el caso de Palestina, la problemática de la inseguridad alimentaria es una de las principales a las que se enfrentaban tanto la población de Cisjordania como la de la Franja de Gaza con un porcentaje de su población de un 20% y un 50% respectivamente para 2010. Este país se vio afectado tanto por fenómenos mundiales como el aumento de los precios de los alimentos y el cambio climático como por el bloqueo y conflicto que mantenía Israel sobre Gaza, impidiendo la producción agrícola y el acceso a los alimentos, haciendo que el 80% de la población del territorio dependa de ayuda alimentaria internacional. Los palestinos

producían localmente sólo el 60% de los alimentos consumidos, y sólo el 5% del total de cereales y legumbres, por lo que dependía de las importaciones extranjeras para alimentar a su población, volviendo su economía y su seguridad alimentaria vulnerable frente a shocks externos (Brandan, et al., 2011).

Los países del Golfo Pérsico (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Bahrein) habían estado persiguiendo una estrategia de inversiones desde mediados de la década, la cual se profundizó con el alza de los precios de 2008, en tierras cultivables en regiones como África Subsahariana, siendo el principal objetivo de los inversores, luego Asia oriental y meridional, etc... Estos proyectos estaban en su mayoría especializados en cultivos alimentarios, lo que sugiere que parte de la demanda de tierras es para garantizar el suministro de alimentos en los países del Golfo, por lo que estaríamos hablando de una estrategia de externalización de la seguridad alimentaria de estos países (BM, 2011). Estas inversiones provocaron oposición en algunos países destinatarios, según informes de la prensa, se han suscitado conflictos en países como Mozambique y Madagascar dado los conflictos inherentes a este tipo de inversiones, como la seguridad alimentaria local, el asentamiento de trabajadores extranjeros en vez de la utilización de la mano de obra local y dudas acerca de la sostenibilidad a largo plazo de estas inversiones y de las tierras arrendadas.

Yemen es otro caso que merece la pena destacar, uno de los países más pobres de Medio Oriente, en el cual, alrededor de 6,8 millones de personas padecían de inseguridad alimentaria y, 2,5 millones inseguridad alimentaria grave para 2010, uno de cada tres yemeníes tenía dificultades para acceder a alimentos suficientes y nutritivos. El impacto del aumento de los precios internacionales en 2008 incrementó de manera sustancial el número de yemeníes afectados por el hambre y la pobreza. Entre las razones que explican la inseguridad alimentaria en el país podemos mencionar la pobreza, la exposición a la volatilidad de los precios internacionales, ya que la disponibilidad de alimentos en el país se cubría con importaciones, las escasas inversiones en desarrollo productivo y humano, y un gran crecimiento de su población, dado que este país tiene una de las tasas de fertilidad más altas del mundo, 5,4 hijos por mujer (PMA, 2010).

Durante la segunda década del presente siglo, en la región acontecieron conflictos armados en Siria y Yemen que afectaron negativamente la seguridad alimentaria en Medio Oriente entre 2010 y 2019, como vimos en el párrafo anterior, el segundo país contaba desde antes con un escenario nacional delicado. En el caso de Siria, tras 8 años de conflicto, para 2019 se estimaba que el número de personas que se encontraban en una situación de inseguridad alimentaria rondaba los 6,5 millones, el 32% de su población y se estimaba que

otros 2,5 millones corrían el riesgo de sufrirla. Pese a que hubo para ese año un incremento generalizado en las cosechas respecto de las del año anterior, el precio de los alimentos continuaba siendo un problema para muchos sirios, al igual que el conflicto, que se mantenía en algunas zonas, la inflación y las faltas oportunidades de empleo, causantes de la dificultad al acceso de alimentos básicos. Tanto la FAO como el PMA se trabajaron para la población en el terreno, en el caso de la primera trabajó para aumentar la producción agrícola y creando y restaurando medios de subsistencia para salvaguardar una población vulnerable, durante el 2019 esta organización ayudó a unas 186.000 personas en el país. Mientras que el PMA aportó con ayuda alimentaria a más de 4 millones de personas en zonas afectadas por el conflicto (FAO, 2019b).

Siria, para 2019, era un país que dependía de las importaciones de alimentos para abastecer a su población. El trigo que importaba provenía de la Federación Rusa fruto de un acuerdo comercial en el cual se acordó que, entre 2017 y 2019, Moscú se comprometía a suministrarle un millón de toneladas al año. La harina de trigo también se importaba al país a través de comerciantes privados y agencias humanitarias internacionales que proveían de alrededor de 100.000 toneladas anuales para sus programas de asistencia alimentaria. Además, cabe destacar que, en el país, las fábricas de procesamiento de alimentos se limitaban a reempaquetar alimentos importados para el mercado local, ilustrando lo dependiente que era este país de las importaciones (FAO, 2019b).

Por otro lado, Yemen enfrentaba una de las peores crisis humanitarias del mundo, con una seguridad alimentaria gravemente comprometida fruto del conflicto que transcurría desde 2015 y el colapso económico que trajo aparejado el mismo, con un desplome del PIB en un 50% desde el inicio del conflicto, desempleo, pobreza, inflación y aumento de los precios de los alimentos, este se estimaba del 150% desde 2015. Los datos indicaban que para 2019, de una población de 30,5 millones de habitantes, más de 20 millones en el país padecían inseguridad alimentaria, de las cuales casi 10 millones padecían niveles extremos de hambre, la ayuda humanitaria se estaba volviendo cada vez más en el único salvavidas para millones de yemeníes. Este es un país que dependía de los mercados internacionales para la importación de sus alimentos básicos que rondaba sobre el 90% para finales de la segunda década del presente siglo, lo que complicaba más el panorama (ONU, 2019).

En definitiva, la seguridad alimentaria en Medio Oriente entre 2000 y 2019 estuvo marcada por una serie de dinámicas complejas donde los conflictos armados, las condiciones estructurales adversas, la dependencia de las importaciones agrícolas y las alteraciones climáticas jugaron un rol determinante. A pesar de algunos periodos de mejora, la región se

mantuvo vulnerable frente a los shocks externos, como las fluctuaciones en los precios internacionales y la intensificación de las disputas geopolíticas. Los casos de Irak, Palestina, Siria y Yemen ilustran con crudeza cómo la guerra, la inestabilidad política y los desastres naturales erosionaron de manera sostenida las capacidades locales para garantizar el acceso suficiente y adecuado a los alimentos. Esta tendencia de deterioro, agravada por la falta de resolución de los conflictos y las condiciones socioeconómicas de base, dejó a varios países de la región en una situación de extrema fragilidad hacia finales de la década.

1.5- El impacto de la pandemia de Covid-19 en la seguridad alimentaria

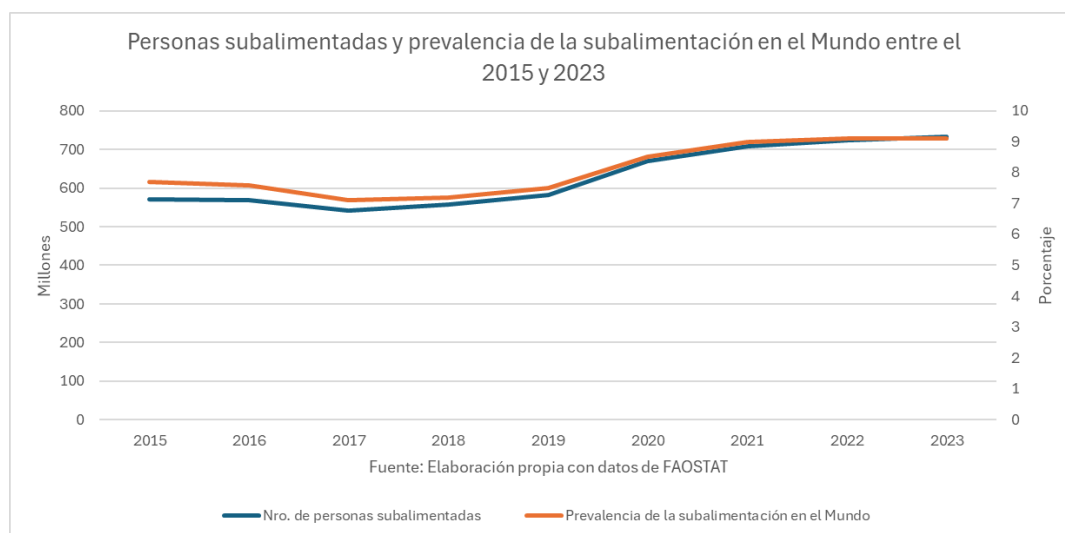
La pandemia de COVID-19 tuvo un efecto profundo y generalizado en el sistema alimentario global, exacerbando significativamente los niveles de inseguridad alimentaria en prácticamente todas las regiones del mundo, especialmente en aquellas que ya enfrentaban vulnerabilidades estructurales previas.

Uno de los mecanismos principales a través del cual la pandemia intensificó la inseguridad alimentaria fue la disrupción de las cadenas de suministro, tanto a nivel local como internacional. Las restricciones de movilidad, el cierre de fronteras, y las cuarentenas masivas obstaculizaron la producción, distribución y comercialización de alimentos, especialmente en países que dependen en gran medida de importaciones o de mercados informales.

Además, la pérdida de ingresos y empleos provocada por la contracción económica mundial disminuyó drásticamente el poder adquisitivo de millones de hogares. Esta situación fue particularmente aguda en contextos urbanos de América Latina y el Caribe y África donde la informalidad laboral es elevada y las redes de protección social resultaron insuficientes para amortiguar el impacto.

La pandemia de la COVID-19 ha puesto al descubierto la volatilidad de los progresos en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Si bien esta fue sin duda un factor determinante, los cambios observados en 2020 no pueden atribuirse únicamente a la pandemia, dado que hay otros muchos factores en juego. No obstante, el aumento del hambre en 2020 coincide con las pruebas existentes relativas a las dificultades económicas derivadas de la crisis del coronavirus, que probablemente hayan agravado las desigualdades en el acceso a los alimentos. El BM estima que en 2020 la pandemia empujó a otros 119 a 124 millones de personas a la pobreza extrema (FAO, 2021).

Gráfico 11:



En lo que respecta a los datos, podemos ver en el cuadro anterior que en el mundo la subalimentación dio un salto muy pronunciado, pasando de 581,3 millones en 2019 a 669,3 en 2020, es decir 88 millones de personas en un año y aumentando en 1% el porcentaje de personas que padecen hambre en el mundo, pasando del 7,5% de la población mundial a 8,5%, lo que puso en jaque el cumplimiento de la meta del hambre cero para 2030 (FAOSTAT, 2025).

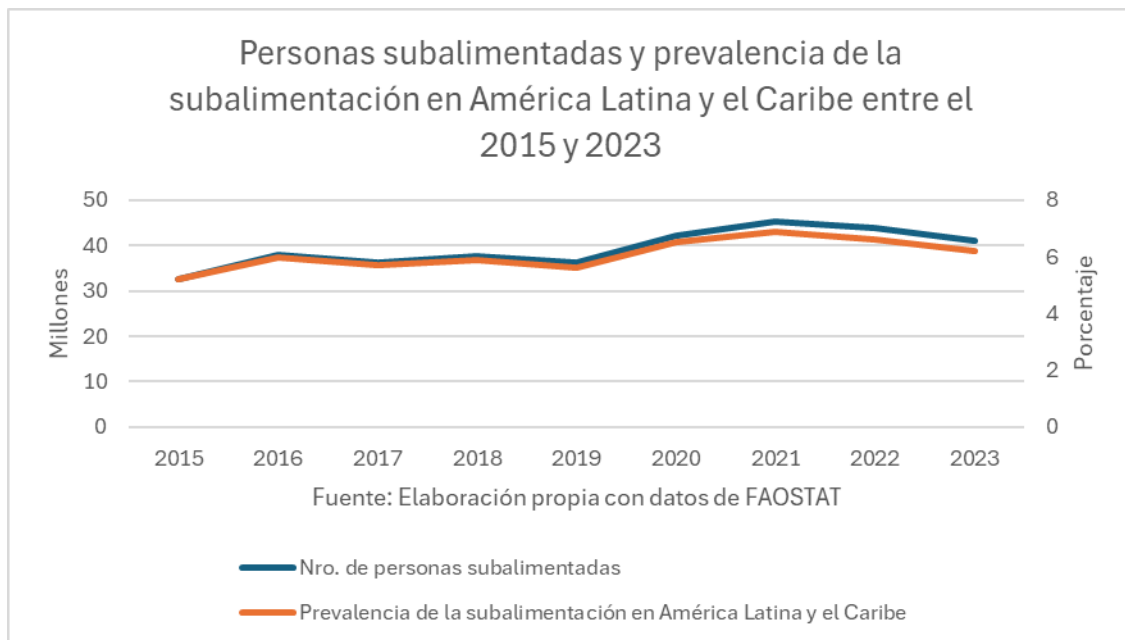
Sin embargo, desde mucho antes de la pandemia, varios factores habían desviado al mundo del camino a poner fin al hambre y la desnutrición a nivel global para 2030. Con la pandemia y las medidas de contención para sobrellevarla, la situación se agravó de cara a el cumplimiento de este objetivo planteado en los ODS. Naturalmente, la pandemia de la COVID-19 y las medidas adoptadas para contenerla han provocado un debilitamiento sin precedentes de la economía. Resulta especialmente preocupante que algunos de los países más afectados por la pandemia ya soportaban niveles altos de subalimentación y distintas formas de malnutrición antes de la misma.

En las tres regiones estudiadas el impacto de la pandemia ha tenido un efecto idéntico, se elevaron los índices de subalimentación. Sin embargo, cada región, dependiendo de sus condiciones estructurales, tuvo diferentes maneras de sobrellevar la crisis sanitaria.

En el caso de América Latina y el Caribe los problemas estructurales de la región como la pobreza, desigualdad, informalidad laboral, el espacio fiscal limitado y la baja productividad estuvieron relacionados con la mayor vulnerabilidad de su población ante la pandemia. Dichos problemas estaban asociados con los determinantes sociales de la salud, por lo que su magnitud en la región tiene una directa relación sobre el estado de la salud de las personas. A ello se le agrega que los países de la región han enfrentado la pandemia con

débiles sistemas de protección social y de salud con significativos problemas de acceso, cobertura y financiamiento en el caso de las prestaciones de la protección social. En este escenario de profunda y prolongada crisis, ambos sistemas se vieron expuestos a una presión de gran magnitud, agudizándose sus problemas estructurales. Esta región experimentó uno de los mayores aumentos relativos en la inseguridad alimentaria. El colapso económico derivado de la cuarentena provocó un deterioro acelerado en el acceso a los alimentos, en un contexto marcado por alta desigualdad, elevada dependencia de los ingresos laborales y limitada resiliencia de los sistemas de protección social. Países como Venezuela, Honduras y Haití presentaron escenarios críticos. En el gráfico (12) que sigue vemos que de 2015 a 2016 la población subalimentada aumentó en 5 millones de personas, manteniéndose en los 36 y 37 millones entre 2016 y 2019, número que aumentó con el estallido de la crisis del Covid-19 alcanzando su pico en 2021 con unas 43,9 millones de personas que padecían hambre en la región, es decir 9 millones de personas más que hacía dos años. Por lo que vemos, aún queda bastante trabajo por hacer en vistas a la erradicación del hambre para 2030, ya que desde que se establecieron los objetivos en 2015, las personas subalimentadas nunca estuvieron por debajo del número de ese año (FAOSTAT, 2025).

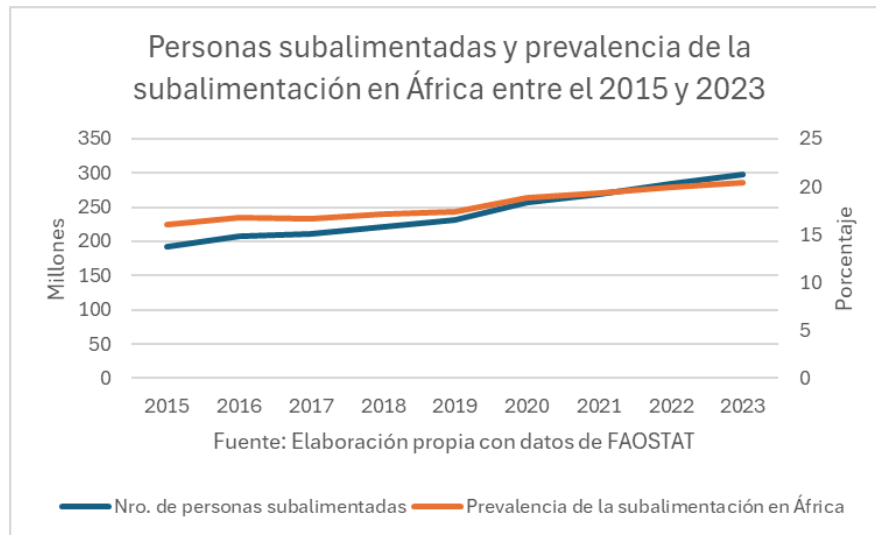
Gráfico 12:



En el caso de África, la pandemia de COVID-19 profundizó significativamente la inseguridad alimentaria, una región que, como vimos anteriormente, enfrentaba múltiples desafíos estructurales antes de la crisis sanitaria, como la volatilidad de los precios internacionales de alimentos, los conflictos armados y los efectos del cambio climático. De acuerdo con el informe *El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el*

Mundo2022 (FAO, 2022c), esta fue la región con la mayor proporción de personas afectadas por el hambre en 2021, con una prevalencia del 20.2 % de la población.

Gráfico 13:



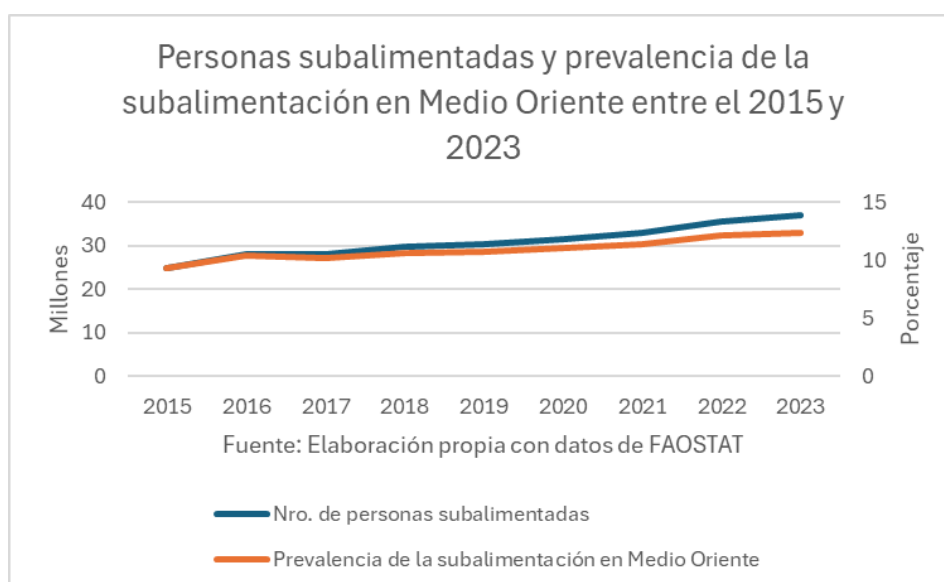
En lo que respecta a los números, vemos que la subalimentación en el continente tuvo una dinámica de ascenso constante entre 2015 y 2019. Sin embargo, para 2021 esta tiene un ascenso abrupto en el cual se contabiliza un aumento de casi 40 millones de personas que padecían hambre en el lapso de dos años como consecuencia de la pandemia de Covid-19 en combinación con los factores mencionados previamente. Por lo que, esta región también enfrenta un panorama sombrío de cara a la meta de la erradicación del hambre en los ODS. Las regiones más afectadas incluyeron el Cuerno de África, el Sahel, y varios países de África Central y Occidental, donde la convergencia entre la pandemia, conflictos armados, crisis climáticas y crisis económicas generó condiciones especialmente graves. En el Cuerno de África enfrentaron una combinación letal de factores, sequías severas consecutivas y la pandemia, lo que provocó una reducción drástica de los ingresos en zonas rurales y urbanas. La pérdida de empleos, el encarecimiento de los insumos agrícolas, y el cierre de fronteras limitaron el comercio transfronterizo, vital para la seguridad alimentaria local. En el Sahel la pandemia se superpuso a conflictos armados activos, desplazamientos masivos de población, e inseguridad prolongada. Esto impidió el acceso humanitario y agravó la crisis alimentaria en una región con alta dependencia de las importaciones alimentarias. Por último, en África Central y Occidental, en países como la República Democrática del Congo y Nigeria, la fragilidad institucional, junto con los efectos de la pandemia, llevó a un aumento del hambre aguda. Según el informe *Hunger Hotspots* de la FAO, estos países fueron considerados de “muy alta preocupación” por el número creciente de personas en situación de inseguridad alimentaria grave (FAO, 2022a).

Aunque muchos gobiernos africanos adoptaron medidas para mitigar el impacto de la pandemia en la seguridad alimentaria, la mayoría enfrentó importantes restricciones fiscales e institucionales. Las estrategias adoptadas incluyeron, la suspensión temporal de aranceles a alimentos importados en países como en Kenia y Nigeria, programas de transferencias monetarias o distribución directa de alimentos, como parte de paquetes de ayuda de emergencia, por ejemplo, el programa de asistencia alimentaria de Sudáfrica y el apoyo a pequeños productores agrícolas a través de subsidios o acceso facilitado a insumos, como en Etiopía. Sin embargo, estas intervenciones fueron frecuentemente limitadas en alcance, duración y cobertura. La informalidad económica predominante, los sistemas de registro de beneficiarios poco desarrollados, y las restricciones presupuestarias impidieron una respuesta sostenida. Además, la dependencia de ayuda internacional fue un factor crítico en varios países.

Finalmente, la región de Medio Oriente ya enfrentaba desafíos en términos de seguridad alimentaria antes de la pandemia, debido a la alta dependencia de las importaciones de alimentos, la inestabilidad política crónica, los conflictos prolongados y la presión sobre los recursos naturales, especialmente el agua. La llegada del Covid-19 exacerbó estas vulnerabilidades, agravando el acceso económico y físico a los alimentos en amplias zonas del territorio.

Según *El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2022* (FAO, 2022c), si bien la prevalencia de la subalimentación en la región evidenciaba un lento ritmo ascendente, esta se incrementó entre 2019 y 2021, afectando a unas 33 millones de personas, lo que representa 12% de la población.

Gráfico 14:



Entre los países más afectados encontramos a Yemen que es el caso más crítico de la región. Años de guerra civil han colapsado el sistema sanitario y logístico, y la pandemia interrumpió aún más la entrega de ayuda humanitaria. El Covid-19 exacerbó la inflación alimentaria, la escasez de combustibles y el desempleo, elevando los niveles de hambre aguda a niveles alarmantes. Según el reporte *Hunger Hotspots* de la FAO, Yemen fue catalogado como uno de los países con mayor riesgo de hambruna (FAO, 2022b).

Luego, en el caso de Siria, la guerra prolongada, combinada con la pandemia, provocó un deterioro rápido de las condiciones de vida. Las restricciones de movimiento dificultaron el acceso a mercados, y la devaluación de la libra siria disparó los precios de los alimentos. En 2021, más del 60% de la población estaba en situación de inseguridad alimentaria (FAO, 2021).

Otro país que cabe mencionar es Líbano, dado que la pandemia coincidió con una crisis económica y política sin precedentes. La depreciación de la moneda, la pérdida de empleos, y la explosión en el puerto de Beirut en 2020 profundizaron la dependencia de la ayuda alimentaria. Para 2021, más de la mitad de la población vivía en la pobreza, y alrededor del 22% estaba en inseguridad alimentaria (ESCWA, 2021).

Finalmente, Palestina donde el cierre de fronteras, las restricciones de movilidad, y el limitado acceso a insumos básicos debido al confinamiento y al bloqueo contribuyeron al deterioro del acceso alimentario, especialmente en Gaza, donde las tasas de pobreza y desempleo aumentaron dramáticamente (FAO, 2021).

Las respuestas gubernamentales variaron según la estabilidad política y la capacidad fiscal de cada país. Las principales medidas incluyeron, los controles de precios y restricciones a la exportación para contener la inflación alimentaria, como ocurrió en Jordania y el Apoyo logístico a cadenas de suministro internas para evitar el colapso de mercados locales en países más estables como en Arabia Saudita.

Sin embargo, en países en conflicto o crisis profunda como Yemen, Siria y Líbano las medidas gubernamentales fueron limitadas o inexistentes. En muchos casos, la ayuda humanitaria internacional —especialmente del PMA, UNICEF y ONG locales— fue la única fuente de apoyo efectivo para millones de personas. Además, la dependencia estructural de las importaciones alimentarias dejó a la región expuesta a los shocks de precios globales y a la volatilidad del comercio internacional durante la pandemia.

A lo largo de este capítulo, se ha examinado cómo la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente ha sido influenciada por factores estructurales y crisis globales, con un enfoque particular en el impacto de la pandemia de COVID-19. En el caso de América Latina y el Caribe, la persistente desigualdad, pobreza, informalidad laboral y sistemas de protección social débiles pusieron a gran parte de la población en una situación de vulnerabilidad frente a la pandemia. Por otro lado, África, que ya venía enfrentando altos niveles de inseguridad alimentaria debido a conflictos, cambio climático y volatilidad de los precios, vio un agravamiento con la llegada de la pandemia. Finalmente, Medio Oriente enfrentó una situación complicada, con países experimentando una grave crisis alimentaria antes de la pandemia, situación que se vio intensificada por la misma. El impacto del Covid-19 en estas tres regiones muestra que los progresos logrados en la lucha contra el hambre eran frágiles y vulnerables a crisis globales. Los factores estructurales, como la pobreza, los conflictos, el cambio climático y la debilidad de los sistemas de salud fueron elementos que agravaron la crisis. Las proyecciones de los ODS 2030 para erradicar el hambre parecen cada vez más lejanas, ya que la pandemia subrayó las brechas persistentes en los sistemas alimentarios globales y las desigualdades en el acceso a los alimentos.

El rol de Rusia y Ucrania en el marco de la problemática de la seguridad alimentaria en el Sur Global durante el siglo XXI

En este segundo capítulo se desarrollará el objetivo específico número dos que se corresponde con explicar el rol de Rusia y Ucrania como Estados proveedores de alimentos en el Sur Global durante el siglo XXI. Este se abordará a lo largo de dos apartados. Uno trata la evolución de Rusia hasta posicionarse como un actor protagónico en las cadenas agroalimentarias mundiales, tanto por su rol como proveedor de materias primas como de fertilizantes. El otro, versa sobre la evolución de Ucrania y su camino hasta convertirse en un actor fundamental en las cadenas agroalimentarias mundiales, el impacto de la guerra sobre su territorio y el grado de dependencia de los alimentos provenientes del Mar Negro de países que componen el Sur Global. Este capítulo lo realizaremos en base a información recabada de fuentes oficiales como Harvard University, la FAO, FAOSTAT, el Foreign Agricultural Service del U.S. Department of Agriculture (USDA), la UNCTAD y la Bolsa de Comercio de Rosario.

Durante las primeras dos décadas del siglo XXI, Rusia y Ucrania consolidaron su posición como actores clave en el mercado agrícola global, especialmente en la exportación de cereales y aceites vegetales. Su influencia fue particularmente significativa en regiones del Sur Global, como África, Asia y Oriente Medio, donde muchos países dependían en gran medida de las importaciones provenientes de estos dos países para garantizar su seguridad alimentaria.

Tras la disolución de la Unión Soviética (URSS), tanto Rusia como Ucrania experimentaron una transformación en sus sectores agrícolas. Durante la década de 1990, ambos países enfrentaron desafíos significativos, incluida una disminución en la producción agrícola y una mayor dependencia de las importaciones de alimentos. Sin embargo, a partir del año 2000, implementaron reformas que revitalizaron su producción agrícola. Estas reformas incluyeron la liberalización del mercado de tierras, inversiones en infraestructura agrícola y subsidios gubernamentales, lo que llevó a un aumento significativo en la producción y exportación de productos agrícolas.

En 2018, Rusia se destacó como uno de los principales productores mundiales de trigo, cebada, girasol y otros cultivos esenciales. Simultáneamente, Ucrania emergió como un

líder en la producción y exportación de trigo, maíz, cebada y aceite de girasol, consolidando su reputación como el "granero de Europa".

La expansión de las exportaciones agrícolas de Rusia y Ucrania tuvo un impacto significativo en el Sur Global. Países en África, Asia y Oriente Medio comenzaron a depender en gran medida de las importaciones de cereales y aceites vegetales de estos dos países para satisfacer sus necesidades alimentarias. Además, el PMA adquiría más de la mitad de su suministro de trigo de Ucrania, subrayando la importancia de este país en la asistencia alimentaria global.

2.1 – Rusia: de la crisis a la consolidación, la transformación del sector agroalimentario y su papel estratégico en el suministro mundial de fertilizantes

Tras la implosión de la URSS, el sector agrícola ruso se sumergió en una profunda crisis, de la cual le costaría muchos años salir. Dado que, con el inicio de las privatizaciones, las empresas se encontraron privadas del apoyo estatal que recibían, por lo que tuvieron que operar en un entorno completamente diferente orientado por el mercado. Para fines de década, la mayoría de las empresas agrícolas no eran rentables, este contexto tuvo como consecuencia que la producción de cereales se redujese en aproximadamente un 52% en ocho años (Lukyanova, 2022).

Para fines de década, el sector agrícola tuvo una oportunidad con la crisis de 1998 ya que la importación de alimentos se volvió más cara y los productos domésticos más competitivos. Desde aquí, se inició una nueva fase en el sector, ya que Rusia se involucró activamente en el proceso de globalización, por lo que aumentaron tanto las importaciones como las exportaciones. Sin embargo, el aumento de las importaciones ha sido muchas veces superior al de las exportaciones, lo que ha hecho que Rusia dependa de otros países. Por ello, a principio de siglo, Rusia era uno de los principales importadores de alimentos.

Este país tenía un vasto potencial agrícola, el cual no era lo suficientemente explotado a principios de siglo. Esto podía deberse a varias razones, entre las cuales encontramos:

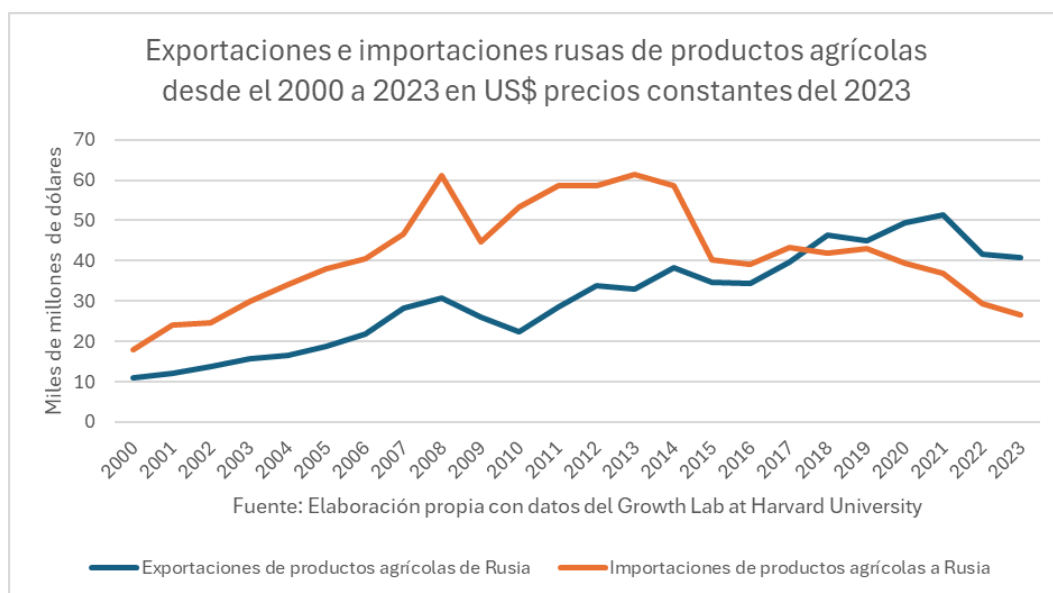
- Una estructura muy sesgada de las explotaciones, agroholdings y firmas que se generalizaron, combinando organizaciones agrícolas de diferentes tamaños que se formaron en el lugar de antiguas organizaciones que estaban bajo control de una organización matriz. Las más grandes controlaban cientos de miles de hectáreas y hasta 20.000 trabajadores. Las diferencias en la asignación de tierras y la distribución desigual de las ayudas gubernamentales, que se concentraban en las en grandes

explotaciones y agroholdings obstaculizaban el desarrollo de las pequeñas explotaciones y les impedían participar en las cadenas de valor, repercutiendo negativamente en el desarrollo rural (Lukyanova, 2022).

- El envejecimiento de la población rural y la falta de recursos humanos en general, ya que en estas zonas la necesidad de personal calificado impedía que muchas empresas utilicen toda su capacidad de producción.
- La baja eficiencia de la producción agrícola rusa, el principal indicador de esta es la productividad laboral. En Rusia, la productividad laboral era varias veces inferior en comparación con países europeos.
- La carencia de instalaciones para procesar y almacenar productos agrícolas, que se encontraban situadas a distancias insuficientes unas de otras y que no siempre contaban con los requerimientos y tecnologías modernas.

En el año 2010 aconteció un cambio desde el gobierno, se lanzó la *Doctrina Rusa de Seguridad Alimentaria*. Este programa preveía un desarrollo integral y acelerado del complejo agroindustrial y de la infraestructura social en las zonas rurales, ya que se buscaba potenciar el sector a un nivel altamente competitivo. A partir de este momento, la política se volvió más proteccionista y se emprendió un camino a la sustitución de importaciones que se sumó al apoyo estatal a productores del sector destinados a aumentar la eficiencia y la competitividad de los productos alimentarios rusos. La idea era que desde este año hasta el 2020 se proporcionaría apoyo en todas las fases del ciclo, desde la creación de nuevos productos, su promoción, incluyendo préstamos subvencionados, compensación de los costes de transporte y certificación, y para la creación y modernización de instalaciones agroindustriales, el registro de la propiedad intelectual en el extranjero, la participación en exposiciones y ferias en el extranjero y diversas misiones empresariales.

Gráfico 15 (Fuente: Growth Lab Harvard University, 2025):



Como podemos observar en el cuadro anterior Rusia gastaba mucho más en importar alimentos de lo que ganaba exportando hasta 2018, si bien la diferencia era muy superior hasta 2013, año en que el gasto de las importaciones fue récord, posterior a este año las exportaciones fueron creciendo y las importaciones decayeron. Como ya mencionamos, a principios de siglo este país era uno de los principales importadores de alimentos, padecía de dependencia de importaciones de alimentos y productos agrícolas, ya que de esta fuente provenía entre el 30% y el 50% del consumo de su población, lo que suponía una grave amenaza económica (Lukyanova, 2022).

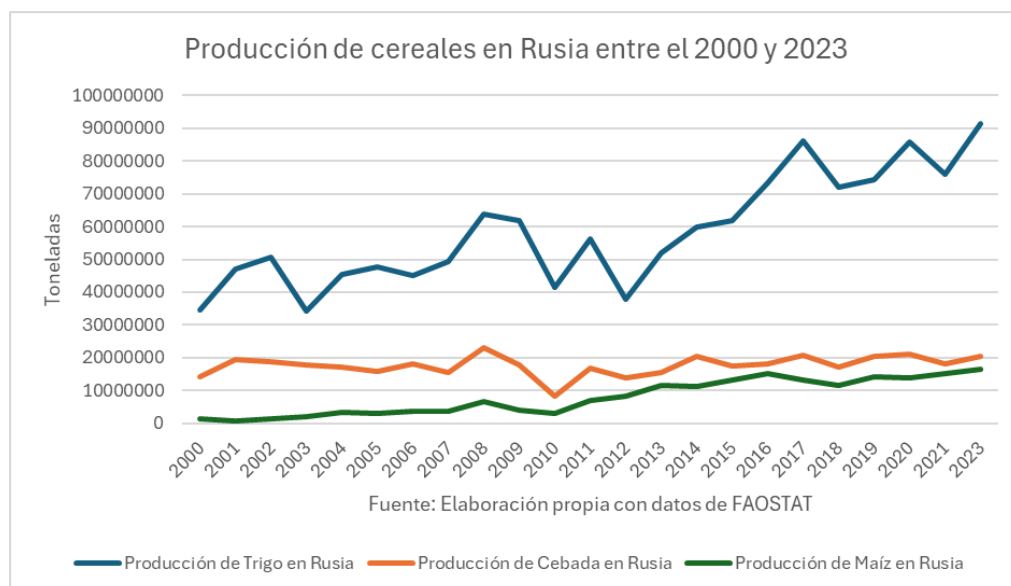
A partir del año 2014, con la anexión de Crimea por Rusia luego de los sucesos del Euromaidán que destituyeron al presidente ucraniano Víktor Yanukóvich sucedieron todo tipo de sanciones desde Occidente. Las mismas tuvieron repercusión en el comercio del país, dado que Moscú dependía en gran medida de la importación de alimentos frescos y transformados del mercado internacional, en especial del mundo occidental antes de 2014. Tras esta crisis, oleadas de sanciones impusieron restricciones económicas a instituciones financieras, políticos de alto nivel y empresas multinacionales rusas. El objetivo de estas era presionar al país a cambiar su postura en los principales asuntos internacionales debilitando su economía, sin embargo, Rusia adoptó contrasanciones a Occidente prohibiendo la importación de casi todos los productos alimenticios (carne, lácteos, frutas y verduras frescas, etc...). Por lo que el país había emprendido un camino en vistas a reducir su dependencia de las importaciones de alimentos y a lograr una producción agrícola autosuficiente.

Entre la imposición de las sanciones y la *Doctrina Rusa de Seguridad Alimentaria* el gobierno aumentaba la financiación para el sector agrario, las subvenciones a la agricultura en 2014 se multiplicaron en un 1,5%, pasando de 165.700 a 252.700 millones de rublos (Lukyanova, 2022). Así, las sanciones y contrasanciones provocaron un aumento de la inversión en el sector, cuyos frutos se verían para el 2018, año en que obtuvo más de las exportaciones de lo que gastó en importaciones de alimentos.

En cuanto al trigo y los cereales, son los únicos productos que no están sujetos a embargo. Estos ocupan la primera posición de las exportaciones agrícolas de la actualidad de Rusia y el sector entra en el top 5 de todas sus exportaciones. Sin embargo, el país aún necesita un desarrollo considerable de la información de mercado y unos mercados de futuros de materias primas.

A principios de siglo, la producción de cereales era mínima y no alcanzaba para suplir las necesidades de la población. En el caso del trigo, la producción era inestable, se balanceaba entre aumentos y retrocesos hasta el año 2013, año a partir del cual la producción empieza a crecer gradualmente, pero a un ritmo sostenido con su récord en el 2023 con más de 90 millones de toneladas. En el caso de la cebada, si bien Rusia es el cuarto principal exportador de este cereal, la producción no ha tenido mayores sobresaltos, si bien en la actualidad se produce más que a principios de siglo, el salto no ha sido tan drástico como en el trigo. Finalmente, la producción de maíz ha crecido considerablemente, con un ritmo firme pero lento, sin mayores exabruptos. Esto nos permite afirmar que Doctrina de Seguridad Alimentaria Rusa, sumada a las sanciones provenientes de Occidente que forzaron al país a autoabastecerse de alimentos han tenido un efecto positivo en la producción de cereales.

Gráfico 16:



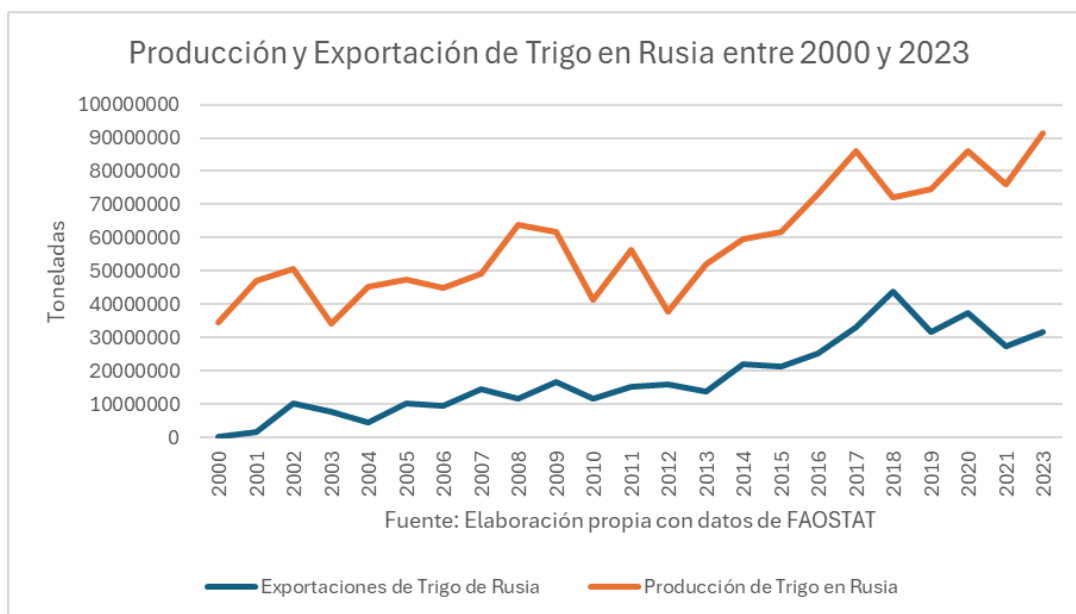
En este sentido cabe destacar que Rusia posee tres regiones que se destacan por la fertilidad de sus suelos en lo que respecta al cultivo de cereales, gracias a sus tierras negras ricas en nutrientes que las hacen idóneas para la agricultura. En el caso del trigo las principales regiones productoras son el Distrito Federal Central, el Distrito Federal Sur y el Distrito Federal del Cáucaso Septentrional, siendo las regiones lindantes con Ucrania.

Gráfico 17 (USDA, 2020):



Las exportaciones de trigo han acompañado la dinámica de la producción del cereal, siendo el 2018 el año récord para las exportaciones, con una cosecha récord siendo superada únicamente por la del 2023. Por esto, Rusia se ha convertido en el principal exportador de trigo del mundo, suministrando entre el 20% y el 23% de las exportaciones mundiales del cereal en 2017-2018, alcanzando las 43 millones de toneladas, el grano ruso se envió a 138 países (Lukyanova, 2022).

Gráfico 18:

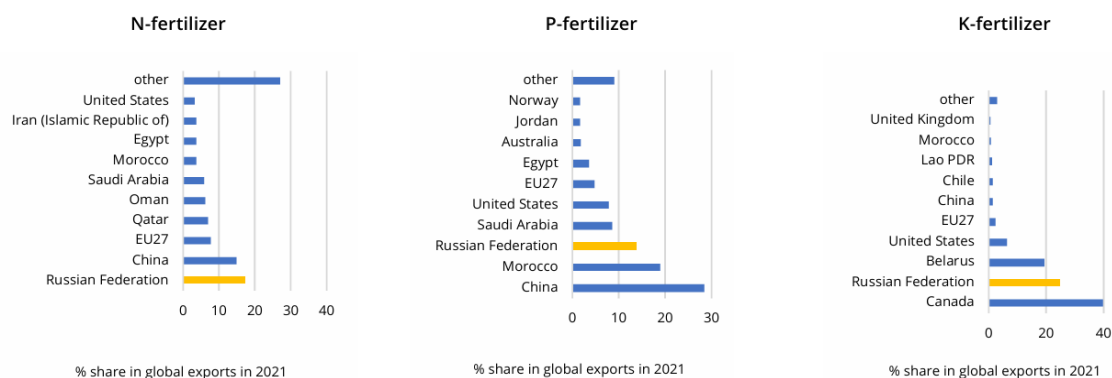


Entre los principales destinos del trigo ruso encontramos a Turquía, Egipto, Azerbaiyán, Sudán y Yemen para el año 2021, último año del que se disponen cifras oficiales en FAOSTAT.

En este marco cabe resaltar que hay una amplia lista de países del Sur Global altamente dependientes de las importaciones de trigo ruso, con más del 30% de sus importaciones totales provenientes de este país para 2021, entre esta lista encontramos 15 provenientes de las regiones estudiadas en esta tesina, los cuales veremos graficado en las páginas siguientes. Esto se traduce en una gran vulnerabilidad frente a shocks externos y disrupciones en las cadenas de suministros, provocando situaciones graves de inseguridad alimentaria en estos países.

Por otro lado, en 2021, la Federación Rusa se consolidaba como uno de los actores más relevantes en el comercio internacional de fertilizantes, ocupando posiciones destacadas en las exportaciones de los tres principales tipos: nitrogenados (N), fosfatados (P) y potásicos (K). Según datos de la FAO (2022), Rusia fue el segundo mayor exportador global de fertilizantes nitrogenados, el tercero en fosfatados y el segundo en potásicos, compartiendo protagonismo con países como China, Canadá y Bielorrusia. Esta capacidad exportadora confería a Rusia un rol estratégico en la provisión de insumos esenciales para la agricultura mundial, especialmente en regiones altamente dependientes de las importaciones. (FAO, 2022e).

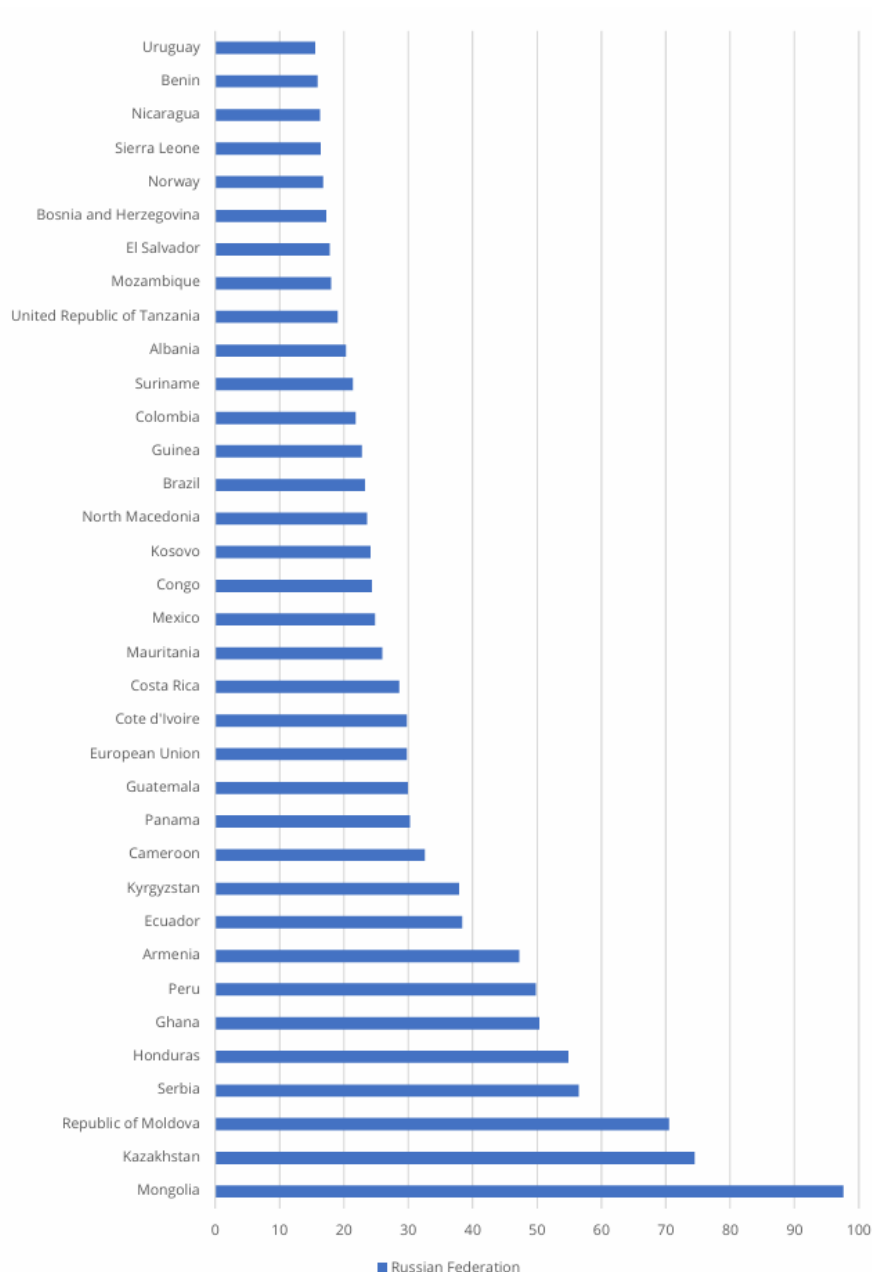
Porcentaje de exportaciones rusas de fertilizantes al mercado global (Gráfico 19):



Fuente: (FAO, 2022e).

La centralidad rusa en el mercado global de fertilizantes se reflejaba en la dependencia significativa de numerosos países importadores. Más de 25 economías — incluyendo a varios países de América Latina, Europa del Este, Asia Central y África— obtenían al menos el 20 % de sus fertilizantes de origen ruso. En algunos casos, como Honduras, Ghana, Perú y Camerún, la dependencia superaba el 50 %, lo que evidenciaba una vulnerabilidad estructural frente a posibles alteraciones en el suministro. Esta situación era especialmente crítica en países con baja capacidad de producción nacional de fertilizantes o con escasas alternativas logísticas y comerciales para diversificar sus proveedores (FAO, 2022e).

Porcentaje de importaciones de fertilizantes rusos por país (FAO, 2022e) (Gráfico 20):



La importancia de Rusia como proveedor no se limitaba a los volúmenes exportados, sino también al tipo de fertilizantes que ofrecía: su participación era particularmente elevada en productos como la urea y el cloruro de potasio, fundamentales para los sistemas de cultivo intensivo. En ese contexto, el funcionamiento estable y previsible del comercio ruso de fertilizantes era un componente clave para la seguridad alimentaria global, sobre todo en países con sistemas agrícolas frágiles o altamente dependientes de insumos externos.

A modo de conclusión, la evolución del sector agrícola ruso desde la disolución de la URSS hasta 2021 refleja una transformación profunda, marcada por una década inicial de

crisis, colapso productivo y pérdida de competitividad, seguida por un proceso de reconfiguración estratégica que combinó estímulos estatales, reformas institucionales y cambios en el entorno internacional. A partir de la crisis financiera de 1998 y, más tarde, con la adopción de la Doctrina de Seguridad Alimentaria en 2010 y la implementación de contrasanciones en 2014, Rusia comenzó a construir un modelo agroalimentario más autosuficiente, orientado a reducir su dependencia de las importaciones y consolidar capacidades productivas internas.

Este giro estratégico dio frutos particularmente en la producción de cereales, donde el caso del trigo destaca como emblema del resurgir agrícola ruso. No solo se logró abastecer el consumo interno, sino que Rusia emergió como el mayor exportador mundial del grano, con una presencia creciente en los mercados del Sur Global. Sin embargo, este crecimiento no estuvo exento de limitaciones: persistieron desafíos estructurales como el atraso tecnológico, la insuficiencia de infraestructura logística y la escasa sofisticación de sus mercados agropecuarios.

Al mismo tiempo, la Federación Rusa reforzó su papel como proveedor estratégico de insumos clave para la producción agrícola mundial, consolidándose como uno de los principales exportadores de fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos. En 2021, Rusia compartía protagonismo con potencias como China y Canadá, con una participación destacada en el comercio internacional de estos insumos (FAO, 2022e). Su centralidad se reflejaba en la elevada dependencia de numerosos países importadores: más de 25 economías, en su mayoría ubicadas en América Latina, África y Asia Central, obtenían al menos un 20 % de sus fertilizantes desde Rusia.

Así, previo a 2022, Rusia no solo había alcanzado una posición dominante como exportador de alimentos —particularmente de cereales—, sino que también se había convertido en un eslabón esencial en las cadenas de suministro agrícola a través de la provisión de fertilizantes. Esta doble condición —como proveedor de alimentos y de insumos para producirlos— consolidaba a la Federación Rusa como un actor central en la arquitectura del sistema agroalimentario global, proyectando su influencia más allá del plano económico y posicionándose como un actor geoeconómico clave para la seguridad alimentaria de numerosas regiones del mundo.

2.2- Ucrania: la transformación del agro ucraniano y su rol estratégico en la seguridad alimentaria global

Con la implosión de la URSS y la independencia de Ucrania se emprendieron algunas reformas de mercado, sin embargo, los elementos clave del sistema soviético como la adquisición estatal de productos agrícolas clave, el suministro estatal de insumos, el control administrativo de los flujos de productos, precios y márgenes se mantuvieron. En 1992, las granjas colectivas soviéticas se transformaron en las llamadas empresas agrícolas colectivas (EAC). Este cambio meramente formal, no supuso una reestructuración real del sector agrícola, el suministro de insumos y la transformación de alimentos seguía en manos del Estado.

En 1991, una ley hizo posible la agricultura privada, para 1994 habían surgido 32.000 explotaciones privadas, número que se elevaría hasta 43.000 en 2002. Sin embargo, estas seguían siendo pequeñas con un tamaño medio inferior a 30 hectáreas en la década del 90 que aumentó a 66ha en 2002, y que han demostrado ser mucho menos potentes como fuerza configuradora de la política agrícola que las aproximadamente 12.000 EAC (Kvasha, 2022).

En función de esto, vemos que la política agrícola siguió un sentido conservador durante la última década del siglo XX, manteniendo estructuras de propiedad soviéticas, transferencias presupuestarias y regulación estatal de los mercados. Los precios siguieron estando regulados y se situaron en torno al 10% de los precios correspondientes al mercado mundial, permitiéndole a un puñado de individuos enriquecerse a costa de comprar productos agrícolas como cereales a precios muy económicos para venderlos en el mercado mundial, lo que tuvo como respuesta una batería de medidas administrativas destinadas a frenar estas exportaciones a través de la imposición de cuotas de exportación y de la concesión de licencias (Kvasha, 2022).

La producción agrícola disminuyó mucho durante la última década del siglo XX, dada la reducción de las subvenciones, lo que provocó el aumento de los precios de los insumos como los fertilizantes y con el deterioro de la relación de intercambio de la agricultura. Como consecuencia, el rendimiento medio de los cereales bajó de 3,2 toneladas/hectárea en 1990 a 2,3 t/ha en 1996. Con la implosión de la economía, la agricultura absorbió la mano de obra despedida del sector industrial, y la producción de alimentos de subsistencia se convirtió en la única estrategia de supervivencia para muchos ucranianos (Kvasha, 2022).

Avanzando en la década, con un programa de estabilización macroeconómica a través de la reducción del déficit fiscal, se redujeron las transferencias presupuestarias a la

agricultura ucraniana luego de 1994, pasando del 11% al 2% del PIB. Para este año se había avanzado en una base jurídica para la distribución de las tierras entre los miembros de las EAC, y en 1996 se habían eliminado la mayoría de las cuotas y las restricciones a las exportaciones agrícolas (Kvasha, 2022).

Para 1996 las reformas en el sector agrícola perdieron impulso, las EAC probaron no ser muy distintas a las granjas colectivas soviéticas. En la industria alimentaria, en 1996 se introdujo un mecanismo de privatización prometedora. Sin embargo, en los sectores estratégicos como la comercialización de cereales, la participación del Estado era mayoritaria, y las empresas clave quedaban exentas de la privatización, por lo que gran parte del sector de transformación y comercialización de alimentos siguió monopolizado por el Estado en un contexto de reducción de este, lo que estancó a estas empresas. En el caso de los principales productos agrícolas de exportación como los cereales y oleaginosas, la ineficacia de la transformación y la comercialización se tradujo en una caída en los precios al que los productores vendían sus cereales.

Respecto de la política comercial, en 1996 con la eliminación de las cuotas y de las restricciones a las concesiones de licencias para la exportación dio lugar a una liberalización poco efectiva, dado que quienes se habían beneficiado de estas restricciones desarrollaron alternativas rápidamente. Entre las restricciones y retrasos proveniente de interpretaciones de leyes por parte de los funcionarios de aduana, hasta las prohibiciones a la exportación por parte de algunas autoridades regionales que no contaban con el derecho de poner tales restricciones, pero que contaban con la ambigüedad del gobierno central en Kiev.

Este conjunto de factores mencionados, sumado al estancado suministro privado de insumos a niveles muy bajos, junto con la incapacidad del gobierno de proveer de fertilizantes en el momento oportuno y los bajos precios a los que los productores podían vender sus cereales, provocó un descenso abrupto de la producción de cultivos en el país en la segunda mitad de 1990, para 1999 la producción agrícola había caído al 50% de su nivel anterior a la independencia (Kvasha, 2022).

Aquí se observa que hubo un desequilibrio entre la política macroeconómica y la política agrícola, dado que a mediados de los 90 el país recuperó cierta estabilidad macroeconómica, sin embargo, estas no fueron respaldadas por reformas estructurales en la agricultura. En esta situación es que Ucrania afrontaba la crisis financiera de septiembre de 1998 desencadenada por acontecimientos internacionales (sudeste asiático, Rusia, América Latina), esta golpeó severamente al país dada su vulnerabilidad. Sin embargo, esta crisis

supuso un impulso para la agricultura y sentó las bases para la evolución de la política agraria del país en el siglo XXI.

A raíz de la crisis financiera y tras la reelección del presidente Kuchma a finales de 1999, este reconoció la necesidad de acelerar el proceso de reformas en la agricultura. En diciembre de 1999, este firmó un decreto que estipulaba que todas las EAC debían distribuir las tierras y reestructurarse para conformar nuevas entidades antes de mayo del 2000, la mayoría se transformaron en sociedades o cooperativas, para 2002 aproximadamente el 30% de la tierra estaba en manos privadas y más del 65% eran propiedad de miembros de antiguas EAC (Kvasha, 2022). Otra de las reformas estipulaba un nuevo enfoque para el suministro de insumos a las empresas agrícolas por parte del gobierno, estas se harían mediante el pago en efectivo, poniendo fin al pedido estatal de los granos. A su vez, el gobierno introdujo importantes ventajas fiscales para el sector, que desde entonces han sido el elemento dominante del apoyo fiscal a la agricultura. Estos beneficios fiscales eran progresivos, ya que proporcionaban un apoyo considerablemente mayor a las explotaciones más grandes y productivas, favoreciendo así a la agricultura a gran escala en el país.

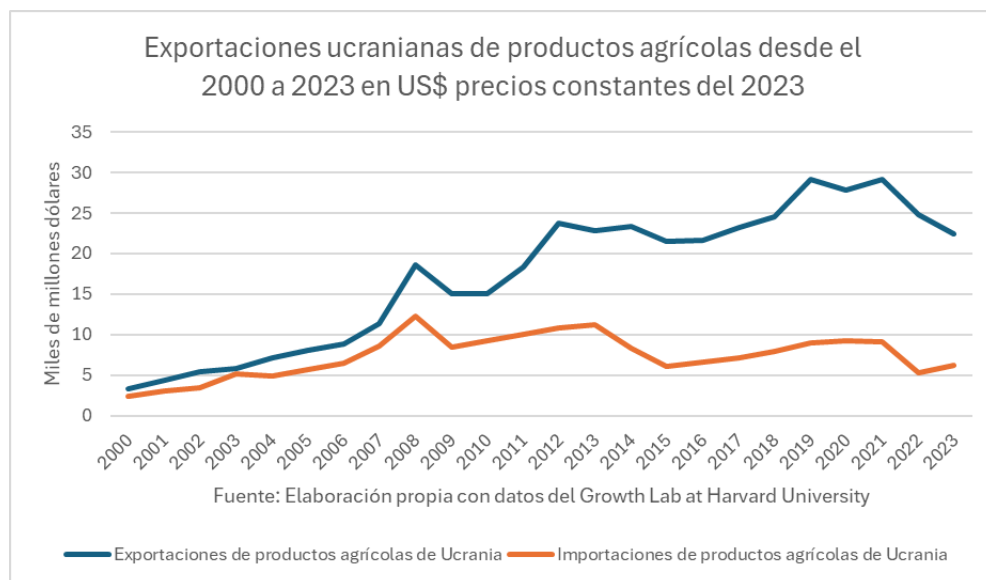
En conjunto, estas decisiones generaron optimismo en el sector, y en el 2000 afluyó más capital a la agricultura que en años anteriores. En 2000 y 2001, por primera vez desde 1995, las empresas agrícolas ucranianas generaban valor agregado, ganancia para los productores y la producción agrícola aumentó por primera vez desde la independencia. La industria de transformación de alimentos también comenzó a crecer, este sector comenzó a recibir importantes flujos de inversión extranjera directa (IED) y con las exportaciones que no paraban de crecer.

Tras una serie de malas cosechas de trigo entre 2000 y 2003, las cuales aumentaron los precios de este cereal y del pan que consumía la población, los responsables políticos volvieron a sus métodos de planificación e intentaron regular los precios y los flujos de los productos, el Estado intentó retomar su lugar a través de reformas que buscaban regular los mercados. Con el comienzo del ciclo alcista de los precios de los *commodities* se restringieron las exportaciones durante las cosechas 2006/07, 2007/08, 2010/11 y 2011/12, estas adoptaron forma de cuotas o impuestos de exportación. A su vez, desde la cosecha 2012/13 se canceló la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la exportación, gravando a las exportaciones de cereales.

Ucrania, a lo largo de estas décadas se fue consolidando como un proveedor de alimentos muy importante a nivel global que abastece cada vez más al mundo con sus productos, se puede observar que en las últimas dos décadas sus exportaciones han crecido

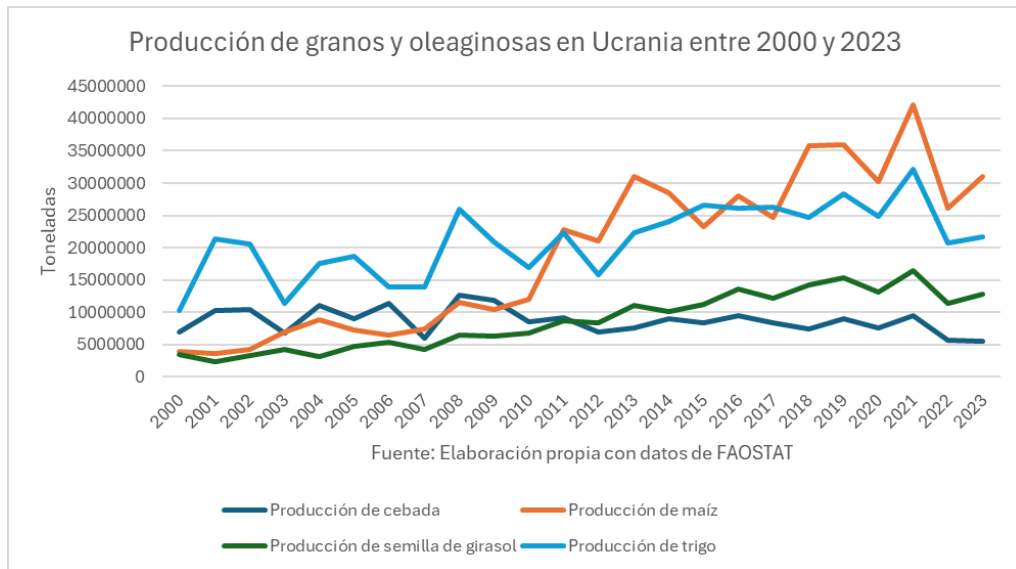
notoriamente, pasando de recaudar 3,33 mil millones de dólares en el año 2000 a 22,4 en 2023 a precios constantes del 2023, mientras que las importaciones aumentaron, pero no en esa magnitud, pasando de dispensar en ellas 2,41 mil millones de dólares en el año 2000 a 6,25 en 2023. Ucrania es un exportador neto de productos agroalimentarios, sin embargo, estas han sufrido un duro revés con el conflicto bélico en 2022.

Gráfico 21:



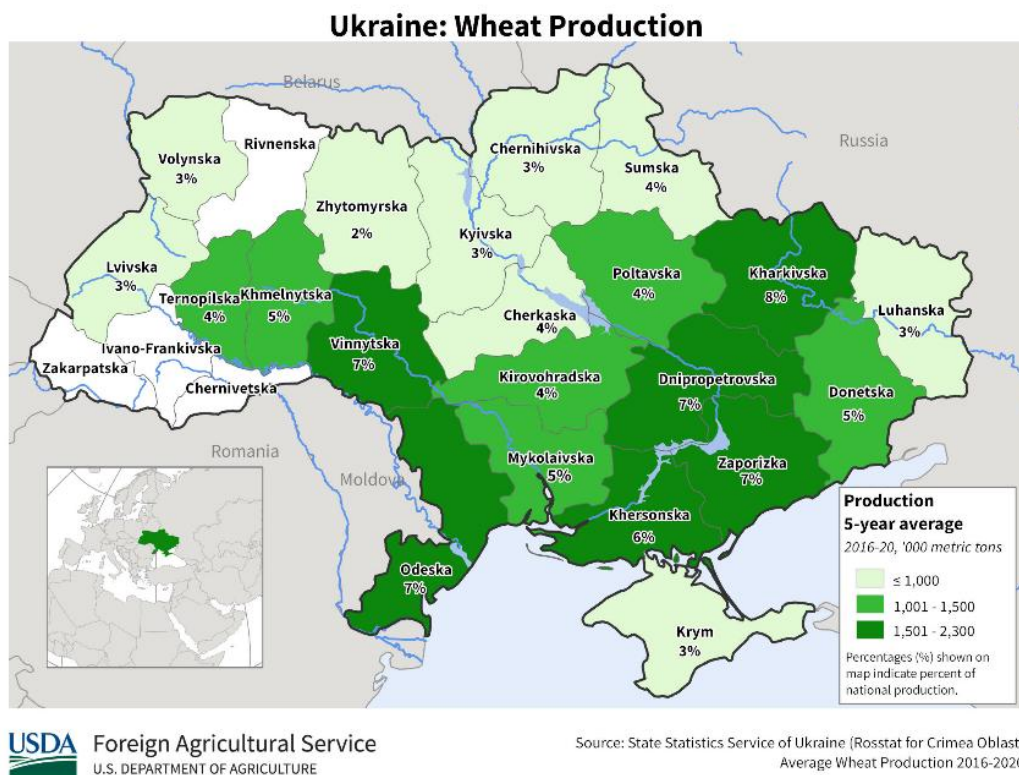
En general, la agricultura ucraniana ha mostrado un crecimiento notable y resistente. Desde 2000, el sector experimenta una recuperación tras casi una década de profunda recesión de transición. La producción de granos y oleaginosas ha aumentado a lo largo de estas dos décadas, situándose como un importante proveedor global. En 2018, generó una producción por encima del nivel de 1990, esto demuestra que la agricultura aporta cada vez más valor a la economía aumentando constantemente el valor añadido de sus productos. La agricultura ucraniana creció un 71% desde 2001, lo que demuestra una notable resistencia incluso en tiempos de precios más bajos de los productos básicos a nivel mundial y de profunda crisis (Kvasha, 2022). Sin embargo, la guerra ha afectado a la producción y a la exportación de granos y oleaginosas, dado que el frente de conflicto se encuentra donde las tierras más fértiles del país, esto lo podemos ver reflejado en los datos en una tendencia significativamente negativa respecto de años anteriores. En el siguiente gráfico (22) se puede observar la caída en la producción de todos los granos y del girasol para 2022. La mayoría de sus principales cultivos se encuentran en el este y sur del país, zonas donde transcurre el conflicto bélico.

Gráfico 22:



En el siguiente mapa vemos en cada uno de los óblast qué porcentaje de producción de trigo corresponde a cada uno de ellos, y a continuación veremos un mapa del territorio ocupado por Rusia para diciembre de 2023 que nos permitirá comprender por qué el conflicto afectó de tal manera a la producción y a la exportación de los granos, oleaginosas y subproductos provenientes de Ucrania.

Gráfico 23 (USDA, 2020):



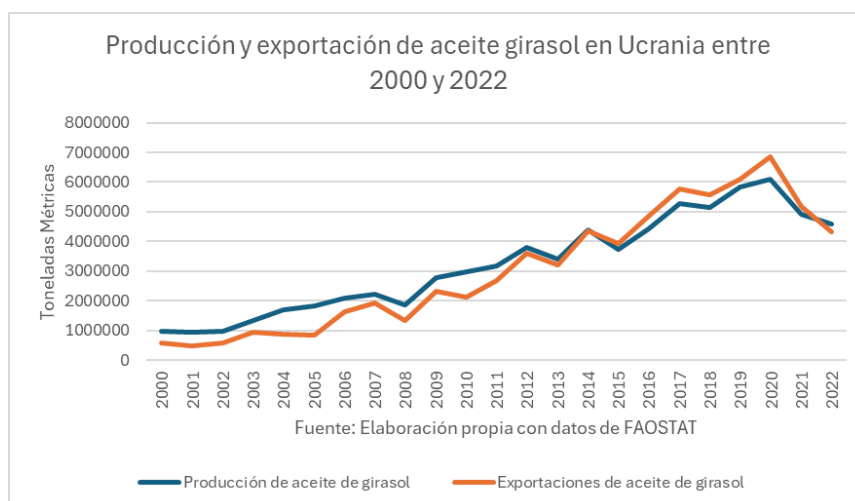
Contabilizando los óblast ocupados por Rusia, entre los cuales encontramos Lugansk, Donetsk, Jersón, Zaporíyia y Crimea, se contabilizan tierras que correspondían al 24% de la producción de trigo de Ucrania, según el promedio entre 2016 y 2020 el U.S. Department of Agriculture, lo que supone un duro golpe a la producción del país. En lo que corresponde a otros granos y oleaginosas, en lo que es la producción de girasol, que como vimos, este país es el principal exportador de aceite del mundo, corresponde el 19%, respecto de la cebada un 22% y, finalmente, si bien el cultivo del maíz se realiza en el centro y norte del país, y las tierras ocupadas suponen el 1% de la producción de este, no deja de ser el frente a defender por el ejército ucraniano por lo que su producción también se vio afectada (U.S. Department of Agriculture, 2020).

Gráfico 24:



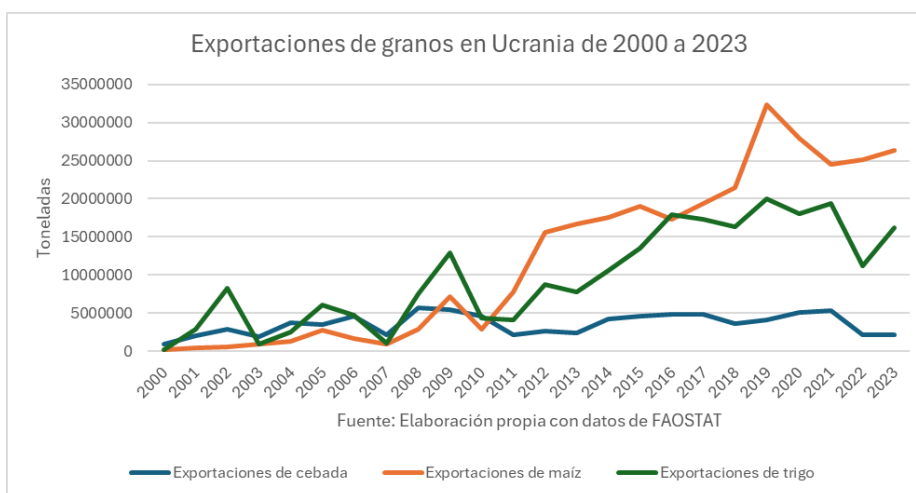
Entre las principales exportaciones ucranianas de productos agroalimentarios caben destacar el aceite de girasol, siendo el principal exportador a nivel mundial de este producto. Respecto del maíz, ocupaba para 2023 el tercer lugar. En lo que respecta al trigo, le correspondía al país la quinta posición a nivel mundial en exportaciones. Finalmente, la cebada con el octavo puesto a nivel global (FAOSTAT, 2025).

Gráfico 25:



Ucrania abastece a algunos de los mercados más grandes y dinámicos con sus productos agroalimentarios. Asia ha sido el principal mercado de sus productos, los principales socios en esta región son India, Turquía y China, y casi la mitad del aceite de girasol se suministra a la India. La UE es el segundo principal mercado, siendo los principales socios Países Bajos, España e Italia, mientras que el tercer mayor mercado es Medio Oriente y África del Norte, siendo los principales socios Egipto, Túnez y Marruecos.

Gráfico 26:



En lo que respecta a las exportaciones de productos agroalimentarios, desde principios de siglo no han parado de crecer, con años récord de exportaciones de aceite de girasol en 2020, de trigo y maíz en 2019, con el devenir de la pandemia y la guerra, las mismas se han resentido, sin embargo, estos productos muestran un repunte positivo en 2023. Estos datos nos permiten afirmar que Ucrania ocupa un rol vital en el mercado mundial de alimentos y para garantizar la seguridad alimentaria de muchos países del Sur Global en su rol de proveedor. Sin embargo, hay una lista de países que presentan una dependencia a los

alimentos provenientes de este país, resultando altamente vulnerables a disrupciones a las cadenas de suministros, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria en estos países.

Una vez iniciado el conflicto entre Rusia y Ucrania, la ONU asumió un rol protagonista para hallar soluciones frente a la ruptura de las cadenas de suministros, para que los granos y fertilizantes de estos dos países lleguen a los mercados mundiales, así como para estabilizar la tendencia creciente de los precios de los alimentos en todo el mundo y evitar la hambruna que afecta a tantas personas. En este sentido, en Julio del 2022 Rusia y Ucrania firmaron un acuerdo, la “Iniciativa de Granos del Mar Negro”, bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres y Recep Tayyip Erdoğan el presidente turco.

Este acuerdo permitió la exportación de millones de toneladas de grano ucraniano bloqueado en los puertos del Mar Negro, con el objetivo de aliviar la crisis alimentaria mundial. La iniciativa abría la vía para exportaciones de alimentos desde tres puertos ucranianos claves del Mar Negro: Odessa, Chernomorsk y Yuzhny. Se esperaba exportar unos cinco millones de toneladas al mes y que esto contribuya a reducir los elevados precios en los mercados internacionales. También se ha llegado a un acuerdo para facilitar el acceso sin trabas a los mercados mundiales de alimentos y fertilizantes procedentes de la Federación Rusa. Además de estabilizar los precios mundiales de los alimentos, el acuerdo alivió a los países en desarrollo que estaban a punto de la bancarrota y a las personas más vulnerables que se encuentran al borde de la hambruna, no podía haber una solución a esta crisis alimentaria sin garantizar el acceso mundial tanto a los productos alimenticios ucranianos como a los alimentos y fertilizantes rusos.

Gráfico 27:

Exportaciones oleaginosas, cereales y subproductos por puertos en el mundo Año 2023 

En toneladas

Puertos	Complejo Soja	Complejo Maíz	Complejo Trigo	Resto Cereales	Resto Oleaginosas	TOTAL
1° - New Orleans, LA - EE.UU.	34.576.866	23.695.896	3.338.526	1.779.721	9.102	63.400.113
2° - Porto De Santos, SP - BRA	40.196.779	21.342.641	1.699	368.142	369.803	62.279.064
3° - Gran Rosario, SF - ARG	21.755.333	17.614.596	1.645.675	746.444	651.471	42.413.519
4° - Belém, PA - BRA	20.570.437	17.596.421	26	264	24	38.167.173
5° - Vancouver, BC - CAN	1.043.300	-	14.597.400	2.100.700	9.247.700	26.989.100
6° - Porto De Paranagua, PR - BRA	21.922.679	4.235.768	103.357	17.431	54.697	26.333.932
7° - Odessa, ODS - UKR	1.770.722	16.187.181	5.512.093	669.674	1.473.136	25.612.806
8° - Kavkaz-Taman, KDS - RUS	29.300	1.777.927	18.991.100	2.463.242	296.227	23.557.796
9° - Novorossiysk, KDS - RUS	-	-	21.635.390	1.196.734	36.925	22.869.049
10° Columbia-Snake, OR - EE.UU.	7.632.278	3.555.853	9.638.595	472.993	2	21.299.721
11° Irf Sao Luis, MA - BRA	13.031.721	7.300.578	28	89	9	20.332.424
12° Porto De Rio Grande, RS - BRA	14.395.983	598.059	2.103.817	1.406.665	78	18.504.602
13° Salvador, BA - BRA	10.476.919	419.456	582	1.554	816	10.899.327
14° Porto De Sao Francisco Do Sul, SC - BRA	5.320.308	4.568.601	39	18.506	827	9.908.281
15° Perth-Fremantle-Kwinana, WA - AUS	-	-	5.859.138	2.200.320	1.048.369	9.107.827

Fuente: @BCRmercados. Elaborado en base a datos de Comercio Exterior de Brasil, Ministerio de Industria, Comercio Exterior y servicios de Brasil; FAS Global Agriculture Trade System Online. U.S. Census Bureau Trade Data, U.S. Customs District Data, Datos de Ministerio de Agricultura y Pesca de la Nación de Argentina; Canadian Grain Commission; Refinitiv; Australian Bureau of Statistics

Este acuerdo revestía suma importancia dado que, según la Bolsa de Comercio de Rosario, el puerto de Odessa² ocupaba la séptima posición en cuanto a volumen de exportaciones de oleaginosas, cereales y subproductos para 2023 (Rodríguez Zurro, et al, 2024). En el mismo sentido, resulta especialmente llamativo que tres de los diez principales puertos exportadores del mundo en 2023 estén ubicados en Ucrania y Rusia: además de Odessa, figuran Novorossiysk y Kavkaz-Taman, ambos en Rusia. Este dato confirma que el Mar Negro no es solo un espacio de conflicto geopolítico, sino también un eje central del comercio agrícola internacional.

Este acuerdo garantizaba la seguridad y el paso de los buques de carga a lo largo de un corredor hacia y desde los puertos ucranianos, el acuerdo también permitía a la armada rusa inspeccionar los barcos que entraban en el Mar Negro para asegurarse de que no transportaban armas.

Gráfico 28:



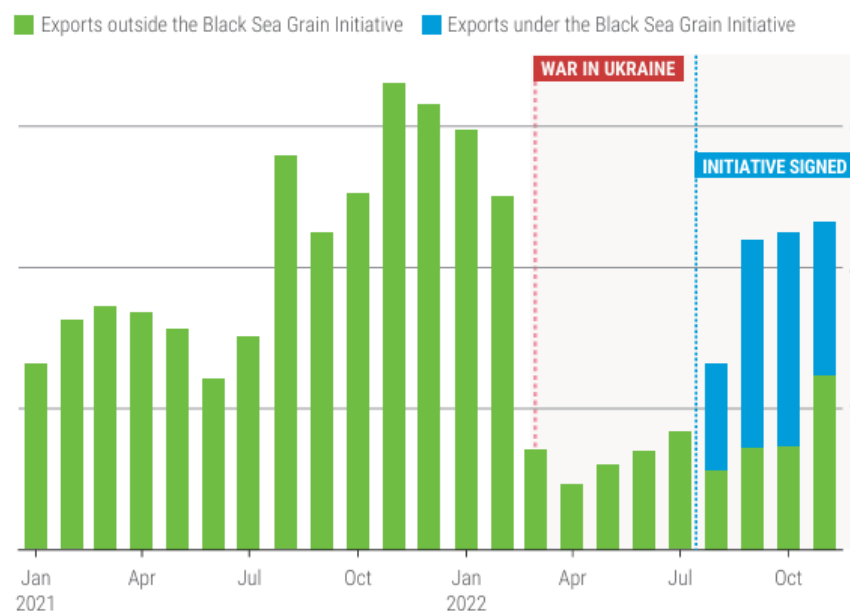
Sin embargo, un año después, para Julio de 2023 Rusia anunció que se retiraba inmediatamente del acuerdo para la exportación de granos a través del Mar Negro, dado que sus propias exportaciones de alimentos y fertilizantes se habían visto perjudicadas por las sanciones occidentales, por lo que Moscú ya no podría garantizar la seguridad de la

²El puerto de Odessa es el principal en exportación de productos agrícolas, este incluye a los otros dos puertos mencionados en el acuerdo, que se consideran puertos satélites, el de Chernomorsk y Yuzhny, que dada su cercanía son considerados una única región portuaria.

navegación. Al negociar el acuerdo, la ONU le prometió a Rusia que ayudaría a que el país euroasiático aumentara sus propias exportaciones de granos y fertilizantes. Si bien Occidente no había impuesto sanciones a los productos agrícolas rusos, Moscú alegaba que otras sanciones habían disuadido a empresas navieras, bancos internacionales y aseguradoras de negociar con sus productores. Este acuerdo llevó cierta estabilidad y tranquilidad a los mercados mundiales tanto desde el lado del abastecimiento de estos productos, como para detener el espiral ascendente de los precios de los alimentos, a su vez, permitió la exportación de más de 32 millones de toneladas de alimentos desde Ucrania y que los precios cayesen aproximadamente un 20% (BBC, 2023). En respuesta a la salida de Moscú del acuerdo, Kiev fue capaz de implementar un corredor seguro propio, que tuvo como principal vía de salida a los puertos fluviales (Reni, Izmail y Kiliya) ubicados sobre el Río Danubio, río que desemboca en el Mar Negro.

A partir de datos de la UNCTAD es posible observar el impacto de esta iniciativa y lo importante que resultó para recuperar un poco de previsibilidad e intentar normalizar el flujo de exportaciones de alimentos de Ucrania hacia los países dependientes. Más de la mitad de las exportaciones de granos ucranianos fueron apoyadas en la “Iniciativa de Granos del Mar Negro” desde su firma. En el siguiente gráfico (29) veremos las exportaciones de maíz, trigo y cebada ucraniana mensual con y sin la iniciativa expresada en millones de toneladas (UNCTAD, 2023).

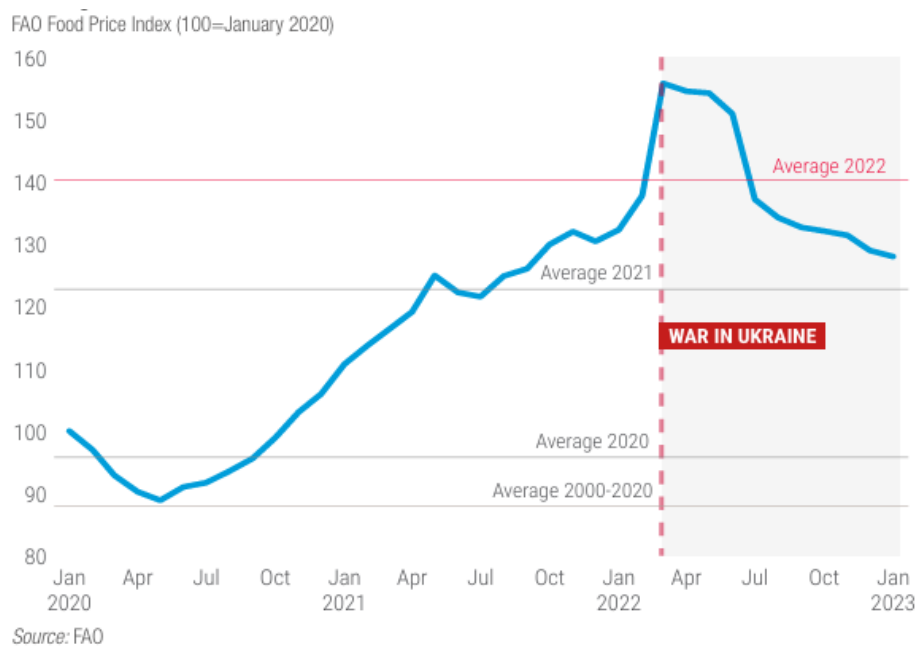
Gráfico 29:



Source: UNCTAD secretariat based on data from UN Comtrade and the Joint Coordination Centre until November 2022.

Lo mismo sucedió con los precios de los alimentos, la iniciativa ayudó a revertir el incremento de los mismos, lo cual visualizamos en el siguiente gráfico (30) (UNCTAD, 2023):

Gráfico 30:

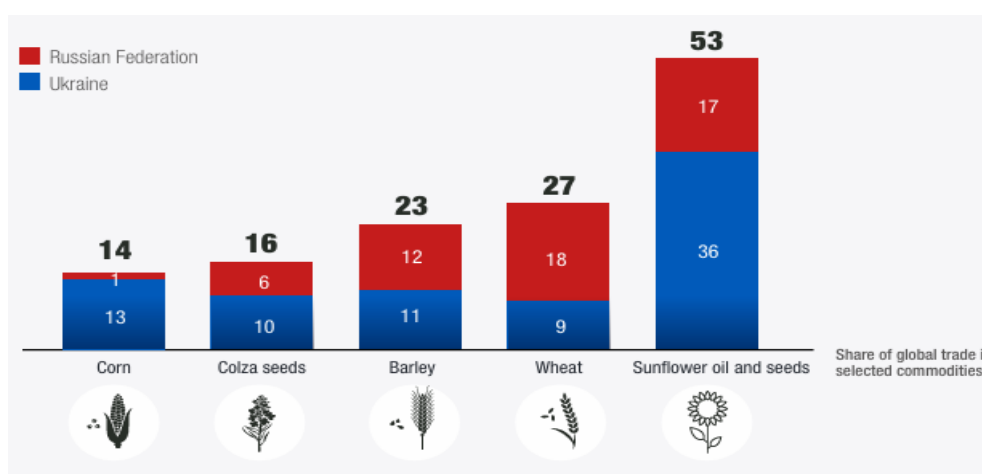


Como expusimos en este capítulo, a lo largo del siglo, ambos países han adquirido un rol protagónico como proveedores clave de productos agroalimentarios en el comercio internacional. Su participación en el mercado mundial es particularmente significativa en el caso de ciertos cultivos estratégicos como el trigo, el maíz, la cebada y el aceite de girasol. En lo que respecta al trigo previo al conflicto, en 2021, Rusia exportó aproximadamente el 14 % del total mundial, mientras que Ucrania aportó cerca de un 10–11 %. En conjunto, ambas naciones proveyeron aproximadamente una cuarta parte del trigo comercializado globalmente. Este dato cobra especial importancia si se considera que el trigo es uno de los cereales más consumidos a nivel mundial y representa una fuente principal de calorías para numerosas poblaciones del Sur Global. En el mercado del maíz, la participación conjunta también fue considerable: Kiev representó aproximadamente el 13 % de las exportaciones mundiales, consolidándose como uno de los principales exportadores, especialmente hacia países de África Septentrional, Medio Oriente y Asia. En tanto, la participación de Moscú fue más limitada pero igualmente significativa. En el caso de la cebada, ambos países también aparecen entre los principales proveedores mundiales, con una participación combinada cercana al 23 %. Sin embargo, el caso más notable es el del aceite de girasol: ambos países

controlaron alrededor del 60 % de las exportaciones mundiales en 2021, lo que revela un grado de concentración altísimo en este rubro específico (FAOSTAT, 2025).

Estos niveles de participación no solo evidencian la importancia de Rusia y Ucrania como proveedores globales de alimentos, sino también la elevada vulnerabilidad del sistema alimentario internacional frente a interrupciones en sus cadenas de suministro. La guerra iniciada en febrero de 2022 expuso esta fragilidad, afectando de manera inmediata los precios y la disponibilidad de alimentos esenciales, sobre todo en países altamente dependientes de estas importaciones.

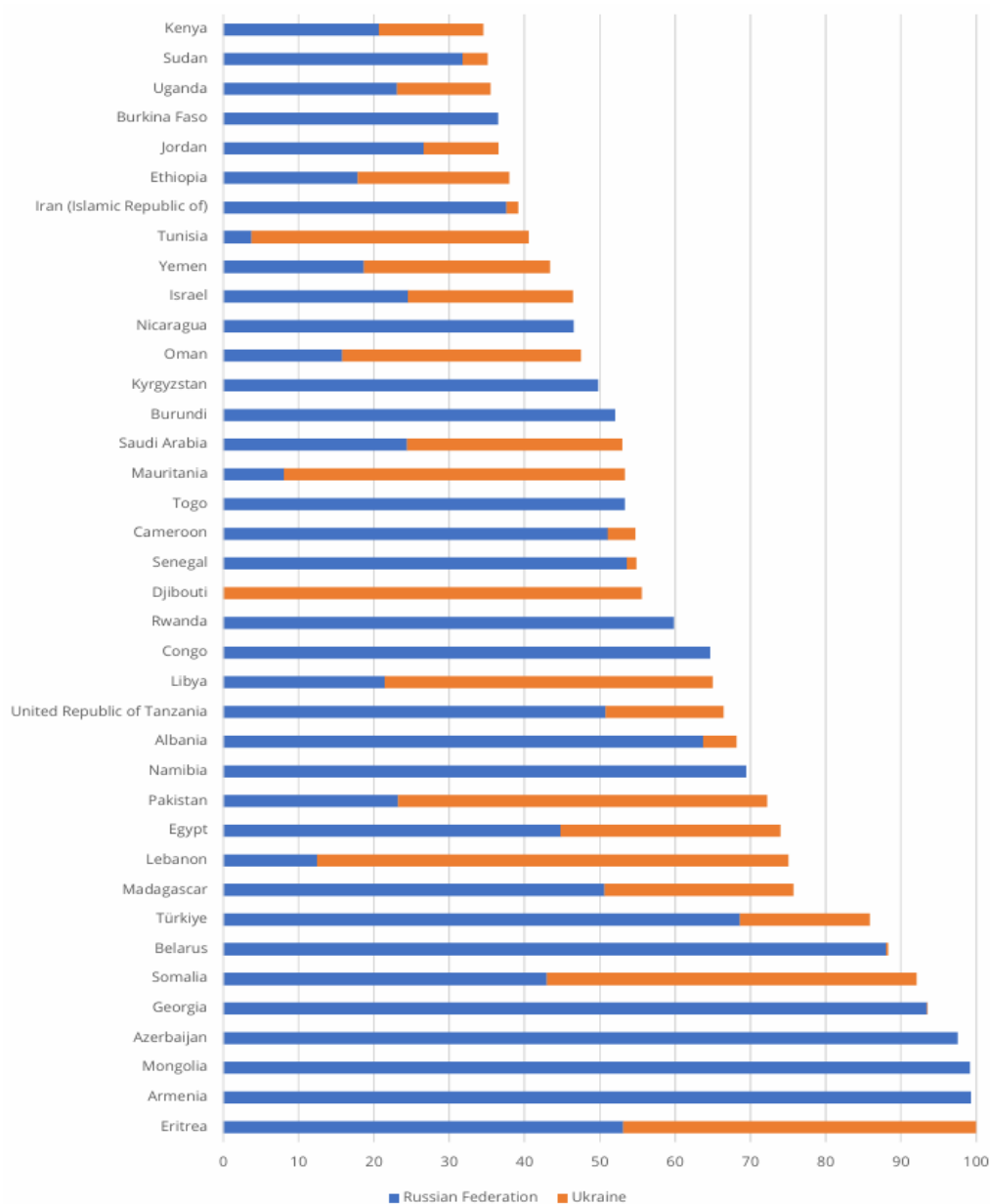
Participación en el mercado mundial de granos y oleaginosas de Rusia y Ucrania en 2020 (UNCTAD, 2022) (Gráfico 31):



Source: UNCTAD calculations, based on 2020 data from United Nations Comtrade Database.
 * Harmonized System codes are 1001 (wheat), 1003, (barley) 1005 (corn), 120510 (colza seeds) and 120600 and 151211 (sunflower seeds and oil).

A pesar del conflicto, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, para la cosecha 2022/23 Moscú y Kiev quedaron en tercer y cuarto puesto respectivamente en lo que respecta al ranking de exportadores de productos agrícolas, dejando en evidencia lo fundamentales que son ambos países para la garantizar la alimentación en muchos países del Sur Global (Rodríguez Zurro, et al, 2024). La concentración de tanta capacidad exportadora en un área de conflicto pone en evidencia una de las principales debilidades estructurales del sistema alimentario mundial: su alta dependencia de pocos actores y rutas comerciales.

Porcentaje de importaciones de trigo provenientes de Rusia y Ucrania en 2021:



Fuente: (FAO, 2022e) (Gráfico 32).

El gráfico 32 evidencia con claridad la alta dependencia que muchos países — especialmente del Sur Global— mantienen respecto del trigo proveniente de Rusia y Ucrania. En 2021, antes del estallido de la guerra, una proporción significativa de sus importaciones totales de trigo provenía casi exclusivamente de estos dos países. Ejemplos notables son Eritrea, que importaba prácticamente el 100% de su trigo desde ambos países, o Somalia, Turquía, República Democrática del Congo y Egipto, donde el abastecimiento desde estos dos países superaba holgadamente el 70% del total.

Esta dependencia implica una enorme vulnerabilidad estructural. Cuando se produjo la invasión de Ucrania, las cadenas de suministro globales de productos agrícolas, en particular del trigo, se vieron abruptamente interrumpidas. Los bloqueos en los puertos ucranianos del Mar Negro, las sanciones económicas impuestas a Rusia y la incertidumbre sobre los flujos comerciales generaron picos de precios y escasez de cereal en muchos de estos países importadores.

La situación demostró de forma contundente cómo los conflictos geopolíticos pueden transformar rápidamente una dependencia comercial en una amenaza directa a la seguridad alimentaria. Para países como Somalia, Eritrea, Líbano o Yemen, donde el trigo es un alimento básico y no existen suficientes alternativas de proveedores.

La importancia de Rusia y Ucrania en los mercados agroalimentarios globales no solo se refleja en su significativa participación en las exportaciones mundiales de trigo, maíz, cebada y aceite de girasol, sino también en su rol estratégico como proveedores del PMA. Este organismo tiene un papel crucial en la lucha contra el hambre, al abastecer con alimentos a millones de personas en contextos de emergencia y crisis prolongadas.

En 2021, el PMA adquirió un volumen récord de 4,4 millones de toneladas de alimentos, un aumento del 34 % respecto a 2020. Casi el 75 % de este volumen correspondió a cereales, fundamentales para las operaciones en regiones como África Subsahariana, Medio Oriente y Asia Central. Ese año, Ucrania suministró 880.000 toneladas (19,8 % del total) siendo el segundo principal proveedor y Rusia 246.000 toneladas (5,5 %) con el tercer lugar, consolidándose como dos de los principales países proveedores del PMA (PMA, 2022a).

Sin embargo, como vimos, tras la invasión rusa a Ucrania, el abastecimiento mundial de alimentos se vio gravemente afectado. El cierre de los puertos ucranianos del Mar Negro interrumpió el comercio internacional de granos, generando una crisis de precios y desabastecimiento. En respuesta a esta situación, se firmó el acuerdo del Mar Negro para la exportación de granos, el cual permitió reactivar las exportaciones agrícolas. Gracias a este acuerdo, el PMA pudo retomar las compras a Ucrania y mitigar los impactos de la crisis en sus programas humanitarios.

A pesar de la guerra, Ucrania continuó siendo un proveedor relevante para el PMA. En 2022, el organismo adquirió 643.189 toneladas de alimentos desde Ucrania, lo que representó el 15,2 % del total siendo el principal proveedor. Rusia, por su parte, aportó 104.757 toneladas, un 2,5 % del total, reflejando una caída respecto al año anterior, cayendo a un octavo lugar el ranking de principales proveedores (PMA, 2022b). En 2023, las adquisiciones desde Ucrania se mantuvieron significativas, con 418.018 toneladas,

equivalentes al 17 % del total comprado por el PMA, manteniéndose como principal proveedor por segundo año consecutivo (PMA, 2024a).

Esta evolución deja en evidencia la alta dependencia del PMA de estos dos países para sostener sus operaciones globales. En contextos donde millones de personas dependen diariamente de la asistencia alimentaria —como Somalia, Yemen, Sudán o Afganistán—, cualquier interrupción en las exportaciones desde Ucrania o Rusia puede tener consecuencias devastadoras. La guerra en Europa del Este, por tanto, no solo es un conflicto regional: también es una amenaza directa a la seguridad alimentaria global, especialmente para los países más pobres y vulnerables.

La guerra entre Rusia y Ucrania ha puesto en evidencia la profunda interconexión entre la geopolítica y la seguridad alimentaria global, al afectar directamente a dos de los principales exportadores de trigo, maíz, cebada y aceite de girasol del mundo. Ambos países desempeñan un papel estratégico en el abastecimiento de alimentos, especialmente hacia regiones del Sur Global y organismos como el PMA, lo que ha generado una alta dependencia de sus exportaciones. La interrupción de las cadenas logísticas, el cierre de puertos y las sanciones económicas desencadenaron una crisis de precios y escasez que reveló la vulnerabilidad estructural del sistema alimentario internacional. A pesar del conflicto, Ucrania logró mantener parte de su capacidad exportadora mediante rutas alternativas y acuerdos multilaterales como la Iniciativa de Granos del Mar Negro. Este escenario demuestra que garantizar la seguridad alimentaria global requiere no solo diversificar fuentes de abastecimiento, sino también fortalecer la cooperación internacional frente a riesgos geopolíticos que pueden transformarse rápidamente en crisis humanitarias.

El impacto de la guerra en Ucrania sobre la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente (2022–2024)

El estallido de la guerra en Ucrania en febrero de 2022 representó un punto de inflexión para el sistema agroalimentario internacional. La magnitud de las interrupciones generadas por el conflicto no solo evidenció la fragilidad de las cadenas globales de suministro, sino que también intensificó las vulnerabilidades estructurales preexistentes en múltiples regiones del mundo, en particular en América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente. Estas regiones, caracterizadas por niveles variables de dependencia externa en materia de alimentos, fertilizantes y combustibles, experimentaron impactos significativos en términos de disponibilidad, accesibilidad y estabilidad alimentaria.

Este capítulo tiene como fin abordar el tercer objetivo específico, analizar el impacto de la guerra en Ucrania en la problemática de seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente entre 2022 y 2024. A tal fin, se examinarán los principales canales de transmisión del shock —incluyendo la interrupción de las exportaciones de productos agrícolas esenciales, la volatilidad de los precios internacionales, la escasez de insumos productivos— así como las respuestas implementadas por los Estados y los organismos multilaterales. Para llevar adelante este capítulo utilizamos fuentes oficiales como la FAO, FAOSTAT, el BM y Human Rights Watch.

La selección de estas regiones responde a la relevancia de estas en el debate contemporáneo sobre seguridad alimentaria, así como a la diversidad de sus estructuras productivas, capacidades institucionales y marcos de políticas públicas. En este sentido, el análisis busca identificar las consecuencias del conflicto en Europa del Este en las regiones estudiadas.

3.1-Guerra en Ucrania: su impacto en la seguridad alimentaria

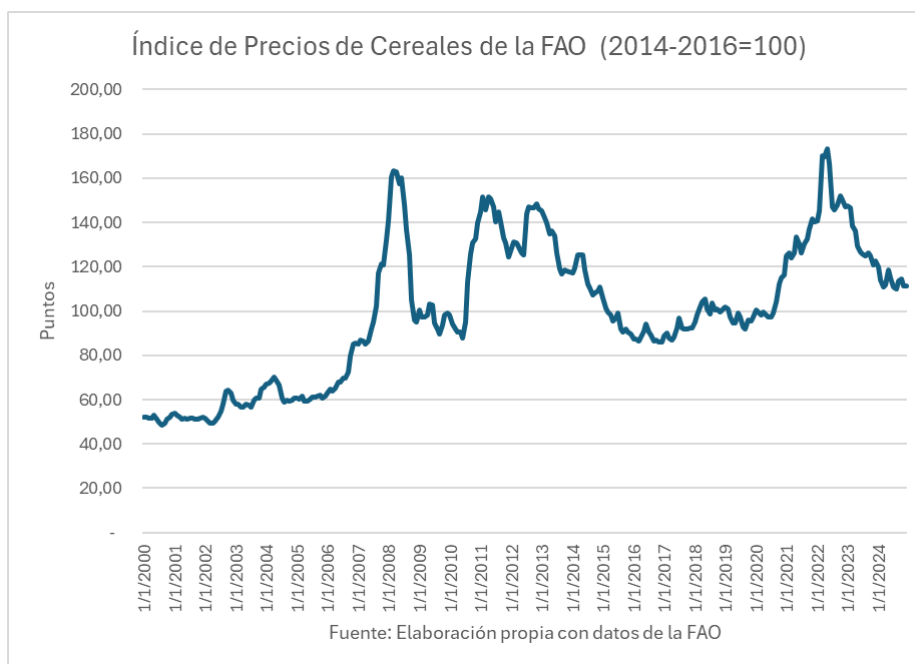
La guerra en Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022 se trata del mayor conflicto militar convencional en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Esta se dio en un contexto de alta incertidumbre a nivel global asociada a diversos factores: presiones inflacionarias y dificultad para mantener el estímulo fiscal; tensiones comerciales; aumento de los precios de

las materias primas y de los precios de los alimentos; secuelas del Covid-19 y las disrupciones en las cadenas de suministro, así como eventos extremos debido al cambio climático.

Como se analizó en el capítulo anterior, Rusia y Ucrania ocupan un rol estratégico en los mercados agroalimentarios globales. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario para la campaña 2022/2023, ambos países se posicionaron en el tercer y cuarto puesto, respectivamente, dentro del ranking de exportadores de productos agrícolas (Rodríguez Zurro, et al, 2024). Esta posición no solo refleja su volumen de producción, sino su peso específico en el comercio internacional de cultivos clave. En conjunto, ambos países representaron más del 20 % de las exportaciones mundiales de trigo, siendo Moscú el principal exportador a nivel mundial, más del 10 % de maíz, más del 20 % de cebada y el 75% de las exportaciones de aceite de girasol en 2021. Esta concentración de la oferta global implica que cualquier disrupción en sus cadenas productivas o logísticas —como las provocadas por la guerra— tiene efectos inmediatos y significativos sobre los precios internacionales de estas materias primas.

El conflicto generó una fuerte disrupción en la capacidad exportadora de ambos países, especialmente a través del Mar Negro, dada la reducción de la producción agraria en Ucrania por la guerra, la destrucción de infraestructura ferroviaria y portuaria y las restricciones a las exportaciones de granos de Rusia, lo cual redujo la oferta disponible en los mercados internacionales e incrementó la volatilidad de precios. Según el índice de precios de la FAO, en marzo de 2022 el valor global de los alimentos alcanzó un récord histórico, con un aumento del 12,6 % respecto al mes anterior. En particular, el subíndice de cereales subió un 17,1 % en ese mismo mes, impulsado principalmente por el alza en los precios del trigo y el maíz. Este escenario encareció los costos de importación para numerosos países del Sur Global, incrementando las dificultades para acceder a alimentos básicos y profundizando la inseguridad alimentaria preexistente.

Gráfico 33:



El gráfico 33 del Índice de Precios de Cereales de la FAO permite observar el impacto que la guerra en Ucrania tuvo sobre los precios internacionales de los cereales. En los primeros meses de 2022, tras el estallido del conflicto bélico, el índice experimentó un repunte abrupto que lo llevó a superar los 160 puntos, marcando uno de los valores más altos de toda la serie, comparable únicamente con los picos de la crisis alimentaria de 2008 y el ciclo alcista 2010–2012.

Este comportamiento puede atribuirse a la fuerte disrupción del comercio agrícola derivada de la invasión de Ucrania y a que ambos países enfrentaron severas restricciones para exportar a través del Mar Negro. La incertidumbre geopolítica, junto con las limitaciones logísticas, las sanciones económicas y la especulación financiera, acentuaron la presión alcista sobre los precios internacionales, particularmente en los mercados de trigo, maíz y cebada.

Sin embargo, a partir de la segunda mitad de 2022, el índice comienza a descender de forma progresiva, aunque se mantiene por encima del promedio histórico. Esta baja responde a varios factores, entre ellos, la reapertura parcial del comercio mediante el acuerdo del corredor de granos del Mar Negro de julio de 2022.

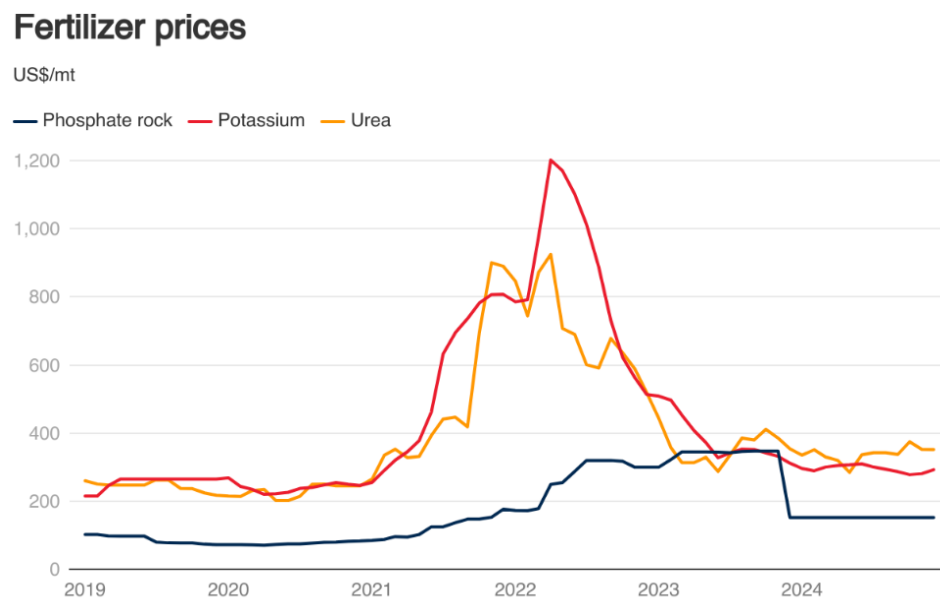
Durante 2023 y comienzos de 2024, el índice continúa su tendencia descendente, aunque estabilizándose en niveles todavía superiores a los del período pre-COVID. Este patrón refleja la persistencia de ciertas tensiones estructurales (como la volatilidad de los

precios de la energía y la fragilidad logística), al tiempo que sugiere una normalización parcial del mercado internacional de cereales.

En perspectiva, el pico de 2022 no solo reactivó preocupaciones sobre la seguridad alimentaria global, sino que evidenció cuán vulnerable sigue siendo el sistema agroalimentario mundial a conflictos geopolíticos. Para regiones importadoras netas de alimentos, el impacto de este shock externo fue especialmente significativo, tanto en términos de acceso económico a los alimentos como en el aumento de los costos de producción interna, dada la dependencia de insumos importados como los fertilizantes.

En lo que respecta a los fertilizantes nitrogenados, fósforo y potasio, como vimos en el capítulo anterior, Rusia y su aliado Bielorrusia representaban conjuntamente alrededor del 20% de las exportaciones globales de fertilizantes, y más de un tercio del comercio mundial de potasa, un nutriente esencial en la producción agrícola. La imposición de sanciones económicas tras la invasión a Ucrania ha puesto en jaque el abastecimiento mundial de fertilizantes. Estas restricciones no solo han limitado la disponibilidad, sino que también han disparado los precios a niveles casi récord, con tendencias que podrían mantenerse en el mediano plazo (USDA, 2022).

Gráfico 34 (Baffes et al, 2025):



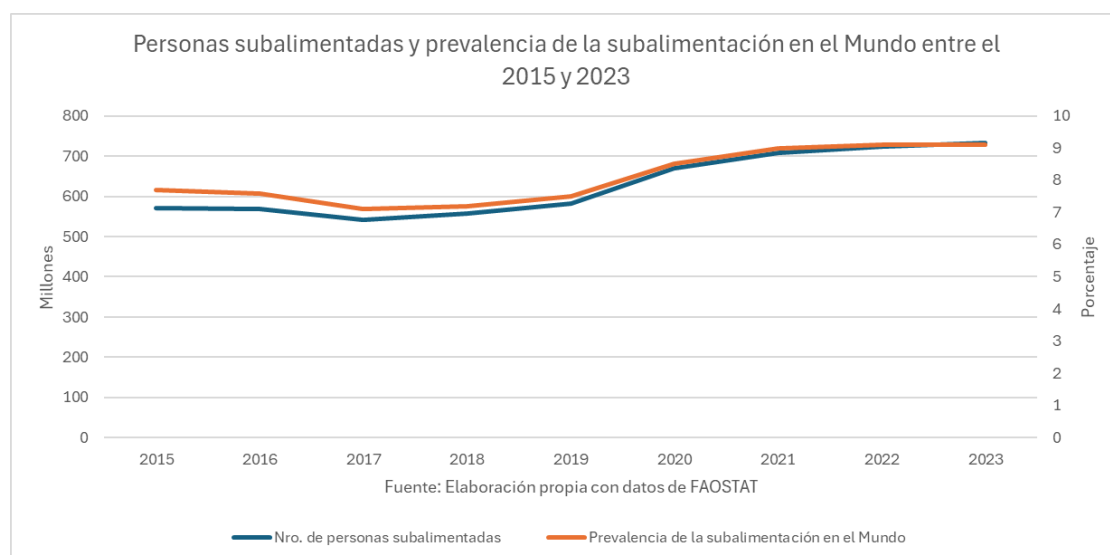
Note: mt = metric ton. Last observation is December 2024.
Source: Bloomberg; World Bank.

Este incremento ha tenido un impacto especialmente severo en las regiones con una alta dependencia de las importaciones y una limitada capacidad fiscal para subsidiar insumos agrícolas. África Subsahariana y América Central se cuentan entre los más afectados, dado que sus sistemas agrícolas ya enfrentaban desafíos estructurales relacionados con bajos

rendimientos y altos costos de producción. La abrupta escalada en los precios del potasio y la urea, evidenciada a partir de 2021 y acentuada en 2022 según el gráfico 34, exacerbó los costos para los pequeños productores, comprometiendo tanto la productividad como la seguridad alimentaria.

El conflicto representó un punto de inflexión en la tendencia global de la seguridad alimentaria. Luego de una lenta pero sostenida mejora en los indicadores de subalimentación entre 2015 y 2018, el escenario internacional comenzó a deteriorarse desde 2019, pero con un severo aumento en 2020 como resultado del impacto económico de la pandemia de COVID-19, y luego debido a las interrupciones provocadas por el conflicto en Europa del Este.

Gráfico 35:



Según datos de la FAO, entre 2021 y 2022 el número de personas subalimentadas a nivel mundial se incrementó en más de 15 millones, alcanzando los de 724 millones en 2022 y para 2023 vemos un aumento de otros 10 millones alcanzando las 733. De manera paralela, la prevalencia de la subalimentación aumentó del 8,6% en 2021 a un 9,1% en 2023, virviendo los avances alcanzados durante la segunda mitad de la década de 2010.

Este deterioro se explica en gran parte por el alza significativa de los precios internacionales de los alimentos básicos, impulsado por las restricciones al comercio y la especulación financiera tras la invasión rusa a Ucrania. Dado que ambos países son actores clave en el mercado global de trigo, maíz, cebada y aceites vegetales, las interrupciones en sus exportaciones tuvieron un efecto dominó sobre el abastecimiento global, afectando especialmente a los países más dependientes de importaciones, que mencionamos en el capítulo anterior, y con menor margen fiscal para mitigar los efectos del encarecimiento de los alimentos.

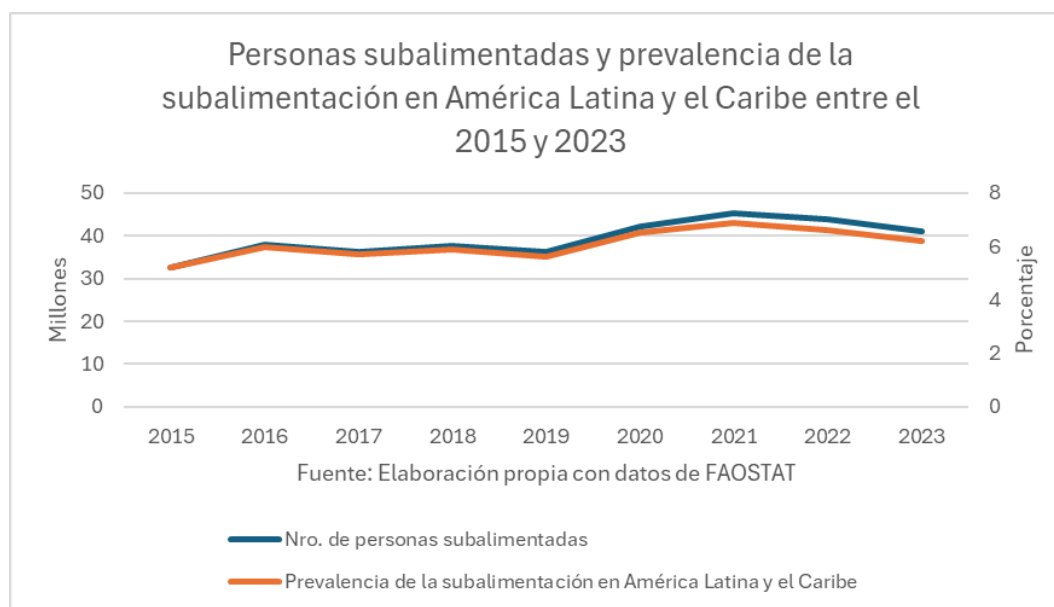
Así, el conflicto armado no sólo agravó las crisis humanitarias en las regiones directamente afectadas, sino que profundizó la inseguridad alimentaria en contextos ya vulnerables, y comprometió las metas globales de erradicación del hambre establecidas en la Agenda 2030.

Si bien el incremento del número de personas subalimentadas entre 2022 y 2023 fue relativamente moderado en términos absolutos —unos 10 millones, según datos de la FAO—, esto no debe interpretarse como un impacto leve del conflicto en la seguridad alimentaria global. Por el contrario, este aumento se produjo en un contexto ya altamente deteriorado tras la pandemia de COVID-19, que había sumado más de 120 millones de personas subalimentadas entre 2019 y 2021. Además, el efecto inmediato de la guerra fue parcialmente contenido por mecanismos de respuesta internacional, como el acuerdo del corredor de granos del Mar Negro y programas de asistencia humanitaria. En ese sentido, el impacto de la guerra en Ucrania fue significativo y estructural, ya que consolidó una tendencia de deterioro en la seguridad alimentaria que comenzó con la pandemia.

3.2-América Latina y el Caribe: efectos diferenciados y respuestas políticas disimiles

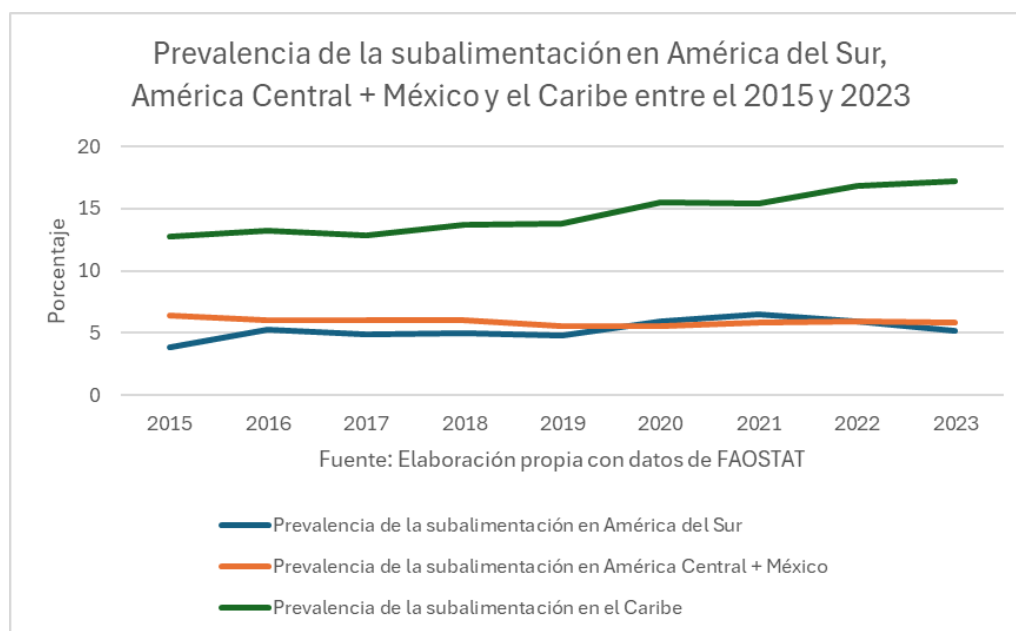
En América Latina y el Caribe, si bien los dos años de aumento de la subalimentación a raíz de la pandemia de la COVID-19 reflejaron la tendencia mundial, la recuperación ha sido considerablemente más sólida. Tras pasar del 5,6 % en 2019 al 6,9 % en 2021, la prevalencia de la subalimentación descendió dos años consecutivos hasta llegar al 6,2 % en 2023, descenso que equivale a 4,3 millones de personas en dos años, sobre todo como consecuencia de las mejoras observadas en América del Sur. El progreso es alentador, aunque la prevalencia de la subalimentación sigue muy por encima de los niveles anteriores a la pandemia (FAO, 2024).

Gráfico 36:



Al mismo tiempo, se observa una disparidad notable en los progresos correspondientes al ámbito subregional, ya que en el Caribe el hambre afecta a una proporción de la población mucho mayor que además va en aumento. La prevalencia de la subalimentación en el Caribe fue más de tres veces superior a la de América Latina en 2023, y se registró un acusado aumento del 15,4 % en 2021 al 17,2 % en 2023. Estas cifras contrastan con la tendencia registrada en América central, donde la prevalencia de la subalimentación apenas aumentó del 5,6 % en 2019 al 5,9 % en 2022, tras lo cual se observó un leve descenso en 2023. Donde más se ha avanzado ha sido en América del Sur, donde la prevalencia de la subalimentación se redujo dos años consecutivos en un total de 1,3 puntos porcentuales hasta situarse en el 5,2 % en 2023 tras haberse disparado del 4,8 % en 2019 al 6,5 % en 2021 a raíz de la pandemia. Ello supone que el número de personas que padecieron hambre en América del Sur en 2023 se redujo en 5,4 millones con respecto a 2021 (FAO, 2024).

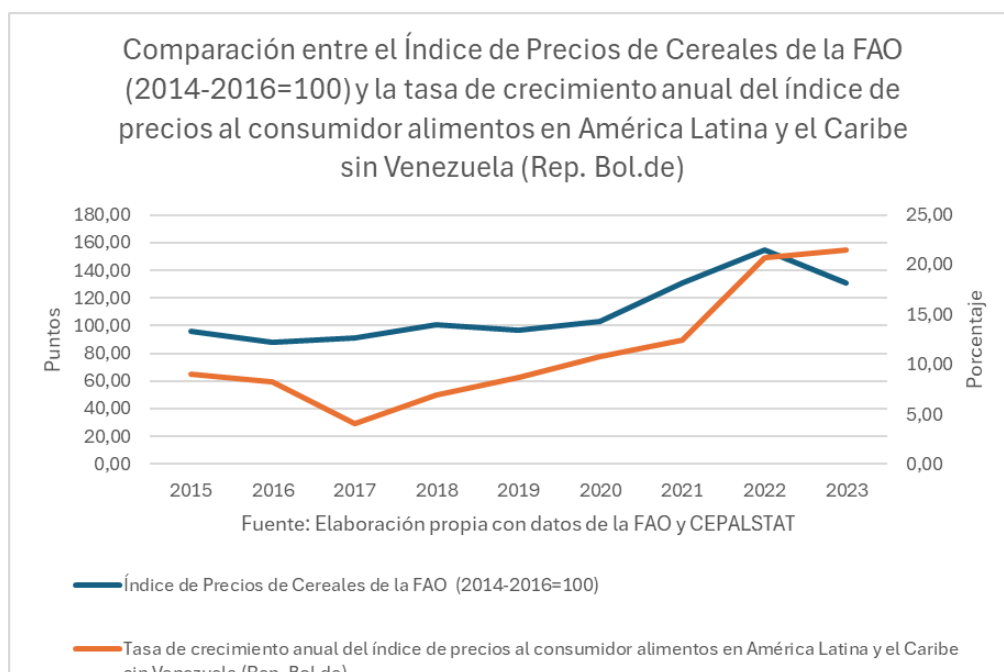
Gráfico 37:



El caso más emblemático es el de Haití, donde la situación humanitaria se agravó notablemente, donde casi 5 millones de personas, cifra que constituye la mitad de la población, hicieron frente a niveles de crisis de inseguridad alimentaria aguda en 2023 (FAO, 2024). La alta dependencia de este país de las importaciones de trigo, aceite y fertilizantes productos fuertemente afectados por las disrupciones en las exportaciones rusas y ucranianas, sumada a su limitada capacidad fiscal para intervenir con políticas de contención, profundizó la crisis alimentaria preexistente. En menor medida, otros países del Caribe insular también enfrentaron dificultades similares, aunque con impactos más acotados gracias a sus vínculos comerciales diversificados y a redes de asistencia social. En conjunto, estos casos demuestran que, a pesar de la mejora regional, el conflicto en Europa del Este tuvo efectos desiguales, afectando especialmente a los países con menor autosuficiencia alimentaria y mayor vulnerabilidad externa.

El gráfico 38 muestra una comparación entre el Índice de Precios de Cereales de la FAO (base 2014–2016 = 100) y la tasa de crecimiento anual del índice de precios al consumidor de alimentos en América Latina y el Caribe sin Venezuela, en el período comprendido entre 2015 y 2023. A partir del análisis se puede observar con claridad la correlación entre los precios internacionales de los cereales y la inflación alimentaria regional. Cabe mencionar que no se trata de una equivalencia directa, sino de una comparación para mostrar la tendencia correlacionada entre el aumento del precio internacional de cereales y el impacto sobre la inflación alimentaria local.

Gráfico 38:



Durante los años previos a la pandemia y al conflicto en Europa del Este, ambos indicadores presentaban una evolución moderada. Sin embargo, a partir de 2020 y particularmente en 2021 y 2022, se evidencia un marcado incremento del índice de precios de cereales, que alcanza su punto máximo en 2022, coincidiendo con el estallido de la guerra en Ucrania. Este conflicto generó fuertes disrupciones en los mercados internacionales, especialmente en los precios de los cereales y fertilizantes. El impacto de este aumento global se refleja directamente en la inflación alimentaria interna de los países de América Latina y el Caribe. En el mismo período en el que los precios de los cereales se disparan, también lo hace la tasa de crecimiento anual del IPC de alimentos regional, que alcanza niveles récord en 2022.

Esta relación evidencia la alta dependencia de los países de la región respecto a los mercados internacionales de insumos alimentarios y la vulnerabilidad de sus sistemas alimentarios ante choques externos, como conflictos geopolíticos. El gráfico ilustra cómo los aumentos de precios a nivel global pueden trasladarse rápidamente a los precios internos, afectando principalmente a los hogares más vulnerables, que destinan una proporción significativa de sus ingresos a la compra de alimentos.

En síntesis, el gráfico 38 permite visualizar cómo el conflicto en Ucrania ha tenido repercusiones concretas y directas sobre la seguridad alimentaria regional, no solo por el encarecimiento de los cereales importados, sino también por su efecto amplificador sobre la inflación alimentaria en América Latina y el Caribe.

Algunos países de la región formularon iniciativas para palear la inflación alimentaria, en Argentina, el gobierno lanzó el programa “Precios Justos”, un acuerdo voluntario con empresas y supermercados para congelar por 120 días los precios de más de 1.700 productos básicos (alimentos, bebidas, higiene y limpieza) (Ministerio de Economía, 2022). Esta iniciativa buscó dar previsibilidad y frenar la escalada de precios en alimentos, aunque se reconoce que la guerra en Ucrania no fue la única causa de la inflación en el país, ya que factores estructurales como la emisión monetaria, la falta de reservas y los desequilibrios fiscales también influyeron.

En Perú, el gobierno impulsó el Bono Alimentario 2022, una transferencia monetaria directa de 300 soles, dirigida a personas de bajos ingresos y situación vulnerable, afectadas por el aumento en los precios de la canasta básica. Con un presupuesto de S/ 2.000 millones, el bono fue diseñado para llegar en dos etapas a más de 1.5 millones de ciudadanos (Infobae, 2022b). Esta política tuvo como fin mitigar los efectos inmediatos del alza de precios sin necesidad de medidas estructurales a largo plazo.

En Chile, el gobierno creó el Bolsillo Familiar Electrónico, una ayuda económica mensual de 13.500 pesos chilenos destinada exclusivamente a la compra de alimentos. Esta transferencia directa reemplazó al Aporte Canasta Básica de Alimentos y fue dirigida automáticamente a familias beneficiarias de programas sociales como la Asignación Familiar, el Subsidio Familiar o el subsistema Chile Solidario (Hermosilla, 2023).

Estas medidas reflejan una estrategia común en América Latina basada en controles de precios y transferencias directas para amortiguar el impacto del aumento de precios en alimentos. Si bien las causas de la inflación son diversas y van más allá del conflicto en Europa del Este, la urgencia del contexto obligó a los gobiernos a implementar respuestas rápidas y focalizadas, especialmente para proteger a los sectores más vulnerables.

Como ya mencionamos, la guerra en Ucrania ha generado consecuencias significativas para los mercados agrícolas globales, especialmente en lo referente a los fertilizantes nitrogenados, fósforo y potasio. América Latina y el Caribe —y dentro de esta región, particularmente Brasil y México— se encuentran entre los países más afectados por la disrupción en el suministro global de estos insumos, dada su alta dependencia de las importaciones, muchas de ellas provenientes de Rusia y Bielorrusia, provocando un aumento sustancial en los costos de producción.

Esto podría tener efectos negativos para la producción agrícola y los precios de los alimentos en América Latina y el Caribe. La región importa cerca del 85% de los fertilizantes utilizados, y Rusia es un importante proveedor de este insumo agrícola, ya que representa el

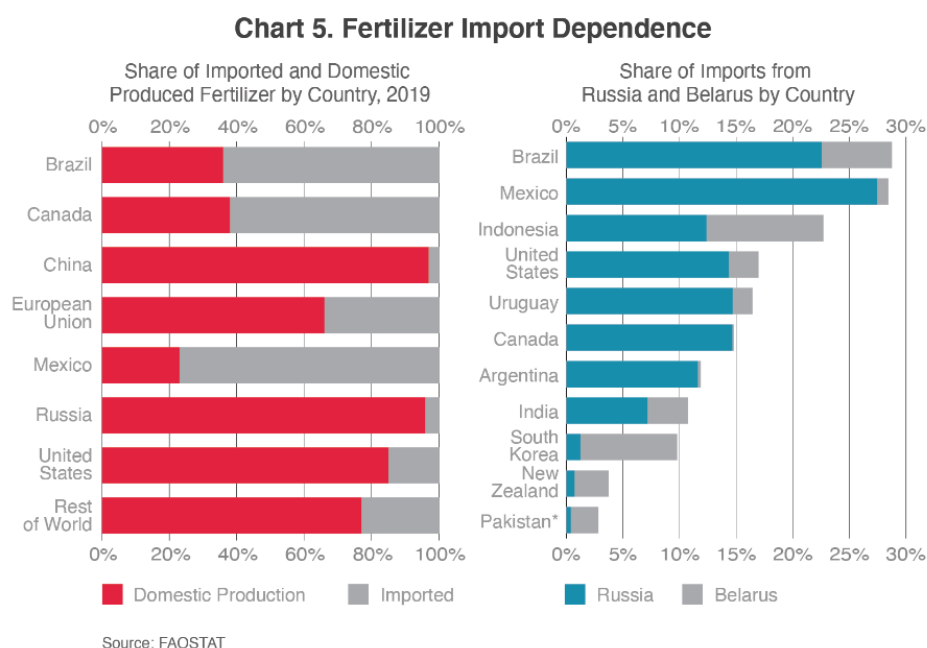
88% de las importaciones de fertilizantes a base de nitrato y fosfato y el 36% de las importaciones de fertilizantes a base de nitrato de fósforo y potasio. Los fertilizantes rusos representan entre el 10 y el 20% de las importaciones totales de fertilizantes en El Salvador, Nicaragua y Uruguay; entre el 20 y el 30% en Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá y Surinam; entre el 30 y el 50% en Ecuador y Perú; y más del 50% en Honduras (FAO, 2022d).

En este contexto, Brasil ha sido particularmente vulnerable. Era el segundo mayor consumidor mundial de fertilizantes por hectárea —246 kg/ha en 2022, casi el doble que Estados Unidos—, y dependía en más del 85% de las importaciones para cubrir su demanda interna. Rusia representaba una fuente clave de potasio y fertilizantes nitrogenados para el agro brasileño. En el primer trimestre de 2022, Brasil había experimentado una caída del 15% en las importaciones de fertilizantes, lo que afectó negativamente la siembra de su segunda cosecha de maíz. La incertidumbre sobre la continuidad del suministro, combinada con los altos precios, ha obligado a los productores a replantear sus decisiones agronómicas: reducción de superficies sembradas, modificación en las proporciones de fertilizantes aplicados, o incluso el cambio hacia cultivos menos exigentes en nutrientes, como la soja (USDA, 2022).

Ante esta situación, el gobierno brasileño lanzó en 2022 el Plan Nacional de Fertilizantes (PNF) 2022-2050, con el ambicioso objetivo de elevar la producción nacional de fertilizantes del 15 % (nivel registrado en 2022) al 55 % para el año 2050. Este plan también buscaba atraer inversiones extranjeras para fortalecer tanto el sector de fertilizantes como el de productos fitosanitarios (Targos, 2024).

México, aunque con una menor superficie agrícola que Brasil, también mostraba una alta dependencia de los fertilizantes importados, con más del 60% del total proveniente del extranjero. Alrededor del 25% de estas importaciones provenían de Rusia y Bielorrusia, lo que deja al país en una posición delicada ante las restricciones comerciales. México aplica una parte importante de sus fertilizantes en forma de amoníaco anhidro —11% del total—, y buena parte de este insumo dependía de cadenas de suministro externas. Con la volatilidad de los precios y la reducción de oferta global, los agricultores mexicanos enfrentan presiones crecientes en sus márgenes de rentabilidad y mayores riesgos para la seguridad alimentaria interna (USDA, 2022).

Gráfico 39:



A nivel estructural, la región de América Latina y el Caribe enfrenta una situación común: escasa capacidad de producción local de fertilizantes, alta concentración de proveedores en el mercado internacional (con Rusia, Bielorrusia, China y Canadá como actores dominantes), y cadenas logísticas todavía afectadas por las secuelas de la pandemia. La situación se agrava debido a que muchos de los minerales esenciales, como el potasio y el fósforo, no están disponibles de forma significativa en los suelos de estos países, lo que limita cualquier posibilidad de autosuficiencia a corto plazo.

El aumento en los precios del gas natural, clave en la producción de fertilizantes nitrogenados, ha sido otro factor determinante. Las alzas de este insumo han encarecido la producción en Europa y otras regiones, reduciendo su competitividad frente a los productores tradicionales como Rusia. Sin alternativas viables a corto plazo para diversificar fuentes de suministro, países como Brasil y México se ven obligados a continuar comprando fertilizantes a precios más elevados o a reducir su uso, con el consiguiente impacto en la productividad agrícola.

Sin embargo, después de haber alcanzado niveles récord en 2022, los precios de los fertilizantes han mostrado una tendencia sostenida a la baja. En el segundo trimestre de 2024, el índice de precios de fertilizantes del BM se mantuvo estable tras una caída del 20 % en el primer trimestre. A nivel interanual, los precios han descendido un 24 %, impulsados principalmente por fuertes reducciones en los precios de la roca fosfórica (-56 %) y el potasio (-17 %) (Baffes et al, 2025). Esta caída refleja una mejora en las perspectivas de producción

mundial, favorecida por la reducción de los costos de los insumos, como el gas natural y el azufre. Aunque estos insumos siguen siendo más caros que los promedios de 2015-2019, sus precios han disminuido significativamente desde los picos de 2022-2023, contribuyendo a aliviar las presiones sobre los costos de producción (Baffes et al, 2025).

La asequibilidad de los fertilizantes también ha mejorado. El índice que mide la relación entre los precios de los fertilizantes y los alimentos ha vuelto a su nivel promedio prepandemia (2015-2019), después de haberse duplicado durante la crisis de 2022. No obstante, los precios de los fertilizantes continúan por encima de los niveles anteriores a 2020, debido a la fuerte demanda persistente, restricciones a la exportación (especialmente de China) y sanciones en países clave como Bielorrusia (Baffes et al, 2025).

En conclusión, la guerra en Ucrania ha expuesto las vulnerabilidades del sistema agroalimentario mundial, con repercusiones profundas en América Latina y el Caribe. El caso de Brasil y México ilustra cómo una interrupción en el suministro de fertilizantes puede traducirse rápidamente en aumentos de precios, menores rendimientos agrícolas y amenazas a la seguridad alimentaria.

Como vimos, el conflicto generó un shock global en los precios de los alimentos, fertilizantes y combustibles, que golpeó especialmente a las economías emergentes. América Latina y el Caribe, con altos niveles de desigualdad y dependencia de insumos importados, respondió con un conjunto variado de medidas de emergencia, tanto a nivel nacional como multilateral, con grados de efectividad y sostenibilidad diversos.

Entre las principales medidas encontramos los subsidios a insumos agrícolas y combustibles, en vistas a amortiguar el alza de los costos de producción. En el caso de Brasil fortaleció su “Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar”, con lo que buscaba estimular la generación de ingresos y mejorar el uso de la mano de obra familiar, a través de financiación de actividades y servicios rurales agropecuarios y no agropecuarios en establecimientos rurales, y a través del “Plan Safra 2022/2023” el cual buscaba apoyar la producción agropecuaria nacional, este plan destina anualmente recursos para financiamiento y la inversión en el sector.

En el caso de Argentina, gracias a la fertilidad de su suelo, el país representa el 1% del consumo mundial de fertilizantes, pero el aumento de la producción de los últimos años se derivó en gran medida del mayor uso de estos, que en 2021 llegó a 5,7 millones de toneladas, importando un 65%, siendo Rusia uno de los principales proveedores, particularmente en el segmento de fertilizantes nitrogenados como la urea, cuya producción depende del gas natural, del que Moscú es el mayor exportador mundial (Serrichio, 2022).

Con el aumento en el precio de estos insumos y la interrupción de las cadenas de suministro por el conflicto en Ucrania, proyecciones realizadas por la Bolsa de Comercio de Rosario indicaban pérdidas de más de USD 1.000 millones en exportaciones de maíz producto del menor uso de fertilizantes en la próxima siembra, en un contexto de escasez de dólares, bajas reservas internacionales en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), frente a este panorama, el gobierno nacional tomó medidas de emergencia (Infobae, 2022a). En particular, lanzó el Programa de Aporte de Nutrientes 2023, que destinó USD 30 millones para la compra de urea, beneficiando a hasta 77.000 pequeños y medianos productores de trigo y maíz que hayan sembrado hasta 150 hectáreas, focalizándose en zonas en emergencia agropecuaria. Además, el BCRA flexibilizó el acceso a dólares para importar fertilizantes al reducir el plazo de financiamiento de 180 a 60 días y permitir el uso de líneas de prefinanciación de exportaciones, buscando facilitar las compras externas esenciales sin afectar tanto las reservas (Ministerio de Economía, 2023).

En el caso de México, su Secretaría de Agricultura inició en Oaxaca el programa Fertilizantes para el Bienestar, beneficiando a más de 172 mil agricultores de zonas marginadas con fertilizantes gratuitos (urea y DAP) para 172 mil hectáreas de maíz y frijol. El objetivo era fortalecer la autosuficiencia alimentaria y apoyar a pequeños productores, especialmente en contextos de incertidumbre global y alza de precios. Oaxaca se sumó así a los estados más marginados como Guerrero y Chiapas dentro de las nueve entidades atendidas por el programa en 2022. Se entregaron más de 51 mil toneladas de fertilizante a través de 73 centros de distribución, y se brindó capacitación y acompañamiento técnico para un uso eficiente del insumo y cuidado de suelos y agua (El Herald de México, 2022).

Frente al escenario descrito, los organismos regionales e internacionales — incluyendo la FAO, CEPAL, el IICA y la ALADI— también impulsaron medidas, reforzando su cooperación técnica y política a través de la actualización del Plan para la Seguridad Alimentaria y Nutrición y Erradicación del Hambre (Plan SAN CELAC) hacia 2030. Esta hoja de ruta regional, impulsada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), articula medidas de corto, mediano y largo plazo para hacer frente a crisis alimentarias, con un enfoque multisectorial, de derechos humanos y de desarrollo sostenible.

Entre las principales líneas de acción del Plan actualizado se destacan, el fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso físico y económico a alimentos nutritivos, particularmente en poblaciones vulnerables. Se promueven mecanismos como compras públicas a la agricultura familiar, políticas de protección social sensibles a la nutrición y fomento del empleo rural. A su vez, se impulsa aumento de la resiliencia regional

mediante inversiones en producción sostenible, infraestructura logística, y reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos. Se incentiva además el uso eficiente de recursos naturales y la adaptación al cambio climático. Además, se promueve la facilitación del comercio intrarregional para reducir la dependencia externa de alimentos y fertilizantes. Se fomentan la armonización normativa, la transparencia de los mercados y la integración de productores de pequeña escala en cadenas de valor. Finalmente, se brinda apoyo técnico y financiero a través de la FAO, CEPAL, IICA y otros organismos multilaterales, mediante cooperación Sur-Sur, plataformas de monitoreo, asistencia técnica, generación de datos y diseño de políticas nacionales alineadas con el Plan SAN CELAC.

En resumen, la respuesta de los organismos internacionales ante la crisis alimentaria provocada por la guerra en Ucrania no se limitó a medidas paliativas, sino que avanzó hacia una agenda estructural que busca construir sistemas agroalimentarios más inclusivos, resilientes y sostenibles, en línea con los ODS y el derecho humano a la alimentación adecuada.

América Latina y el Caribe es una región profundamente heterogénea en términos económicos, fiscales e institucionales, y esta desigualdad estructural se tradujo en respuestas dispares frente al shock externo provocado por el conflicto en Ucrania. Si bien el aumento de los precios internacionales de los alimentos y los fertilizantes afectó a todos los países, la capacidad de reacción de los Estados fue marcadamente desigual.

Por un lado, economías con mayor margen fiscal, como Brasil, México o Argentina, pudieron desplegar programas específicos para amortiguar el impacto de la crisis: subsidios a la producción agrícola, transferencias directas a sectores vulnerables, planes nacionales de fertilización o controles temporales de precios. En contraste, países con recursos fiscales limitados, como Haití, El Salvador o Nicaragua, enfrentaron grandes restricciones para implementar políticas de contención, y en muchos casos dependieron en mayor medida de la asistencia internacional y de los organismos multilaterales para sostener mínimamente el abastecimiento o el consumo.

Más allá de estas diferencias en las capacidades fiscales, otro rasgo común fue el carácter transitorio y paliativo de muchas de las medidas implementadas. A pesar de la magnitud de la crisis, pocas iniciativas avanzaron sobre los desafíos estructurales que hacen a la vulnerabilidad regional: la fuerte dependencia externa de insumos críticos (como los fertilizantes) y la escasa resiliencia de los sistemas agroalimentarios ante choques globales.

A esto se suman los límites observados en la implementación de los programas, incluso en países con mayores capacidades. La burocracia estatal, la debilidad institucional en

algunos casos y la falta de articulación entre distintos niveles de gobierno y organismos internacionales afectaron la eficacia y el alcance de las respuestas. En consecuencia, si bien hubo acciones relevantes, estas no siempre llegaron con la velocidad, escala o sostenibilidad necesarias para evitar un deterioro de las condiciones alimentarias en las poblaciones más vulnerables de la región.

Este panorama evidencia que la crisis provocada por la guerra en Ucrania no solo profundizó las tensiones existentes, sino que reveló las debilidades estructurales y la fragmentación de las respuestas públicas en América Latina y el Caribe, lo cual refuerza la necesidad de construir políticas regionales más coordinadas, equitativas y de largo plazo.

A modo de conclusión, si bien los progresos han sido heterogéneos entre las subregiones, vemos que tanto por su matriz productiva agrícola, que no la hace dependiente de los alimentos del Mar Negro, por los programas gubernamentales para palear la inflación proveniente de los mercados internacionales y al ser una región sin conflictos armados, hicieron que América Latina y el Caribe fuese la mejor posicionada de las tres estudiadas. Esta redujo sus números de subalimentación pese a las repercusiones del conflicto en Ucrania, a diferencia de las otras dos regiones.

3.3- África: entre dependencias estructurales y choques globales

La relativa ausencia de variaciones en el hambre a nivel mundial de 2021 a 2022 oculta diferencias sustanciales en el plano regional. Se han logrado progresos en la reducción de esta en la mayoría de las regiones de América Latina y Asia, pero sigue aumentando en todas las subregiones de África. La proporción de la población que padece hambre es mucho más elevada en África en comparación con las demás regiones del mundo: con un 20,4% frente al 8,5 % en Asia, el 6,5 % en América Latina y el Caribe y el 7 % en Oceanía (FAOSTAT, 2025).

Como vimos en los capítulos anteriores, previo al estallido del conflicto en Ucrania en febrero de 2022, diversos países africanos mantenían una marcada dependencia estructural de las importaciones de cereales provenientes de Rusia y Ucrania. Según datos de la UNCTAD, África importaba más del 44% de su trigo de estos dos países, siendo Egipto, Sudán, Nigeria, Somalia y Kenia algunos de los principales receptores (UNCTAD, 2022).

La invasión rusa a Ucrania y la consiguiente militarización del Mar Negro interrumpieron abruptamente el flujo comercial, desencadenando un aumento global de los precios de los alimentos. El conflicto representó así un punto de inflexión en la seguridad

alimentaria de África, exacerbando vulnerabilidades estructurales preexistentes y colocando en tensión las capacidades estatales y regionales de respuesta.

A esta situación se suma el factor que mencionamos en el primer capítulo, que el continente africano se encuentra atravesado por muchos conflictos, siendo la región con la mayor cantidad en el mundo, registrando 16 escenarios activos que representaron el 49 % del total global. Entre los más relevantes se encontraban los conflictos en Etiopía (regiones de Tigré y Oromiya), Sudán (Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul), Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Somalia, Libia, Mali, Camerún, Mozambique, República Centroafricana y la región del Lago Chad (Boko Haram). Muchos de estos conflictos presentan una naturaleza interna internacionalizada, lo que refleja la participación de actores externos y la complejidad de su resolución (Escola de Cultura de Pau, 2023).

Estos escenarios bélicos ya generaban una grave situación de inseguridad alimentaria y humanitaria, producto de desplazamientos forzados, destrucción de infraestructura, pérdida de medios de vida y la interrupción de los ciclos productivos agrícolas. En este contexto, la guerra en Ucrania operó como un factor multiplicador de la crisis existente. La interrupción de las exportaciones de cereales y fertilizantes desde Rusia y Ucrania, sumada al aumento generalizado de los precios de alimentos y combustibles a nivel global, profundizó la fragilidad de los sistemas alimentarios africanos, especialmente en países en conflicto.

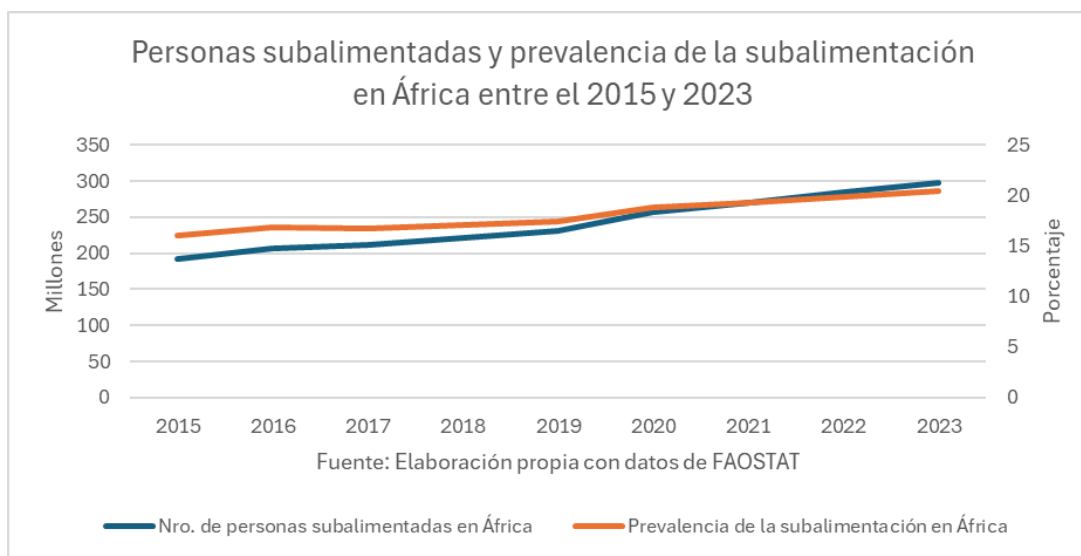
La combinación de guerras locales con una disrupción del comercio internacional generó un efecto doble: por un lado, restringió el acceso físico a los alimentos en zonas afectadas por la violencia; por otro, incrementó el costo de los insumos básicos para la producción local, como los fertilizantes, dificultando la recuperación agrícola. Esta doble presión intensificó la emergencia alimentaria, contribuyendo a una mayor dependencia de ayuda humanitaria, a pesar de la limitada capacidad de respuesta internacional ante un panorama global de múltiples crisis simultáneas.

En suma, el conflicto en Ucrania exacerbó significativamente la situación de inseguridad alimentaria preexistente en África, donde las guerras internas y los contextos de violencia crónica ya habían puesto a millones de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad. Esta sinergia de factores ha sido uno de los principales impulsores del deterioro en la subalimentación en el continente durante 2022.

La subalimentación continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales del continente africano, y ha experimentado un agravamiento sostenido desde el inicio de la guerra en Ucrania. En 2021, África registraba 269,6 millones de personas subalimentadas, cifra que se incrementó a 284,1 millones en 2022, lo que representa un aumento absoluto de

14,5 millones de personas en tan solo un año. Este deterioro se agudiza aún más en África Subsahariana, donde la población subalimentada pasó de 251,4 millones en 2021 a 264,8 millones en 2022, lo que implica un aumento de más de 13 millones de personas (FAOSTAT, 2025).

Gráfico 40:



Los datos muestran que esta tendencia al alza persistió durante 2023, a diferencia de otras regiones del mundo donde los indicadores de subalimentación comenzaron a estabilizarse o incluso a mejorar. Mientras América Latina, Asia meridional y el Sudeste Asiático mostraron una leve recuperación, África siguió siendo el epicentro del hambre mundial.

En términos relativos, también se observa un incremento en la prevalencia de la subalimentación. En África Subsahariana, esta proporción ha superado ya el 23%, lo que significa que aproximadamente, una de cada cuatro personas en la región no puede acceder a los alimentos necesarios para llevar una vida saludable y activa. A nivel continental, la prevalencia también se sitúa por encima del 20%, con una clara tendencia ascendente desde 2019 (FAOSTAT, 2025).

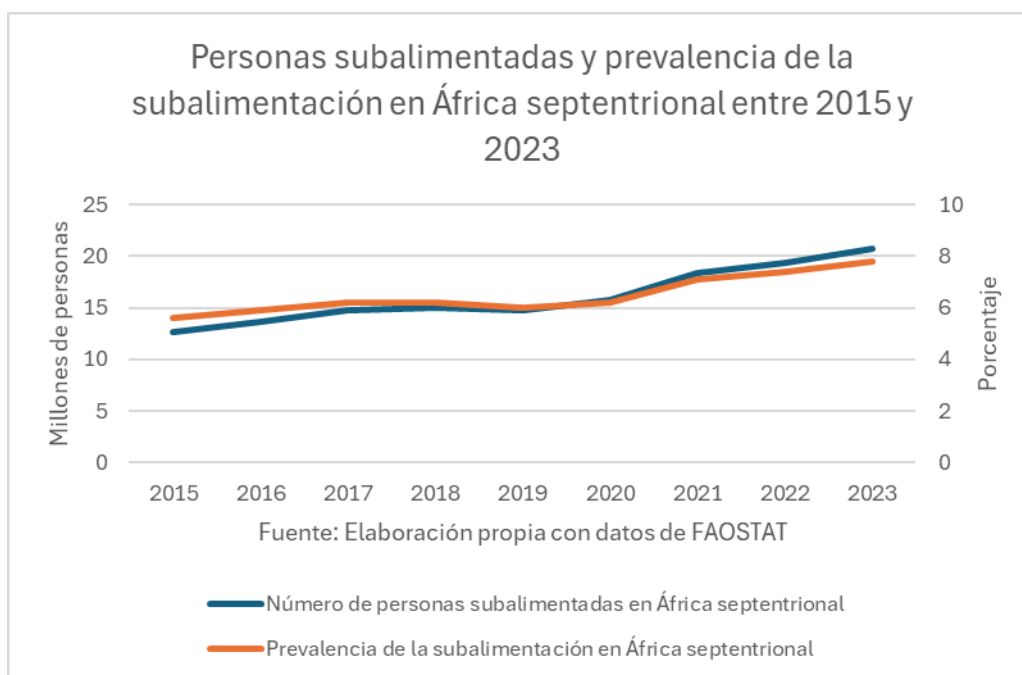
Este agravamiento responde a múltiples factores interrelacionados, como los efectos rezagados de la pandemia de COVID-19, dado que la región aumentaba a un ritmo muy lento en la vacunación de sus habitantes; el alza en los precios internacionales de los alimentos y fertilizantes derivada del conflicto en Ucrania; las disrupciones en las cadenas logísticas globales; y fenómenos climáticos extremos, como sequías e inundaciones. El conflicto armado actuó como un catalizador de una crisis preexistente, profundizando las desigualdades estructurales en el acceso a los alimentos.

Entre los países más afectados encontramos a Nigeria, que registró 31,8 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda, siendo el país más afectado del continente (Comisión Europea, 2025). Etiopía, aquejada por conflictos internos y episodios de sequía, figura entre los 10 países con mayor número de personas en inseguridad alimentaria en 2024 (22 millones). Organizaciones como Oxfam estiman que la inseguridad alimentaria en el este y sur de África, incluida Etiopía, aumentó en un 175 % entre 2019 y 2024, exacerbada por el shock de precios derivados del conflicto (Oxfam, 2025). En el caso de la República Democrática del Congo se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria, un récord para el país y un aumento de 2,5 millones en 3 meses. La escalada del conflicto y la pérdida de medios de subsistencia siguen sumiendo a las familias en la desesperación. El aumento de la inflación, la desorganización de los mercados y el limitado acceso de la ayuda humanitaria dificultan aún más el acceso de las familias a los alimentos (PMA, 2025).

Un caso especial se da en el Cuerno de África, conformado por Somalia, Etiopía y Kenia, esta subregión se ha visto sumida en una de las peores crisis humanitarias de las últimas décadas debido a la convergencia de la peor sequía registrada en 40 años con cinco temporadas consecutivas de lluvias fallidas que devastó cultivos, fuentes de agua y mortandad masiva de ganado, elevando la subalimentación a más de la mitad de la población en el primer país, llegando a los nueve millones de habitantes (FAO, 2022f). Cabe destacar que Somalia importaba más del 90% de su trigo de Rusia y Ucrania, Etiopía casi el 40% y Kenia más del 30% como vimos en el gráfico 32. Este caso ilustra cómo el cambio climático y las crisis geopolíticas globales pueden converger de forma devastadora en regiones ya vulnerables, amplificando el riesgo de hambruna y colapso de los sistemas de sustento.

Por su parte, como vimos en el primer capítulo, África Septentrional ha exhibido niveles de subalimentación relativamente bajos en comparación con otras subregiones del continente. Durante gran parte de la década de 2010, tanto el número absoluto de personas subalimentadas como su proporción respecto de la población total se mantuvieron estables. Entre 2015 y 2019, la región registraba alrededor de 14 a 15 millones de personas subalimentadas, con una prevalencia que oscilaba entre el 6,5% y el 7%, cifras inferiores a las del promedio africano (FAOSTAT, 2025).

Gráfico 41:



Sin embargo, esta tendencia se revirtió de forma sostenida a partir de 2020. La pandemia de COVID-19 primero, y la invasión rusa a Ucrania en 2022 después, generaron una presión significativa sobre el sistema alimentario regional. Para 2021, el número de personas subalimentadas ascendía a 17,7 millones, y en 2022 se elevó aún más, alcanzando cerca de 19,3 millones. En 2023, se superaron los 21 millones de personas subalimentadas, con una prevalencia superior al 8%, marcando el peor indicador de la última década (FAOSTAT, 2025).

Una de las razones centrales detrás de este deterioro es la alta dependencia estructural de África septentrional respecto a las importaciones de cereales, particularmente trigo, desde Rusia y Ucrania. Egipto, por ejemplo, ha sido históricamente el mayor importador de trigo del mundo, y más del 75% de su trigo provenía de estos dos países antes del conflicto, mientras que otros países como Libia y Túnez importaban el 50% del trigo que consumen de estos países (FAOSTAT, 2025). La volatilidad de los precios internacionales de los alimentos provocó aumentos significativos en los costos de los productos básicos, especialmente el pan, afectando con mayor dureza a los sectores urbanos y vulnerables.

Además, el encarecimiento de los insumos agrícolas afectó las campañas de producción nacional, limitando la capacidad de los gobiernos para compensar con producción interna las deficiencias del comercio exterior. A diferencia de otras regiones del mundo que comenzaron a mostrar señales de mejora hacia 2023, África septentrional continúa atrapada

en una trayectoria ascendente de inseguridad alimentaria, producto de vulnerabilidades estructurales combinadas con shocks externos recientes.

El aumento de los precios internacionales de productos esenciales como trigo, maíz, aceite de girasol y fertilizantes, tuvo consecuencias severas en los mercados alimentarios locales de numerosos países africanos. Muchas naciones de África Subsahariana dependían en gran medida de las importaciones desde Rusia y Ucrania; sin embargo, la guerra interrumpió los flujos comerciales, encareció los precios y exacerbó la inflación alimentaria ya elevada por los efectos de la pandemia.

Del informe “Ucrania/Rusia: Mientras continúa la guerra, se avecina una crisis alimentaria en África” de Human Rights Watch se extraen datos contundentes: en Nigeria, la inflación de alimentos alcanzó un 17,2 % interanual en marzo de 2022, y los precios del pan aumentaron más del 30 %. En Camerún, el pan subió un 40 %, y en Kenia, el aceite de cocina aumentó un 6,5 % sólo entre febrero y marzo de 2022 (Human Rights Watch, 2022). Estos aumentos se explican no solo por la escasez de productos básicos —como el trigo y el aceite de girasol, de los que Rusia y Ucrania concentran cerca del 75 % de las exportaciones mundiales— sino también por el alza de fertilizantes y combustibles, lo que encareció la producción agrícola local y el transporte de alimentos en todo el continente (FAO, 2022e).

Más allá de las cifras, el impacto socioeconómico fue profundo y desestabilizador. En países con altos niveles de pobreza e informalidad laboral, donde muchas personas destinan entre el 35 % y el 60 % de sus ingresos a la compra de alimentos, estas subas erosionaron rápidamente el poder adquisitivo, provocando malestar social generalizado (PMA, 2022c). La inseguridad alimentaria se tradujo en protestas, disturbios y movilizaciones populares, que en algunos casos cuestionaron directamente la legitimidad de los gobiernos.

Históricamente, los aumentos abruptos en el precio de los alimentos han sido desencadenantes de crisis sociales y políticas en África, como ocurrió durante la crisis global de precios de 2007–2008 (Berazneva et al, 2013). La situación posterior a la guerra en Ucrania ha seguido una lógica similar: en Sierra Leona, Ghana, Mozambique, Senegal, Etiopía y Sudán, se registraron movilizaciones en respuesta al encarecimiento de los productos básicos (FAO, 2022b).

La debilidad de los sistemas de protección social en la mayoría de los países africanos agrava este panorama. Muchos gobiernos carecen de redes de seguridad suficientemente robustas para amortiguar los efectos de estas crisis en los sectores más pobres. El promedio de gasto de África subsahariana en protección social es del 2 % del PBI, en contraste con una media del 10 % en América Latina y el Caribe o del 17 % en Europa (OIT, 2021). Esto

significa que, cuando los precios suben, millones de personas quedan expuestas al hambre sin ningún tipo de respaldo estatal.

En este contexto, el FMI ha tenido un rol ambivalente en África. Por un lado, junto a otros organismos multilaterales, este ha reconocido públicamente la gravedad del impacto que la subida de precios de alimentos, fertilizantes y energía tiene sobre los países más pobres, particularmente en África, donde amplios sectores de la población destinan la mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos básicos. Sin embargo, el papel estructural del FMI en la región ha sido objeto de críticas. En varios países africanos, el organismo ha impulsado históricamente reformas orientadas a la consolidación fiscal que, en contextos de crisis, tienden a profundizar la inseguridad alimentaria. Estas políticas incluyen la eliminación o reducción de subsidios a productos básicos como el trigo, el pan o los combustibles, sin contar con mecanismos de compensación adecuados. Durante la presente crisis, esta tensión se profundizó. Aunque el FMI ha recomendado apoyo focalizado para proteger a los hogares más pobres, en la práctica muchos gobiernos africanos continúan enfrentando presiones del organismo para recortar subsidios, incluso en un contexto de inflación alimentaria desbordada y debilidad de los sistemas de protección social. Esta situación coloca a millones de personas en riesgo de caer en la pobreza extrema o en inseguridad alimentaria grave, especialmente en países como Nigeria, Camerún o Etiopía, donde el margen fiscal es reducido y la cobertura estatal de asistencia es limitada. El caso africano revela así una contradicción en el accionar del FMI: si bien reconoce la necesidad de respuestas urgentes y centradas en los derechos, su enfoque tradicional de disciplina fiscal puede obstaculizar la implementación efectiva de políticas públicas destinadas a amortiguar los efectos sociales de la crisis alimentaria (Human Rights Watch, 2022).

Por otro lado, la productividad agrícola en África está estrechamente vinculada al uso de fertilizantes. Sin ellos, muchos suelos empobrecidos no pueden sostener cultivos intensivos, agravando la inseguridad alimentaria. En África Subsahariana, por ejemplo, el uso promedio de fertilizantes sintéticos era de apenas 22 kg/ha en 2020, frente a los 146 kg/ha a nivel mundial, siendo el 90% de estos importados (Malpass, 2022). Diversos países del África Central y del sur —como la República Democrática del Congo, Madagascar, Namibia, Níger, Somalia y Sudán— aplican menos de 10 kg/ha, situándose muy por debajo del mínimo necesario para reemplazar los nutrientes extraídos con las cosechas (The Global Economy, 2021).

Este peso importador coloca a los países africanos en una situación de alta vulnerabilidad frente a disrupciones internacionales. Entre los cuales encontramos a Ghana

con la mitad de sus importaciones de fertilizantes provenientes de Rusia, Camerún con más del 30%, Costa de Marfil con un 30%, Mauritania con más del 25%, Congo con más del 20% y Guinea con más del 20% tal como vimos en el gráfico 20 (FAO, 2022e).

La fuerte dependencia de África del uso de fertilizantes importados, sumada a sus bajos niveles históricos de aplicación, hace que cualquier disrupción en las cadenas de suministro internacionales tenga efectos desproporcionados sobre la productividad agrícola del continente. La ruptura parcial o total de estos flujos —como resultado del encarecimiento de los precios internacionales, la escasez de oferta global o restricciones logísticas— compromete seriamente la capacidad de los países africanos para mantener sus niveles de producción alimentaria. La consecuencia directa de esta reducción en la aplicación de fertilizantes es una menor producción de alimentos básicos como maíz, mijo, arroz o tubérculos, cultivos esenciales para la seguridad alimentaria de millones de personas. A su vez, esta menor oferta local puede generar un aumento de la dependencia de importaciones de alimentos, en contextos en los que muchos países ya enfrentan restricciones fiscales, endeudamiento externo y volatilidad de los precios globales. Además, la pérdida de productividad limita las posibilidades de los pequeños productores de generar excedentes comercializables, afectando sus ingresos y la economía rural en general.

Frente a las disrupciones globales en los mercados de alimentos y fertilizantes provocadas por la guerra en Ucrania, múltiples actores internacionales y regionales activaron respuestas orientadas a mitigar los efectos más inmediatos sobre la seguridad alimentaria en África. Estas medidas, aunque parciales y desigualmente implementadas, permitieron evitar un deterioro aún más severo de la situación humanitaria en 2022 y 2023.

Una de las principales iniciativas fue la ya mencionada “Iniciativa de Granos del Mar Negro”, acordada en julio de 2022 entre Ucrania, Rusia, Turquía y las Naciones Unidas. La cual permitió liberar parcialmente los envíos de granos desde los puertos ucranianos bloqueados. Aunque su impacto fue limitado y temporal —el acuerdo fue suspendido en julio de 2023—, permitió que más de 30 millones de toneladas de cereales llegaran a países necesitados, incluidos varios africanos como Egipto, Etiopía, Somalia y Sudán (ONU, 2023).

El PMA intensificó sus operaciones de emergencia en África a partir de 2022, con intervenciones en más de 20 países del continente. Entre las acciones destacadas se encuentran las operaciones ampliadas en Somalia, Etiopía, Sudán del Sur y Nigeria, donde millones de personas enfrentaban inseguridad alimentaria aguda (PMA, 2022d). En paralelo, la FAO impulsó programas de distribución de semillas, fertilizantes y asistencia técnica orientados a pequeños agricultores, especialmente en zonas rurales afectadas por la crisis

(FAO, 2023). Estas acciones buscaron sostener la capacidad productiva local en un contexto de encarecimiento generalizado de los insumos.

Desde el ámbito regional, el Banco Africano de Desarrollo (AfDB) puso en marcha en 2022 el “African Emergency Food Production Facility”, un fondo de 1.500 millones de dólares destinado a apoyar a más de 20 millones de agricultores africanos con el objetivo de impulsar rápidamente la producción de cereales y mejorar el acceso a fertilizantes (AfDB, 2022). Esta iniciativa también buscó fortalecer la autosuficiencia agrícola de la región frente a los riesgos de suministro global. Por otro lado, en 2022, el *Africa Fertilizer Financing Mechanism* (AFFM), gestionado por el AfDB, facilitó el acceso de pequeños agricultores africanos a fertilizantes mediante mecanismos de garantías de crédito. Entre los principales logros se destacan la ejecución de proyectos en Tanzania y Nigeria que beneficiaron a más de 636.000 agricultores con la distribución de más de 98.000 toneladas métricas de fertilizantes, así como el lanzamiento de nuevas iniciativas en Ghana, Costa de Marfil y Mozambique (AFFM, 2023). Por su parte, la Unión Africana (UA) fomentó iniciativas de coordinación regional, incluyendo el respaldo a la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) como plataforma para facilitar el comercio intraafricano de alimentos y reducir la dependencia de las importaciones extrarregionales (UNECA, 2025).

Entre las respuestas de los gobiernos locales frente a la crisis de seguridad alimentaria algunos países adoptaron respuestas políticas para contener el malestar social y garantizar el acceso a alimentos básicos. Entre las principales medidas se encontraron los subsidios a productos esenciales, controles de precios, compras públicas de emergencia y ajustes fiscales condicionados por la presión internacional. Sin embargo, estas respuestas fueron desiguales y muchas veces insuficientes. En Nigeria, por ejemplo, el mantenimiento de subsidios al combustible ha sido fuente de debate con el FMI, mientras que en Camerún el gobierno advirtió que la reducción del 60 % de sus importaciones de trigo desde Rusia y Ucrania podría desencadenar una crisis social, promoviendo el uso de sustitutos como el ñame o la yuca (Human Rights Watch, 2022). Estas reacciones revelan la limitada capacidad de muchos Estados africanos para intervenir de manera efectiva ante crisis externas, debido a restricciones presupuestarias, altos niveles de endeudamiento y sistemas de protección social débiles o fragmentarios.

En conclusión, el continente africano enfrentó una agudización crítica de su ya frágil seguridad alimentaria como consecuencia del conflicto en Ucrania, cuya disrupción en los flujos de cereales, fertilizantes y energía amplificó vulnerabilidades estructurales previas. La fuerte dependencia de las importaciones desde Rusia y Ucrania, combinada con fenómenos climáticos extremos, los efectos rezagados de la pandemia, conflictos armados internos, debilidad fiscal y sistemas de protección social insuficientes, derivó en un combo que elevó tanto el número absoluto como la prevalencia de la subalimentación en todas las subregiones del continente. A diferencia de otras partes del mundo que mostraron signos de recuperación hacia 2023, África continuó siendo el epicentro del hambre global, con efectos particularmente devastadores en África Subsahariana y el Cuerno de África. Las respuestas internacionales y regionales, aunque relevantes, fueron parciales y desiguales, y las medidas adoptadas por los gobiernos locales resultaron limitadas frente a la magnitud del desafío. Así, el caso africano ilustra de manera paradigmática cómo las crisis globales, al converger con debilidades estructurales locales, pueden desencadenar emergencias humanitarias de gran escala.

3.4-Medio Oriente: vulnerabilidades, crisis y respuestas internacionales

Medio Oriente se posiciona como una de las regiones más afectadas por el conflicto en Ucrania debido a su alta dependencia estructural de las importaciones de alimentos básicos, en particular trigo, maíz y aceite vegetal, gran parte de los cuales eran adquiridos de los países en guerra. Esta situación reveló con crudeza la vulnerabilidad alimentaria crónica de numerosos países de la región, acentuada por factores como el crecimiento demográfico, el estrés hídrico, la escasez de tierras cultivables, la inestabilidad política y los conflictos armados prolongados.

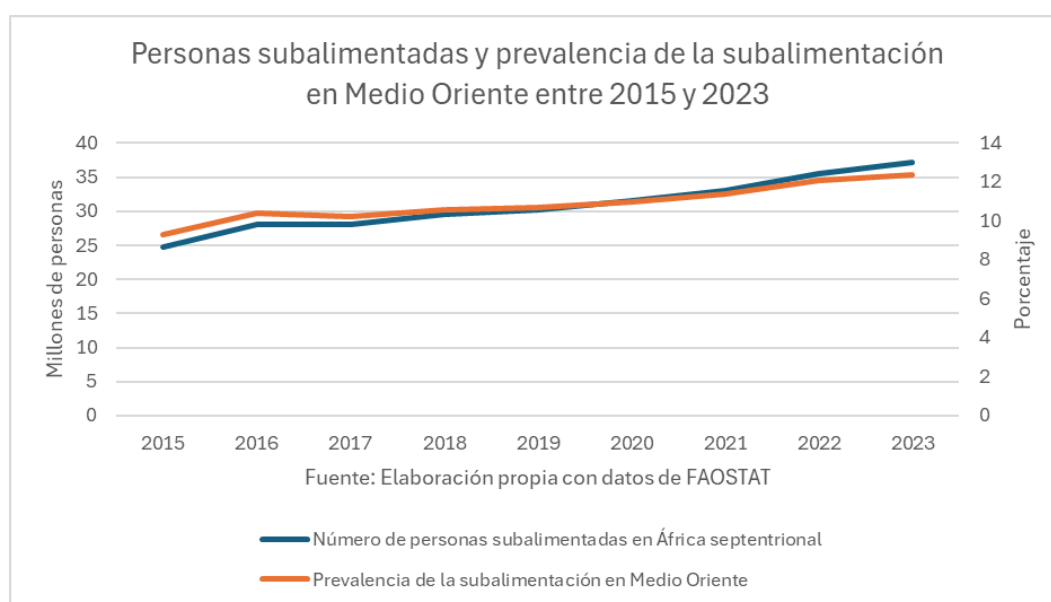
Como vimos en el primer capítulo, previo al estallido de la guerra, diversos países de Medio Oriente ya enfrentaban situaciones complejas en materia de seguridad alimentaria. El súbito aumento en los precios internacionales, las dificultades logísticas derivadas del cierre de rutas comerciales en el mar Negro y la especulación en los mercados agrícolas provocaron una rápida erosión de las capacidades nacionales para sostener estos mecanismos.

En este contexto, el presente apartado se propone analizar los impactos del conflicto ruso-ucraniano sobre la seguridad alimentaria en Medio Oriente desde 2022 hasta 2024. Se examinan los canales de transmisión de la crisis global hacia la región, las consecuencias diferenciadas entre países según su grado de exposición y capacidad de respuesta, las

políticas adoptadas para mitigar sus efectos, así como los desafíos estructurales que continúan condicionando el acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para amplios sectores de la población.

La subalimentación en Medio Oriente ha seguido una tendencia creciente y sostenida en los últimos años, reflejo de una acumulación de crisis estructurales, de choques externos como la pandemia de COVID-19 y conflictos armados internos que han comprometido progresivamente la seguridad alimentaria en la región. Tal como muestra el gráfico 42, tanto el número absoluto de personas subalimentadas como la prevalencia porcentual de la subalimentación experimentaron un incremento significativo entre 2015 y 2023.

Gráfico 42:



En términos absolutos, la población subalimentada en la región pasó de aproximadamente 25 millones de personas en 2015 a más de 37 millones en 2023, lo que representa un aumento de más del 40% en menos de una década. Esta evolución está acompañada por un crecimiento constante en la prevalencia de la subalimentación, que superó el 12% de la población total en 2023, constituyéndose como el valor más alto registrado en los últimos diez años. Este dato reviste particular gravedad si se tiene en cuenta que la región depende fuertemente de las importaciones de alimentos, tiene escasa disponibilidad de recursos hídricos y está expuesta a reiteradas crisis políticas, económicas y ambientales.

Entre los factores que explican este deterioro sostenido, destaca el impacto devastador de los conflictos armados prolongados en Siria y Yemen. En ambos casos, la destrucción de infraestructura, el desplazamiento masivo de poblaciones, la fragmentación institucional y la

obstaculización de los canales humanitarios han imposibilitado el acceso estable y equitativo a los alimentos. Según datos del PMA, cerca del 70% de la población de Yemen sufría inseguridad alimentaria (PMA, 2023b), mientras que, en Siria, tras más de una década de guerra, alrededor de 12,1 millones de personas, es decir, más del 50% de su población presentan dificultades para alimentarse adecuadamente (PMA, 2023c).

Con el conflicto en Ucrania se han profundizado las vulnerabilidades existentes al encarecer los alimentos básicos y afectar las cadenas de suministro internacionales, dado que varios países de la región como Líbano o Yemen dependen en gran medida de las importaciones de cereales desde el mar Negro (FAO, 2022e). La combinación de shocks externos y crisis internas crónicas ha conformado un entorno regional adverso que dificulta los esfuerzos por revertir esta tendencia. En el gráfico 42 se puede observar que Medio Oriente atraviesa una crisis alimentaria creciente, caracterizada por una subalimentación cada vez más extendida y persistente. Por otro lado, se enfrentan al problema del alza de los precios internacionales de los productos alimentarios y fertilizantes. Como vimos anteriormente, en 2022 se alcanzó el récord en lo que respecta a los precios de los cereales según la FAO, y, a su vez, los precios de los fertilizantes también se elevaron a niveles récord, superando a los registrados en la crisis del 2008 (López Calvo, 2022).

Sin embargo, el impacto del conflicto sobre la seguridad alimentaria en Medio Oriente no ha sido homogéneo. Las diferencias estructurales entre los países, su grado de dependencia de las importaciones desde el mar Negro, y sus capacidades institucionales para responder a crisis alimentarias han determinado respuestas y consecuencias dispares. A continuación, se analiza la situación en algunos de los casos más representativos.

Los efectos sobre la seguridad alimentaria fueron particularmente severos en el Líbano, donde más del 70% del trigo importado provenía de los dos países en guerra, la situación fue agravada por la crisis económica, con una inflación de alimentos de tres dígitos (PMA, 2022e) y con la destrucción del puerto de Beirut en 2020, reduciendo su capacidad de almacenamiento y abastecimiento. Yemen y Siria, en situaciones de conflicto prolongado y dependencia casi total de la ayuda humanitaria, vieron incrementarse los niveles de hambre aguda y un deterioro general de la seguridad alimentaria (PMA, 2023b; PMA, 2023c). En contraste, Irak logró mitigar parte de los efectos negativos del conflicto gracias a una combinación de políticas públicas. Irak, pese a su dependencia alimentaria, fijó el precio del trigo y anuló las tasas de aduanas para bienes básicos, para hacer frente a la escasez y a la escalada de precio (Infobae, 2022c).

El PMA ha desempeñado un papel fundamental como principal agencia de respuesta alimentaria en la región frente a las consecuencias de una guerra en el Mar Negro como por las crisis propias de cada uno de los países de la región. Durante 2023, el PMA asistió a millones de personas en Medio Oriente, a pesar de una caída del 40% en los niveles de financiación regional respecto del año anterior (PMA, 2024b). Su intervención se focalizó especialmente en países afectados por conflictos armados, desplazamientos forzados y crisis económicas prolongadas.

En Yemen, el PMA enfrentó una de las operaciones más complejas y de mayor escala. En 2023, la agencia asistió a 15,3 millones de personas a través de la distribución de alimentos. Sin embargo, debido a recortes presupuestarios, se redujo el tamaño de las raciones en un 40, lo que forzó un proceso de priorización basado en niveles de vulnerabilidad. En Siria, donde cerca de 12,9 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria, con una inflación del 144% y luego de atravesar un terremoto devastador, el PMA distribuyó alimentos a 7,1 millones de personas, pero también debió reducir raciones en un 40%, priorizando a los más afectados. En el Líbano, golpeado por una hiperinflación de alimentos del 220% y una fuerte depreciación monetaria, el PMA prestó asistencia a 2,1 millones de personas. En Palestina, el conflicto en Gaza provocó una emergencia humanitaria sin precedentes. A fines de 2023, de una población en situación de inseguridad alimentaria de 2,8 millones, el PMA asistió a 1,6 millones, es decir, a más de la mitad (PMA, 2024b).

A pesar de las restricciones presupuestarias, el PMA logró mantener su papel como actor clave en la respuesta alimentaria en Medio Oriente, adaptando sus estrategias según el contexto de cada país. No obstante, la caída sostenida de la financiación amenaza con socavar los logros alcanzados y comprometer la capacidad de respuesta futura, especialmente en contextos prolongados de crisis humanitaria.

Además del rol crucial desempeñado por el PMA, organismos internacionales como la FAO y el BM cumplieron funciones clave en el monitoreo, la asistencia técnica y el financiamiento de respuestas ante la crisis alimentaria agravada por la guerra en Ucrania en la región de Medio Oriente.

Desde el comienzo del conflicto, la FAO advirtió sobre la alta exposición de los países de Medio Oriente a las perturbaciones del mercado de cereales y fertilizantes, debido a su fuerte dependencia de las importaciones desde el mar Negro. En su informe de marzo de 2022, la organización identificó la región entre las más vulnerables, tanto por su exposición comercial directa a Rusia y Ucrania como por su limitada capacidad fiscal para responder a los shocks de precios, ya que como vimos muchos de ellos se encuentran atravesando

conflictos internos o crisis económicas (FAO, 2022e). En respuesta, la FAO impulsó el Mecanismo de Financiación de Importaciones de Alimentos (Food Import Financing Facility, FIFF), una propuesta dirigida a países de ingresos bajos y medios altamente dependientes de las importaciones alimentarias, con el objetivo de ofrecer apoyo financiero en condiciones favorables para comprar alimentos en los mercados globales y mitigar los efectos del aumento de precios internacionales. A su vez, estos países se comprometían a invertir en productividad agrícola sostenible, reduciendo así futuras necesidades de importación de alimentos (FAO, 2022e). Además, la FAO trabajó en asistencia técnica y fortalecimiento de sistemas estadísticos, colaborando con los ministerios de agricultura y planificación de varios países de la región para mejorar el monitoreo de precios internos, evaluar impactos sobre la producción local y formular planes nacionales de seguridad alimentaria más resilientes.

Por su parte, el BM centró su intervención en proveer asistencia financiera y técnica para amortiguar el impacto social del aumento de los precios alimentarios y energéticos, especialmente en contextos de crisis fiscal, una de sus principales acciones fue el refuerzo de redes de protección social existentes. La institución canalizó su apoyo a través de proyectos específicos de asistencia técnica y financiamiento directo, priorizando los países en situación de mayor vulnerabilidad.

En Yemen, uno de los contextos más críticos, el Banco asignó en 2022 y 2023 un financiamiento de USD 127 millones, que fue implementado en conjunto con el PMA y la FAO. Este programa contribuyó a mejorar el acceso a dietas nutritivas de más de medio millón de personas vulnerables de las zonas con mayor inseguridad alimentaria del país e incluyó distribución de insumos agrícolas y capacitación en medios de vida agrícolas, beneficiando a millones de personas en un contexto de guerra prolongada y colapso institucional (BM, 2022). En Jordania, un país que depende casi en el 40% de sus importaciones de trigo del Mar Negro y donde el aumento de los precios de fertilizantes e insumos agrícolas agravó los desafíos del sector agropecuario, el BM aprobó en octubre de 2022 un préstamo de USD 125 millones para mejorar la resiliencia climática de la agricultura. El proyecto busca fortalecer la eficiencia hídrica, promover prácticas sostenibles y diversificar las fuentes de producción local de alimentos (BM, 2022b). Según el Informe Anual 2022, el BM destinó aproximadamente USD 4900 millones a la región de Medio Oriente para 29 operaciones en la región. Además, proporcionó USD 80 millones en financiamiento especial para proyectos en la Ribera Occidental y Gaza (BM, 2022).

En conjunto, la intervención de la FAO y el BM complementó la asistencia directa del PMA, actuando en los planos financiero, institucional y técnico. La respuesta del BM frente a

la crisis alimentaria en Medio Oriente no se limitó a la provisión de ayuda de emergencia, sino que incorporó un enfoque estructural de resiliencia y adaptación, orientado a reducir la dependencia externa, fortalecer las capacidades institucionales y promover sistemas alimentarios más sostenibles a largo plazo.

En conclusión, el conflicto en Ucrania expuso y agravó las vulnerabilidades estructurales que ya condicionaban la seguridad alimentaria en Medio Oriente, región caracterizada por su alta dependencia de las importaciones de alimentos y fertilizantes, su fragilidad institucional, la persistencia de conflictos armados y los efectos rezagados de la pandemia que afectaban particularmente a los países en crisis. Entre 2015 y 2023, la subalimentación creció de forma sostenida, alcanzando niveles récord tanto en número absoluto de personas afectadas como en su prevalencia relativa. La guerra actuó como un shock externo de gran magnitud que, al provocar interrupciones logísticas y un alza de precios a escala global, generó impactos desiguales pero generalizados en los países de la región. Yemen, Siria y Líbano sufrieron las consecuencias más severas. La respuesta internacional, encabezada por el PMA, la FAO y el BM, fue crucial para evitar un deterioro aún mayor, aunque limitada por las restricciones presupuestarias y las condiciones de inestabilidad crónica. En conjunto, el caso de Medio Oriente demuestra cómo una crisis geopolítica lejana puede amplificar desigualdades existentes y profundizar situaciones de inseguridad alimentaria cuando confluyen dependencias externas, vulnerabilidad social y debilidades institucionales.

Conclusiones

La presente tesina desarrolló y sustentó la hipótesis de que la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente, como parte del Sur Global, fue afectada por la guerra en Ucrania entre 2022 y 2024 porque se interrumpieron las cadenas de suministros globales de productos agrícolas tanto ucranianos como rusos y de fertilizantes rusos, incrementándose los precios internacionales en ambos casos e impactando en el costo final de los mismos en los países de las tres regiones. Asimismo, en África y Medio Oriente también se atravesó una situación de desabastecimiento ligada a la dependencia de estas dos regiones con respecto a las importaciones de alimentos desde el Mar negro.

De este modo, sostuvimos que la guerra en Ucrania, en tanto evento exógeno de gran escala, constituyó un caso paradigmático para comprender cómo un conflicto armado localizado puede desencadenar perturbaciones con efectos globales asimétricos, actuando como catalizador de vulnerabilidades preexistentes. La guerra puso de manifiesto la interdependencia de los sistemas agroalimentarios globales y expuso las debilidades estructurales frente a choques externos de las diferentes regiones del Sur Global.

En el caso de América Latina y el Caribe, fue la única que mejoró sus números de subalimentación desde que comenzó la guerra gracias a una combinación de factores como la no dependencia de alimentos provenientes del Mar Negro de los países de América Latina, ya que cuenta con una matriz productiva agrícola, ya que sostuvo medidas gubernamentales transitorias para contener la inflación alimentaria en los diferentes países, producto del aumento internacional del precio los alimentos y de los fertilizantes. Sin embargo, estos logros no fueron homogéneos entre los países de la región. Si bien en términos generales los índices de subalimentación mejoraron, esto no sucedió en la subregión del Caribe dada su limitada capacidad fiscal y dependencia de alimentos, amplificando el impacto del conflicto.

En el caso de África, el estallido de la guerra provocó un agravamiento significativo de su ya delicada situación de seguridad alimentaria dado que la interrupción en los suministros de alimentos y fertilizantes intensificó fragilidades estructurales previas. La marcada dependencia de importaciones procedentes de Rusia y Ucrania conformaron un escenario propicio para el incremento tanto de la magnitud como de la proporción de personas subalimentadas en todas las subregiones. Mientras otras áreas del planeta comenzaron a evidenciar señales de recuperación hacia 2023, el continente africano se mantuvo como epicentro del hambre global, con impactos especialmente graves en África Subsahariana y el Cuerno de África. Las respuestas internacionales y regionales, aunque

pertinentes, resultaron fragmentarias y desiguales, y las políticas implementadas por los gobiernos locales fueron insuficientes para contrarrestar la envergadura de la crisis. De este modo, el caso africano constituye un ejemplo paradigmático de cómo la confluencia entre crisis globales y vulnerabilidades internas puede detonar emergencias humanitarias de gran alcance.

Finalmente, en Medio Oriente, la guerra en Ucrania reveló y profundizó las fragilidades estructurales que ya condicionaban la seguridad alimentaria en la región, marcada por su fuerte dependencia de las importaciones de alimentos y fertilizantes. Para 2023, la prevalencia y el número absoluto de personas en situación de subalimentación alcanzaron máximos históricos. El conflicto actuó como un shock externo que al interrumpir las cadenas globales de suministro y generar incrementos pronunciados de precios a nivel global, incrementando los costos de importación, esto produjo impactos generalizados, pero de intensidad variable en la región, siendo Yemen, Siria y Líbano los países más severamente afectados, dadas las críticas situaciones ya existentes en estos países. La asistencia internacional, liderada por el PMA, la FAO y el BM, resultó determinante para evitar un deterioro más profundo.

En síntesis, la guerra en Ucrania representa una amenaza significativa para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular del ODS 2 (Hambre Cero), al intensificar la subalimentación a nivel global, dificultando así el avance hacia la meta de erradicar el hambre para 2030.

Referencias bibliográficas:

- AcademiaLab (2023). “Norte Global y Sur Global”. [En línea], [Norte Global y Sur Global AcademiaLab](#)
- African Development Bank Group (AfDB) (2022). “Supporting African countries through a global food crisis: The African Development Bank’s African Emergency Food Production Facility”.
- Baffes, J. y Temaj, A. (2025). “Fertilizer prices stabilize amid lower input costs and trade shifts”. *Banco Mundial*. [En línea], [Fertilizerpricesstabilizeamidlower input costs and tradeshifts](#)
- Banco Mundial (2010). “Food Security and Conflict”. *Agriculture and Rural DevelopmentDepartment*.
- Banco Mundial (2011). “Rising Global Interest in Farmland: Can it yield sustainable and equitable benefits?”.
- Banco Mundial (2022). “Informe anual 2022: Ayudar a los países a adaptarse a un mundo cambiante”.
- Banco Mundial (2022b). “US\$125 million to Support Jordan’s Agriculture Sector and Improve its Climate Resilience”. [En línea], [US\\$125 milliontoSupportJordan’sAgriculture Sector and ImproveitsClimateResilience](#)
- BBC (2023). “Cómo afecta a Ucrania y el mundo que Rusia no haya renovado el acuerdo para transportar granos a través del Mar Negro”. *BBC News Mundo*. [En línea], <https://www.bbc.com/mundo/articles/cv25d2yy12eo>
- Berazneva, J. y Lee, D. (2013). “Explaining the African food riots of 2007-2008: An empirical analysis”. [En línea], [ExplainingtheAfricanfoodriots of 2007–2008: Anempiricalanalysis - ScienceDirect](#)
- Brandan, A. y Rajabi, R. (2011). “Food Security and Food Sovereignty Occupied In Palestine Territories”.
- CARE (2019). “6 meses después del ciclón Idai: CARE emite graves advertencias mientras los estudios muestran que 41 millones de personas se enfrentan al hambre en el sur de África”. [En línea], [Cycloneldai 6 Monthson: CARE Issues Direwarnings - CARE](#)
- CELAC (2014). “Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025”.
- CELAC (2018). “Estrategia Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Agrícola y la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe (2018-2030).

CEPAL (2009). “Inseguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe”.

CEPAL (2022). “Efectos económicos y financieros en AL y el Caribe del conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania”.

Comisión Europea (2025). “Food crises: in 2024, nearly 300 m people suffered high levels of acute food insecurity”. [En línea], [Food crises: in 2024, nearly 300 m peoplesufferedhighlevelsof acute foodinsecurity - EuropeanCommission](#)

Da Silva J., Del Grossi M., De França C., (2012). “Fome Zero (Programa Hambre Cero): La experiencia brasileña”.

Donchenko O., Iavorskyi P., Nivievskyi O. (2020). “Assessing the role of small farmers and households in agriculture and the rural economy and measures to support their sustainable development”. *Kyiv School of Economics*.

DW (2022). “Agricultura mundial depende de fertilizantes rusos” [en línea], <https://p.dw.com/p/48eT5>

El Heraldo de México (2022). “Secretaría de Agricultura entrega fertilizante gratuito en Oaxaca”. [En línea], [Secretaría de Agricultura entrega fertilizante gratuito en Oaxaca - El Heraldo de México](#)

Escola de Cultura de Pau. Alerta 2023! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Barcelona: Icaria, 2023.

ESCWA (2021). “Multidimensional Poverty in Lebanon: Painful Reality and Uncertain Prospects”.

FAO (1996). “Cumbre Mundial sobre la Alimentación: 13-17 de noviembre 1996 Roma Italia”. [En línea], [Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial](#)

FAO (2000). “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo: 2000”

FAO (2003). “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo: 2003”.

FAO (2005). “Objetivos de Desarrollo del Milenio: Una mirada desde América Latina y el Caribe”.

FAO (2008a). “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo: 2008”.

FAO (2008b) 2. “Crop Prospects and Food Situation”.

FAO (2009). “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo: 2009”.

FAO (2011). “Seguridad Alimentaria y Nutricional: Conceptos Básicos”. [En línea], [Conceptos Básicos | Programa Especial para la Seguridad Alimentaria \(PESA\) Centroamérica | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura](#)

FAO (2015). “Perspectivas de cosechas y situación alimentaria”.

FAO (2016). “Corredor Seco América Central: Informe de situación – junio 2016”.

FAOSTAT. “Food and agriculture data” [En línea], [FAOSTAT](#)

FAO (2019). “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo: 2019”.

FAO (2019b). “Special Report: FAO/WFP crop and food security assessment mission to the Syrian Arab Republic”.

FAO (2021). “Hunger Hotspots: Early warnings on acute food security”.

FAO (2022a). “Hunger Hotspots February to May 2022 Outlook”.

FAO (2022b). “Hunger Hotspots June to September 2022 outlook”.

FAO (2022c). “El estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2022”

FAO (2022d). “América Latina y el Caribe: Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional”.

FAO (2022e). “The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risks associated with the war in Ukraine”.

FAO (2022f). “DROUGHT IN THE HORN OF AFRICA: Rapid response and mitigation plan to avert a humanitarian catastrophe”.

FAO (2023). “FAO in Africa: Highlights in 2022”. Accra <https://doi.org/10.4060/cc4377en>

FAO (2024). “El estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2024”

Faquin (2023). “The impact of Russia-Ukraine conflict on global food security”.

France 24 (2023). “¿Cómo afecta la guerra en Ucrania a la seguridad alimentaria?” [en línea], [¿Cómo afecta la guerra en Ucrania a la seguridad alimentaria?](#)

Gilpin (2001). “Global Political Economy: Understanding the international economic order”.

Growth Lab Harvard University (2025). “The Atlas of Economic Complexity”.

Gobierno Brasileño (2014). “Relatório indica que Brasil saiu do Mapa Mundial da Fome em 2014”. [En línea], [Relatório indica que Brasil saiu do Mapa Mundial da Fome em 2014 — Casa Civil](#)

Hermosilla, I. (2023). “Qué es el Bolsillo Familiar Electrónico:Cuál es su monto, cuándo se paga y quiénes son beneficiados”. *Biobio Chile*. [En línea], [Qué es el Bolsillo Familiar Electrónico:Cuál es su monto, cuándo se paga y quiénes son beneficiados](#)

Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, Menéndez Valencia, Mendoza

The Global Economy (2021). “Fertilizer use - Country rankings”. [En línea], [Fertilizer use in Africa | TheGlobalEconomy.com](#)

Human Rights Watch, (2022). “Ukraine/Russia: As War Continues, Africa Food Crisis Looms”. [En línea], [Ukraine/Russia: As War Continues, AfricaFood Crisis Looms | Human RightsWatch](#)

Infobae (2022a). “¿Sin fertilizantes para el campo?: ya se habla de problemas de disponibilidad y las pérdidas que podrían llegar a USD 1.800 millones”. [En línea], [¿Sin fertilizantes para el campo?: ya se habla de problemas de disponibilidad y las pérdidas que podrían llegar a USD 1.800 millones - Infobae](#)

Infobae (2022b). “Bono Alimentario 2022: cuánto se dará, cuándo se entrega y en qué consiste”. [En línea], [Bono Alimentario 2022: cuánto se dará, cuándo se entrega y en qué consiste - Infobae](#)

Infobae (2022c). “Irak fija el precio del trigo y anula la tasa de aduana por subida de precios”. [En línea], [Irak fija el precio del trigo y anula la tasa de aduana por subida de precios - Infobae](#)

Institute For The Study of War (2023). Russian Offensive Campaign Assessment, December 31, 2023. [En línea], <https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-31-2023>

Koc, M., Jernigan, C., Das, R. (2007). “Food Security and Food Sovereignty in Iraq: The Impact of War and Sanctions on the Civilian Population”.

Kvasha S., Dibrova A., Nivievskyi O. y Martyshchuk P. (2022). “Agricultural Policy in Ukraine”.

López Calvo, Lara (2022). “El precio de los fertilizantes en máximos históricos: qué significa para la Economía”. *El Cronista*. [En línea], [El precio de los fertilizantes en máximos históricos: qué significa para la economía - El Cronista](#)

Lukyanova (2022). “Russian Agricultural Industry under Sanction Wars”.

Organización Mundial del Comercio (OMC) (2023). “One year of war in Ukraine: Assessing the impact on global trade and development”.

Malpass, D. (2022). “A transformed fertilizer market is needed in response to the food crisis in Africa”. *World Bank Blogs*. [En línea], [A transformed fertilizer market is needed in response to the food crisis in Africa](#)

Ministerio de Economía (2022). “Lanzamiento del programa Precios Justos”. [En línea], [Lanzamiento del programa Precios Justos | Argentina.gob.ar](#)

Ministerio de Economía (2023). “Destinan 30 millones de dólares para financiar la adquisición de urea fertilizante para pequeños y medianos productores de trigo y maíz”. [En línea], [Destinan 30 millones de dólares para financiar la adquisición de urea fertilizante para pequeños y medianos productores de trigo y maíz | Argentina.gob.ar](#)

ONU (2000a). “Documentación de la ONU: Desarrollo” [en línea], [2000-2015 - Objetivos de Desarrollo del Milenio - Documentación de la ONU : Desarrollo - Research Guides at UnitedNationsDagHammarskjöld Library](#)

ONU (2000b). “Cumbre del Milenio, 6 a 8 de septiembre de 2000, Nueva York”. [En línea], [Cumbre del Milenio | Naciones Unidas](#)

ONU (2015). “Objetivo 2: Poner fin al hambre”. [En línea], [Hambre y seguridad alimentaria - Desarrollo Sostenible](#)

ONU (2016). “Resolución aprobada por la Asamblea General el 1 de abril de 2016”. [En línea], [DocumentViewer](#)

ONU (2019). “Yemen: 2019 Humanitarian Needs Overview”.

ONU (2023). “Un año de la Iniciativa del Mar Negro: hechos y cifras clave”. [En línea], [Un año de la Iniciativa del Mar Negro: hechos y cifras clave | ONU GINEBRA](#)

OXFAM, (2012). “Crisis alimentaria en el Cuerno de África: Informe de avance Julio 2011 a Julio 2012”.

OXFAM (2025). “Hunger skyrockets by nearly 80 percent in Eastern and Southern Africa over past five years amidst worsening water crisis”. [En línea], [Hungerskyrocketsbynearly 80 percent in Eastern and SouthernAfricaoverpastfiveyearsamidstworseningwater crisis | Oxfam International](#)

Patel (2007). “Stuffed & Starved: The hidden battle for the world food system”.

PMA (2010). “Executive Brief: Yemen Comprehensive Food Security Survey (CFSS) 2009/10”.

PMA (2022a). “Executive Board Annual session Rome, 20–24 June 2022: WFP food procurement in 2021”.

PMA (2022b). Executive Board Annual session Rome, 26–30 June 2022: WFP food procurement in 2022”.

PMA (2022c). “Global Report on Food Crisis 2022”.

PMA (2022d). “WFP Global Operational Response Plan 2022”.

PMA (2022e). “Food security implications of the Ukraine conflict”.

PMA (2023a). “War in Ukraine drives global food crisis”.

PMA (2023b). “Yemen: Annual Country Report 2023”. *Country Strategic Plan 2023-2025*.

PMA (2023c). “WFP Syria Country Brief”.

PMA (2024a). Executive Board Annual session Rome, 24–28 June 2024: WFP food procurement in 2023”.

PMA (2024b). “2023, A year in review: WFP in the Middle East, Northern Africa and Eastern Europe”.

PMA (2025). “República Democrática del Congo”. [En línea], [República Democrática del Congo | WorldFoodProgramme](#)

Relief Web (2008). “Haiti: Food crisis report Jul 2008”. [En línea], [Haiti: Food crisis report Jul 2008 - Haiti | ReliefWeb](#)

Reuters (2011). “El Cuerno de África vive la peor sequía en 60 años”. [En línea], [El Cuerno de África vive la peor sequía en 60 años | Reuters](#)

Rodríguez Zurro, Tomás y Terré Emilce (2024). “El Gran Rosario cayó al tercer puesto del ranking de nodos portuarios agroexportadores del mundo en 2023”. *Bolsa de Comercio de Rosario*. [En línea], <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/el-gran-6>

OIT (2021). “Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022”. *Organización Internacional del Trabajo*.

Serrichio, S. (2022). “Por menor fertilización, en 2023 podrían perderse entre 3.400 y 4.600 millones de dólares de exportaciones”. *Infobae*. [En línea], [Por menor fertilización, en 2023 podrían perderse entre 3.400 y 4.600 millones de dólares de exportaciones - Infobae](#)

Shagaida N. y Ternovsky D. (2023). “Russian Economy in 2022: Trends and Outlooks”. *Gaidar Institute for Economic Policy*.

Strielkowski W., Mukhoryanova O., Kuznetsova O., Syrov Y. (2024). “Sustainable regional economic development and land use: a case of Russia”.

Targos, R. (2024). “Fertilizer: Made in Brazil”. *AgriBusiness Global*. [En línea], [Fertilizer: Made in Brazil - AgriBusiness Global](#)

OWP (2024). “The Coming Disaster In The Euphrates-Tigris Basin”. [En línea], [The Coming Disaster In The Euphrates-Tigris Basin – The Organization for World Peace](#)

UNCTAD (2022). “The impact on trade and development of the war in Ukraine”.

UNCTAD (2023). “A trade hope: The impact of the Black Sea Grain Initiative”.

UNECA (2025). “Advancing the implementation of the African Continental Free Trade Area: Proposing transformative strategic actions”. *Economic report on Africa*.

UNRWA (2014). “Supervivencia en Gaza”. [En línea], [Supervivencia en Gaza, cada día más difícil - UNRWA](#)

U.S. Department Of Agriculture (2020). “Russia: Crop Production Maps”. *Foreign Agricultural Service*. [En línea], https://ipad.fas.usda.gov/rssiws/al/rs_cropprod.aspx

U.S. Department Of Agriculture (2020). “Ukraine: Crop Production Maps”. *Foreign Agricultural Service*. [En línea], https://ipad.fas.usda.gov/rssiws/al/umb_cropprod.aspx

U.S. Department Of Agriculture (2022). “Impacts and Repercussions of Price Increases on the Global Fertilizer Market”. *Foreign Agricultural Service*. [En línea], [Impacts and Repercussionsof Price Increasesonthe Global FertilizerMarket | USDA ForeignAgriculturalService](#)

Ziegler, J. (2005). “ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS: The right to food” *Commission on Human Rights: Report of the Special Rapporteur on the right to food*.